BIBLIOTECA POLITICA TAURUS

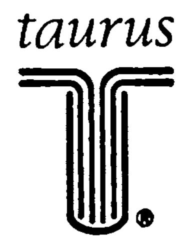


43

EL SOCIALISMO DEMOCRATICO

IGNACIO SOTELO

EL SOCIALISMO DEMOCRATICO



Cubierta de EL CUBRI

TAURUS EDICIONES, S. A.
Velázquez, 76, 4.° - MADRID-1

ISBN: 84-306-3043-0
Depósito Legal: M. 10.205 - 1980

PRINTED IN SPAIN

Para mi hijo Ramón

PRESENTACION

Las páginas que han terminado por formar este libro fueron escritas a partir de junio de 1976, respondiendo a distintas demandas y ocasiones, que coincidían en un mismo afán de obtener cierta claridad sobre lo que significa el *socialismo democrático* en este último tercio del siglo XX y en una situación histórica tan lábil y peculiar como la que está pasando nuestro país desde la muerte del dictador. Temas y modos de tratarlos me han venido impuestos desde fuera, condicionados por las polémicas subyacentes en torno al marxismo, el revisionismo, la socialdemocracia, el leninismo, el eurocomunismo. Después de cuarenta años de forzado silencio, manteniendo los temas congelados o en sordina, el arribo de la libertad, al desempolvar el viejo vocabulario político, nos incita a preguntarnos si aún sirve. No faltarán sedicentes innovadores que repudien, no ya sólo esta retahíla de conceptos, sino incluso el de socialismo, como residuos decimonónicos, para terminar descubriendo el liberalismo más netamente dieciochesco.

El resultado ha sido un *ensayo coyuntural* sobre el concepto de socialismo democrático. *Ensayo* en su doble sentido de primer tanteo a la búsqueda de un camino nuevo y de género literario que se salta la prueba y la documentación, limitándose a comunicar las conclusiones. *Coyuntural*, tanto por la función a que aspira —contribuir a una mayor claridad en la actual discusión sobre el socialismo— como por los elementos que maneja, que encajan todos en coordenadas históricas y geográficas bien precisas. El objetivo es diferenciar el socialismo democrático de los conceptos concurrentes, socialismo marxista y so-

cialdemocracia. No se trata con ello de un mero ejercicio retórico —qué importará cómo se llame el santo—, sino de hacer explícitos las estrategias y modos de acción política que se esconden en cada uno de estos conceptos.

Aunque el autor sea profesional y vocacionalmente un científico social, no ha escrito un libro de ciencia, sino uno eminentemente político. Ha eliminado todo análisis de realidad —dándolos por sobreentendidos—, no porque no se base en conocimientos e hipótesis que hoy gozan de cierto predicamento, sino porque su inclusión hubieran distorsionado el alcance y el tono de este libro, sin adquirir por ello mayor credibilidad científica. Frente a cualquier idealización de la dialéctica, teoría y praxis, conviene dejar constancia de la disparidad constitutiva de decisión y conocimiento. Continuamente tenemos que tomar decisiones personales y colectivas del mayor alcance, y no sólo en política, basándonos en conocimientos muy embrionarios y parciales. La urgencia de la práctica no puede esperar a que madure la teoría; además, no hay una teoría que implique de por sí una práctica concreta determinada. El análisis científico sirve indudablemente para explicar una situación, así como para enunciar las consecuencias probables, queridas y no queridas, de esta o aquella decisión, pero sin olvidar que no cabe análisis global que incluya todos los factores, ni siquiera los llamados esenciales, ya que la importancia de un factor se impone desde las distintas metas a que aspiramos, y tiene, por tanto, su buena porción de subjetividad.

El autor sabe que la fijación de una estrategia —operación eminentemente política— sobrepasa la serie de análisis parciales que puedan hacerse científicamente y que, si bien necesitamos una estrategia global con prioridades perfectamente definidas, no por ello queda demostrada la existencia de un conocimiento objetivo de la totalidad del proceso histórico. No existe lo que necesitamos, sencillamente porque lo necesitamos. Entre las demandas de la acción y el arsenal de nuestros conocimientos se abre un foso enorme, sobre el que no cabe tender puente de plata. El autor confiesa sin el menor reparo que no posee un conocimiento global sobre el desenvolvimiento de la sociedad capitalista —duda que alguien lo posea y hasta que sea posible tal conocimiento—, y desde luego, científicamente, está muy lejos de haber resuelto los problemas teóricos previos que conlleva la noción de socialismo: modelos democráticos de organización manteniendo la eficacia, superación de la división del trabajo en una sociedad tecnológicamente muy diferenciada, monopolio de saber como fuente de poder incontrolado y un

largo etcétera. Para el autor, el socialismo no proviene de un saber objetivo, de un saber científico, como el que los marxistas presumen poseer, sino de una determinada concepción de la libertad y de la dignidad humana que son incompatibles con la apropiación privada de los bienes de producción. Por consiguiente, no hay concepto que más le repugne que el de *socialismo científico*, que, en la imposible fusión de ciencia y socialismo, machaca a sus dos amores.

Hubo un tiempo en que el autor, fascinado por el marxismo, creyó en la objetividad de la historia, convencido además de que un tratamiento científico de la política podría servir de propedéutica para una futura actividad política, e incluso cayó en la trampa de creer en una posible realización personal en la unidad de la teoría y de la práctica. Hoy se encuentra muy lejos de tales devaneos. Le importa sobre todo trabajar en su parcela de saber, sin renunciar por ello a su cualidad de hombre libre, es decir, inmerso en una comunidad y responsable ante ella. Vivir la libertad es vivir la responsabilidad compartida. Esta noción de la libertad —y puede renunciar a todo, menos a su libertad— le ha llevado, en un momento muy particular de la historia de su patria, a tomar parte en algunas polémicas, mostrando claramente sus preferencias y compromisos, empeñado, en la medida de sus modestas fuerzas, en contribuir de algún modo a la tarea colectiva de recuperar la libertad, desarrollando la democracia. Este libro es el testimonio de estas luchas con un objetivo preciso: denunciar la reducción del socialismo a marxismo o a socialdemocracia, dos formas complementarias de asfixiarle o de hacerle inocuo.

Los capítulos sexto y séptimo son inéditos y fueron escritos en el verano del 79. Los demás han sido reelaborados a partir de textos publicados en las revistas *Sistema*, *Taula de Canvi* y *Triunfo*, así como en los periódicos madrileños *Diario-16* y *El País*.

Madrid, septiembre de 1979.

CAPITULO I

EL SOCIALISMO HOY: ESTADO DE LA CUESTION

Se trata de enunciar algunos de los problemas clave que hoy tiene planteado el socialismo europeo. En primer lugar, enunciar y no discutir, menos aún resolver, cuestiones que por su enorme complejidad cada una exigiría, para un tratamiento adecuado, una extensa monografía. Pero dada la confusión reinante, formular problemas con cierta claridad, poniendo de manifiesto el orden de prioridades, parece ya una tarea tan justificada como urgente. El hacerlo dentro de una doble limitación: geográfica, la Europa Occidental —más concretamente, la experiencia de cuatro países: Inglaterra, Alemania Occidental, Francia e Italia—, y temporal —el momento presente que comprendemos a partir de la década de los sesenta—, precisa, desde luego, alguna explicación.

Por lo pronto, una cierta delimitación se impone por la enorme cantidad de significados que la noción de socialismo comporta, desde su aparición en los años treinta del pasado siglo, variedad significativa que ha llegado hoy al paroxismo, de que en regiones especialmente conflictivas prácticamente todos los movimientos políticos, de izquierda o de derecha, se digan socialistas. Pero aun eliminando las muchas acepciones meramente oportunistas —hay que navegar con la corriente, y el socialismo es la corriente de nuestro tiempo—, queda un buen número de ellas que habría que tener en consideración por su importancia, bien en un período concreto —el socialismo cuenta ya con una historia de más de ciento cincuenta años—, bien en una determinada región —el socialismo como idea se ha extendido por todo el planeta—. Ahora bien, una perspectiva his-

tórica y universal que intentase recoger las definiciones de más entidad o de mayor éxito, no tendría demasiado sentido mientras no se encajasen en su contexto socioeconómico y cultural correspondiente, lo que rompería con el marco posible de este libro, sin acercarnos por ello a nuestra meta: la comprensión de lo que significa *hoy* el socialismo en la Europa del Mercado Común.

Hay que partir, por tanto, de dos premisas fundamentales: 1. La nación de socialismo, lejos de poderse fijar clara y definitivamente, cambia con el contexto social en que se inscribe. 2. El desarrollo y consolidación del capitalismo industrial en una determinada región no ha llevado consigo una total homogeneización del resto del mundo. Los desniveles en el grado de desarrollo socioeconómico, así como las diferencias culturales y nacionales en los cinco continentes continúan siendo considerables. Por consiguiente, no cabe ni una sola definición del socialismo como meta a alcanzar, ni prescribir un solo camino. De ahí que de poco sirva pasar revista a sus significaciones más repetidas —en el pasado o en el mundo— para intentar así depurar un concepto universalmente válido. La fijación teórica de un «socialismo auténtico» frente a las demás formas «falsificadas», «deterioradas» o «corruptas», implica un planteamiento ideológico e idealista que desemboca en un dogmatismo social y políticamente inoperante.

La limitación geográfica propuesta resulta obvia al diferenciar por lo menos un socialismo adecuado para el mundo subdesarrollado, en el que lo fundamental es que el Estado funcione como promotor y canalizador de un proceso de «acumulación primigenia», con el socialismo posible en la Europa del Mercado Común, donde ya existe un capitalismo altamente desarrollado y una tradición democrática profundamente enraizada. Utilizar un mismo vocablo para describir realidades tan distintas ha sido una de las fuentes permanentes de confusión, cuyo origen se remonta a la revolución bolchevique en Rusia, intento vano y fallido de construir el socialismo en su acepción occidental en una sociedad subdesarrollada. Pero, en su mismo fracaso, la Unión Soviética llevó a la práctica el primer modelo estatal de industrialización acelerada, propio para el mundo atrasado y semicolonial de la periferia europea.

1. Etapas del socialismo europeo

El que propongamos el año 1960 como línea divisoria para definir lo actual se explica a partir de algunos caracteres generales que han servido para la periodización al uso en la historia del socialismo europeo. Una primera etapa constituyente se hace llegar hasta 1914, en la que, después de los primeros tanteos ideológicos y de organización, el movimiento obrero se debate entre las corrientes proudhonista, bakuninista y marxista, hasta que esta última termina por prevalecer en el partido a la sazón más numeroso e influyente, la socialdemocracia alemana, que en el Congreso de Erfurt (1891) adopta un programa netamente marxista, dejando margen, eso sí, para una política reformista y parlamentaria. Una segunda etapa inaugura la Revolución rusa, al extender al socialismo europeo la misma división —una rama menchevique y otra bolchevique— que había caracterizado a la socialdemocracia rusa desde 1903. Tanto la corriente «socialista», que permanece fiel a la tradición de la Segunda Internacional, criticando duramente la experiencia soviética, como la corriente «comunista», que se adhiere a la Tercera Internacional leninista y contempla los acontecimientos rusos desde la perspectiva bolchevique, se consideran leales intérpretes del marxismo, reprochándose mutuamente el haber falsificado o tirado por la borda el pensamiento de Marx. La ascensión del fascismo, entre otras causas, también consecuencia de estas luchas fratricidas, acaba con esta etapa en un mar de sangre, que desemboca en la Segunda Guerra Mundial. En 1945 hay que datar una tercera etapa de la historia del socialismo europeo que se caracteriza, tras la breve pausa de la guerra y de la inmediata postguerra, de un lado, por la agudización de las tensiones entre comunistas y socialistas, esta vez integrados respectivamente en una de las dos potencias que se enfrentan en la «guerra fría»; de otro, por la eliminación del marxismo, ya perfectamente congelado en la dogmática estalinista del «marxismo-leninismo», ya «superado» por completo en el programa básico de la socialdemocracia alemana, aprobado en el Congreso de Bad Godesberg (1959).

El socialismo en esta tercera etapa se caracterizó por la oposición tajante de un comunismo estalinista y dogmático que, de espaldas a la realidad, se mantiene como un quiste infiltrado en una sociedad que ni comprende ni es capaz de transformar a una socialdemocracia perfectamente encajada en la «ideolo-

gía del fin de las ideologías», interesada únicamente en participar en el gobierno para mejor administrar el sistema capitalista. A pesar de la nacionalización de la industria metalúrgica y de una política social francamente avanzada, los laboristas británicos pierden las elecciones de 1951, suerte que se repite en 1955 y en 1959. El Partido Socialista francés, participando en la mayoría de los gobiernos de la IV República, pasa de 354.000 afiliados en 1946 a menos de 100.000 en 1960. La política colonialista de la S.F.I.O. respecto a Argelia supera todo lo que cabría esperarse de un partido que oficialmente sigue llamándose marxista. En Italia, el socialismo se agota en la discusión del tipo de relación que habría que tener con los comunistas, reduciéndose a constituir un apéndice del movimiento comunista (el grupo de Nenni hasta 1956) o un apéndice del anticomunismo más furioso (el grupo de Saragat). La socialdemocracia alemana opta por desprenderse del «lastre marxista», pero sin ofrecer otra alternativa que la de reemplazar al partido gobernante cuando éste termine por agotarse.

A finales de la década de los cincuenta difícilmente cabía divisar en Europa una perspectiva socialista. La alternativa operante consistía en elegir entre la dictadura estalinista, que sólo sacando los tanques a la calle resultaba convincente (Berlín, 1953; Budapest, 1956), o la «sociedad de consumo o de bienestar», a la que aspiraba la socialdemocracia, y que empezaba a dar sus frutos: pleno empleo, salarios altos, política social avanzada. Por grande que fuese la «enajenación consumista» y descomunal la concentración económica, la mayor parte de la población europea se inclinaba por un capitalismo desarrollado de «rostro humano». El socialismo, en el mejor de los casos, parecía tan sólo el duro camino burocrático y dirigista que habrían de recorrer algunas sociedades subdesarrolladas para alcanzar niveles de desarrollo económico y social equiparables a los ya existentes en la Europa occidental.

No cabe la menor duda de que en los últimos veinte años la situación ha cambiado considerablemente, de modo que hoy, con una cierta retrospectiva, podemos establecer a comienzos de los años sesenta el inicio de una cuarta etapa, en la que seguramente no hemos salido del umbral, pero que ya podemos describir en algunos de sus rasgos fundamentales. Justamente, en esto consiste la intención de este capítulo: subrayar los elementos clave de la *nueva situación* en que se encuentra el socialismo europeo. Pero antes es menester mencionar algunos de los factores de orden general que han posibilitado esta nueva coyuntura.

Por lo menos cinco factores hay que mencionar para dar cuenta de la nueva situación: 1. La desmembración del bloque socialista en distintos centros de poder, fraccionamiento que se inicia con la «herejía» titista, pero que adquiere significación universal con el conflicto chino-soviético. La Unión Soviética pierde definitivamente el monopolio de constituir el único modelo de socialismo refrendado por la práctica. 2. El fin de la «guerra fría», pasando de la «coexistencia pacífica» a una etapa de cooperación económica creciente entre el bloque occidental y el soviético. 3. Según aumentan los centros de decisión en el bloque capitalista y en el socialista, mayor la independencia del llamado «tercer mundo», dando cabida a diferentes modelos «socialistas» de desarrollo. 4. La incapacidad del capitalismo altamente desarrollado, a pesar de los augurios de los años cincuenta de superar las crisis cíclicas y de mantener el pleno empleo. 5. La radicalización creciente de los grupos intelectuales y universitarios del mundo occidental. La guerra de Vietnam señalizó la ruptura moral e ideológica con la potencia rectora del mundo occidental.

Desde luego que estos factores se han influido mutuamente, pero resulta tan difícil el establecer entre ellos una clara relación de causa a efecto como ignorar las contradicciones que implican. Sirven para definir una situación nueva, pero no prejuzgan de ningún modo el resultado. Nada más ingenuo que el malinterpretarlos como garantía de una evolución socialista en Europa o de un resquebrajamiento del sistema soviético. De lo que se trata únicamente es de dejar constancia de una nueva etapa en la que se ha extendido la conciencia de la crisis profunda del mundo capitalista y del mundo comunista. Al mayo francés siguió el agosto de Praga, y tan poca credibilidad muestra hoy el capitalismo de la abundancia como el socialismo soviético. Cierto, ello abre una nueva oportunidad a un socialismo europeo, pero comporta también, en la era atómica, un peligro inmenso. Un debilitamiento considerable o repentino de uno de los dos bloques afecta gravemente al equilibrio, harto inestable, sobre el que reposa la paz mundial. La cooperación creciente entre el bloque occidental y el soviético constituye el supuesto básico de nuestra supervivencia, pero también el obstáculo fundamental para cualquier transformación a fondo, tanto al Este como al Oeste. Y no se deduzca de ello la justificación para un conservadurismo a ultranza, que se expresaría en la fórmula: no queda otra alternativa que mantener el *statu quo*, o perecer. Pues si bien es cierto que al sentirse amenazadas las clases dirigentes de los dos bloques podrían desencade-

nar una conflagración atómica, el mantenimiento de los dos sistemas dominantes sin modificaciones profundas lleva consigo tales contradicciones que no habría modo tampoco de evitar la catástrofe. Esta es la perspectiva, tan real como pavorosa, desde la que hay que plantear, sin perder la esperanza, algunos de los problemas clave del socialismo en la Europa de hoy.

2. Socialismo y marxismo

La relación entre marxismo y socialismo en la Europa actual es la cuestión clave sobre la que conviene obtener desde un principio una mínima claridad. Al tema volveremos, dedicándole un capítulo. No es preciso encarecer el papel central que ha desempeñado el marxismo en la historia del socialismo europeo, tanto que, como acabamos de ver, constituye el criterio básico para establecer una periodización. En la primera etapa fundacional (1864-1914), el marxismo termina por imponerse frente a las demás corrientes competitivas, bakuninismo y proudhonismo. A partir de 1890 cabe, *grosso modo* —las excepciones son muchas y algunas tan significativas como la de Inglaterra—, identificar marxismo y socialismo, identificación, sin embargo, que no dejó de ser desde su origen enormemente problemática, ya que el desarrollo real del capitalismo en el meollo de Europa y en su periferia exigió reacciones fundamentales a la doctrina de Marx y Engels.

En Alemania, país que se había colocado a la cabeza de la industrialización, se había producido la concentración de capital esperada, pero con consecuencias sociales muy distintas de las predichas. No poco había contribuido a la fascinación de la doctrina de Marx el que hubiera puesto de manifiesto las «leyes objetivas» del desarrollo capitalista, sus contradicciones implícitas, que harían irremediable el que desembocase en una revolución socialista. Pero, lejos de producirse una polarización y radicalización creciente entre una minoría en disminución de capitalistas, cada vez más enriquecidos, y una masa en aumento de obreros industriales, cada vez más empobrecidos y explotados, absoluta y relativamente, de modo que un día la mayoría de los expropiados terminarían por expropiar a la minoría exigua de expropiadores, el número de obreros industriales parecía estar llegando al tope, mientras crecían considerablemente nuevos sectores medios asalariados, que nada querían saber de las reivindicaciones proletarias. Contra los pronósticos marxistas, resultaba evidente que los ingresos reales de la clase obrera

alemana en el período de 1873 a 1896 habían aumentado considerablemente. Además, el Estado capitalista estaba poniendo en marcha un sistema de seguridad social —seguro de enfermedad, de accidente, de vejez— y de protección del trabajo —regulación del trabajo de la mujer, prohibición del trabajo de los menores de trece años, normas de seguridad en el puesto de trabajo, etc.— capaces de ir integrando al proletariado industrial. Aunque la realidad había falsificado los supuestos marxistas en que se apoyaba la expectativa de una pronta revolución, la socialdemocracia alemana seguía fiel a los principios marxistas, defendiendo verbalmente el mito de la revolución a la vista, pero practicando una política parlamentaria y reformista que por su propia dinámica iba alejando esta última meta.

El primer revisionismo, cuya figura más destacada fue el amigo y discípulo de Engels, Eduard Bernstein, consistió por lo pronto en aceptar la realidad, readaptando la doctrina a los nuevos hechos. En primer lugar, había que rechazar con todas sus consecuencias la falsa creencia de que en el capitalismo la dialéctica de la lucha de clases engendraría necesariamente la revolución que daría paso al socialismo. El capitalismo no lleva en su entraña el mecanismo que lo haría saltar revolucionariamente. Se condena por la injusticia que comporta, porque impide la realización de los valores de libertad, igualdad y solidaridad que se consideran esenciales, pero no porque en su interior se halle programada su inviabilidad. La capacidad de adaptación de que estaba dando pruebas el capitalismo alemán a finales de siglo rompía con el mito de que «objetivamente» estuviera destinado a sucumbir en breve. Lo que había parecido la superioridad más manifiesta del pensamiento de Marx —el haber pasado de una fundamentación moral a una científica del porvenir socialista— se revelaba como su mayor debilidad. No sólo la revolución no estaba asegurada por ningún mecanismo «dialéctico», sino que incluso podría implicar, de producirse, un retroceso considerable en la difícil construcción del socialismo. En efecto, de las cuantiosas pérdidas en vidas humanas y de la enorme destrucción de las fuerzas productivas que implicaría el derrumbamiento revolucionario del capitalismo, no podría surgir más que un poder dictatorial altamente centralizado en manos de unos cuantos fanáticos. No, pensaba Bernstein: la sociedad socialista a la que se aspira únicamente podrá ser el resultado de un largo proceso de reformas democráticas. En fin de cuentas, socialismo quiere decir ampliación continua de las libertades democráticas, lo que desde luego comporta acabar con el modo capitalista de producción, esen-

cialmente antidemocrático, pero no revolucionariamente, que plantearía más problemas de los que resolvería, sino ampliando la base democrática. En este sentido, socialismo no es tanto una meta, como un camino, como una acción reformista y democrática.

Indudablemente que esta comprensión del socialismo que había desarrollado la práctica de un gran partido obrero y que Bernstein se atrevió a formular teóricamente conlleva modificaciones importantes del marxismo, sobre todo en lo que respecta a su teoría de la revolución y a la dialéctica en que ésta se fundamentaría, correcciones que sólo muy lentamente han terminado por ser aceptadas. Durante decenios, el socialismo europeo se ha movido en la esquizofrenia de permanecer fiel a la concepción revolucionaria del marxismo, ejecutando una política reformista claramente antirrevolucionaria.

Lo decisivo, en todo caso, es percatarse que la reacción más violenta al revisionismo socialdemócrata, el leninismo, comporta también una revisión del marxismo no menos sustancial y seguramente de mayor alcance. El contexto socioeconómico es bien distinto: un capitalismo dependiente en una sociedad agraria en la que perviven formas culturales y estructuras políticas precapitalistas, que impiden el desarrollo de un movimiento obrero de tipo occidental. Pero estos mismos condicionamientos han creado una «intelligentsia», cuya identidad únicamente se realiza en la acción revolucionaria. Lenin, representante conspicuo de esta «intelligentsia», ha llegado al marxismo precisamente desde una previa voluntad revolucionaria que se ve refrendada en el meollo revolucionario del pensamiento de Marx. Para Lenin, revolución y marxismo se identifican de tal modo que todo lo que niegue o paralice este afán revolucionario lo considera sustancialmente antimarxista, así como le parece imposible construir contradicción alguna entre los métodos revolucionarios de la «intelligentsia» forjados en décadas de ardua lucha y la «conciencia objetiva de la revolución» que constituiría el marxismo. Justamente en el empuje revolucionario de un pensamiento o de una acción está la piedra de toque para probar su autenticidad marxista. Importa dejar constancia de que de la misma manera que la consolidación de un movimiento obrero en un país capitalista altamente desarrollado cuestiona los supuestos revolucionarios del marxismo, en un medio subdesarrollado, donde la clase obrera, muy minoritaria, está además legalmente impedida de constituir sus propias organizaciones de clase y de plantear sus propias reivindi-

caciones, a la «intelligentsia» le fascina la vocación revolucionaria que el marxismo otorga al proletariado.

La aplicación del marxismo a un país atrasado, es decir, a un país en el que el capitalismo industrial está todavía en sus comienzos, no deja de ofrecer serios problemas. Sólo dando la espalda a la realidad y exagerando el carácter plenamente capitalista de la sociedad rusa puede Lenin establecer un programa estrictamente marxista para la Rusia de comienzos de siglo. Cualquier concesión en este punto le hubiera obligado a admitir bien que existiría un camino específicamente ruso hacia el socialismo, adecuado a su especial circunstancia, como quería el populismo, bien que habría que colaborar con la burguesía más dinámica para acelerar la industrialización capitalista del país, única base posible de una futura sociedad socialista, como propugnaba el llamado «marxismo legal». Lenin rechaza cualquier interpretación que ponga en tela de juicio la misión revolucionaria del proletariado, pero no puede menos que admitir que la clase obrera rusa se encuentra en una especial situación, debida tanto a su debilidad numérica —pequeños islotes en un océano rural— como a la falta de los derechos y libertades más elementales, a pesar del presunto carácter plenamente burgués y capitalista que atribuye a la Rusia zarista. Para Lenin, estas especiales circunstancias, lejos de cuestionar, robustecen la perspectiva revolucionaria, si el problema básico del tipo de organización se plantea correctamente.

Lenin corta el nudo gordiano de la difícil relación entre «factores objetivos» y «lucha de clases», reduciendo el problema de la revolución socialista a una *cuestión de organización.* Abandonar la revolución a la «espontaneidad» del desarrollo socioeconómico o a la «espontaneidad» de la lucha de clases es abrir las puertas de par en par al reformismo y al oportunismo. La revolución es el quehacer propio de un partido revolucionario. La experiencia de la Europa occidental —el tradeunionismo inglés, el revisionismo alemán— le confirma en su idea de que un partido obrero, es decir, integrado y controlado exclusivamente por el proletariado, difícilmente puede ser revolucionario. El paso decisivo de la «clase en sí» a la «clase para sí» no se produce espontáneamente, sino que requiere un elemento ajeno a la clase. El proletariado no puede convertirse en clase revolucionaria sin asimilar una *conciencia* y sin aceptar un *tipo de organización* que le vienen de fuera y que, hasta cierto punto, le son extraños. Esta «conciencia» la ha creado una «intelligentsia», a la que pertenecían Marx y Engels, y de

la que Lenin se siente parte integrante. Pero así como la «intellingtsia» sin el proletariado no logra sobrepasar una etapa conspiratoria, bien lleve en su seno un terrorismo anarquizante, bien un activismo blanquista, así el proletariado sin la «intelligentsia», sin el proletariado no logra sobrepasar una etapa calista. Unicamente la fusión de ambos en un *partido revolucionario* resuelve en la práctica esta aporía.

Para Lenin, el sujeto de la revolución ni es el proletariado, como quiere el marxismo europeo, ni la «intelligentsia», como en balde se empeña el movimiento revolucionario ruso, sino la fusión de ambos en el partido. Ahora bien, el partido como sujeto de la revolución precisa un tipo de organización que le permita ser eficiente revolucionariamente. Y si la «conciencia correcta» proviene de la «intelligentsia», el tipo de organización viene impuesto por las organizaciones estatales encargadas de aniquilar cualquier levantamiento revolucionario. La lucha sin cuartel entre el aparato de represión del Estado y el partido revolucionario exige que este último adopte el mismo tipo de «organización militar» que constituye la fuerza del enemigo: un partido revolucionario ha de organizarse en base al centralismo y férrea disciplina que distingue a todo ejército que se precie. La profesionalización plena de los cuadros de mando es un requisito esencial de todo ejército moderno. La profesionalización, la dedicación plena a la labor revolucionaria —el revolucionario consagra a la revolución «no sólo las tardes libres, sino toda la vida»—, es la consecuencia ineludible del carácter «militar» que Lenin atribuye al partido.

En efecto, Lenin salva el contenido revolucionario del marxismo, pero al precio de modificarlo de tal forma que apenas queda reconocible. Si el revisionismo bernsteiniano elimina la perspectiva revolucionaria para salvar la autonomía política de la clase obrera, que se comporta de manera no revolucionaria, el revisionismo leninista mantiene la meta revolucionaria, pero a costa de eliminar al proletariado no sólo como sujeto de la revolución, papel que Lenin otorga al partido, sino hasta del partido, en cuanto la «organización de los revolucionarios» la distingue claramente de la «organización de los trabajadores». «La organización de los trabajadores tiene que ser: primero, sindical; segundo, abarcar al mayor número posible; tercero, ser lo menos conspiratoria posible. La organización de los revolucionarios, por el contrario, tiene en primer lugar y sobre todo que acoger en su seno a gentes cuya profesión sea la acti-

vidad revolucionaria»[1], gentes que difícilmente podrían reclutarse entre la clase obrera, obligada para subsistir a acudir a un trabajo regular y extenuante[2].

Lenin modifica así un principio que había sido indiscutible no sólo para el marxismo, sino para toda la tradición socialista en general, a saber, que la emancipación del proletariado únicamente podrá ser obra del proletariado. La sustitución del proletariado por el partido surge de la profunda desconfianza que Lenin muestra hacia la clase obrera, que, abandonada a sí misma, se perdería en los mil recovecos del «oportunismo». La lucha contra el «oportunismo», el «revisionismo», el «economismo», para Lenin los vicios consustanciales de un movimiento obrero en mano de los obreros, exige un recio aparato muy centralizado y disciplinado que obligue al proletariado a marchar por la senda revolucionaria. «Burocratismo contra democratismo; esto es, centralismo contra autonomismo; esto es, el principio de organización de la socialdemocracia revolucionaria contra el principio de organización de los oportunistas»[3]. En efecto, respetar las decisiones de la base —democratismo— lleva al reformismo, para Lenin oportunismo; mientras que la fidelidad absoluta al camino revolucionario exige una solución burocrática, es decir, la puesta en marcha de un aparato, organizado según el modelo burocrático por antonomasia: el ejército. Marx había concebido una solución democrática y revolucionaria a la vez, en la que clase y partido se identificarían en un mismo quehacer revolucionario. El partido no sería más que la clase obrera políticamente organizada. La realidad había aniquilado los supuestos de esta concepción —polarización en dos clases antagónicas, pauperización progresiva del proletariado—, permitiendo únicamente bien un reformismo sobre base democrática, bien la revolución organizada burocráticamente.

---

[1] Cito a LENIN por la edición alemana de sus Obras completas *Werke*, 40 volúmenes, editados por Dietz, Berlín (RDA): 5, pág. 468.

[2] El tipo de organización de Lenin impidió desde un principio el que en el partido pudieran abundar los obreros. Nadeshda Krupskaia escribe sobre las organizaciones bolcheviques, vísperas del Tercer Congreso: «Entretanto, habían surgido organizaciones estables en Rusia. Existían comités ilegales que trabajaban en las condiciones conspiratorias más difíciles. Por consiguiente, casi ningún trabajador participaba en estos comités, sin embargo, los comités ejercían gran influencia sobre el movimiento obrero.» N. KRUPSKAIA, *Erinnerung an Lenin*, Berlín (RDA), 1960, pág. 140.

[3] LENIN, *Werke*, 7, págs. 400-401.

3. El marxismo es revisionismo

La aplicación del marxismo implica de por sí su revisión. El revisionismo hay que datarlo desde el momento en que existen partidos que se dicen marxistas. En una primera etapa al revisionismo de Bernstein corresponde el burocrático de Lenin: el uno, representativo de un capitalismo avanzado; el otro, de una sociedad agraria aún muy atrasada. Un marxismo puro sin ápice de revisión sólo es concebible en el ámbito de la teoría pura. Si no identificamos previamente pensamiento y realidad, identificación que, como es sabido, define al idealismo, nada tiene de sorprendente que la teoría se modifique sustancialmente al verse confrontada con la práctica. Desde las premisas de que el ser conforma a la conciencia, y no a la inversa, y de que la realidad es por sí misma dinámica en continuo movimiento, la revisión ininterrumpida del marxismo yace en sus propios supuestos. El marxismo no puede ser más que en la forma de revisionismo.

Dos aseveraciones se imponen al echar un vistazo de conjunto a un siglo de historia del marxismo: por un lado, la enorme pluralidad semántica de este concepto, debido a la necesaria revisión de sus contenidos fundamentales, a la zaga de una realidad en rápido movimiento; por otro, la tendencia a su congelación dogmática, en cuanto se establece como ideología legitimadora del poder constituido. Mientras el Partido Comunista de la Unión Soviética fue el único partido gobernante que se reclamaba del marxismo, su reelaboración bolchevique, por parcial y cuestionable que fuese, contaba con el prestigio y los medios de difusión que otorga el poder. Frente al marxismo soviético palidecieron todas las demás formas de interpretación, sobre todo a partir del momento en que la marea fascista inundó precisamente aquellos países —Alemania, Italia, Francia— en los que había sobrevivido un pensamiento marxista independiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el marxismo se identifica casi exclusivamente con su versión estalinista, a la vez que la socialdemocracia europea pretende deshacerse de sus antecedentes marxistas. Ya desde los años veinte puede seguirse este doble proceso, estalinización del marxismo y desmarxización del socialismo, pero llega a su cumbre en la década de los cincuenta: el marxismo se ha evaporado bien en el «materialismo dialéctico» de confección estalinista, bien en su nega-

ción, cada vez más antimarxista, del movimiento socialista europeo.

En la etapa en que nos hallamos resulta innegable un renacimiento del marxismo, debido a tres causas fundamentales: 1. La Unión Soviética ha perdido el monopolio de constituir el único marxismo realizado. Por lo menos dos grandes potencias, desautorizándose mutuamente, pretenden ser encarnación viva del marxismo-leninismo. La congelación dogmática se hace más transparente, al presentarse por duplicado. 2. La crítica de Stalin que puntualizó el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética hizo posible que ganase audiencia la crítica del estalinismo que había expuesto la izquierda europea: rota la camisa de fuerza con que el estalinismo había maniatado al marxismo, éste adquiría de nuevo su ductilidad crítica. Los escritos juveniles de Marx que Siegfried Landshut edita en 1932 —el momento no podía ser más inoportuno— abren en los años cincuenta nuevas perspectivas en la interpretación del pensamiento marxista, actualizando algunos conceptos filosóficos que, como el de enajenación, facilitan una nueva lectura de *El Capital.* 3. La reacción, intelectual más que obrera, contra la socialdemocracia reformista, ya perfectamente encajada en el capitalismo. La crítica socialdemócrata contra el estalinismo se hace extensiva no sólo al marxismo en general, sino incluso a toda la tradición socialista. La socialdemocracia alemana en su programa de Bad Godesberg (1959) llega a aceptar la «economía de mercado» como la más apropiada para una sociedad industrial altamente desarrollada. La función de un partido socialdemócrata es simplemente correctiva: «tanta libre competencia como sea posible; tanta planificación como sea necesaria».

Hoy en la Europa occidental se constata, por un lado, un renacimiento del marxismo en la Universidad y en los medios artísticos e intelectuales; por otro, una influencia claramente decreciente en los partidos y organizaciones obreros: el marxismo ha sido por completo erradicado de la socialdemocracia alemana e incluso en los partidos comunistas del sur de Europa, con la superación del estalinismo, ha perdido entidad la tradición marxista-leninista. El marxismo ha ganado audiencia en los ambientes intelectuales, en amplios sectores medios, y la ha perdido en los obreros. Hasta 1914, escasísimos fueron los intelectuales marxistas en la Europa occidental; en cambio, la influencia del marxismo sobre el movimiento obrero iba en aumento. Al este de Viena, sobre todo en la Rusia zarista, la situación era exactamente la contraria: en países en que la clase

obrera era una minoría insignificante, la «intelligentsia» se sintió fascinada por el marxismo desde fecha muy temprana. Lo mismo sigue ocurriendo hoy en el llamado «tercer mundo». La atracción que han sentido y todavía sienten los intelectuales por el marxismo, como si fuera la ideología propia de las «intelligentsias», es tema a menudo abordado y de máximo interés, que aquí sólo cabe recordar.

El marxismo, asimilado por la «intelligentsia», robustece su carácter revolucionario: así sucedió en la Rusia decimonónica; así está sucediendo en el mundo subdesarrollado. Sin embargo, difícilmente ocurre en la Europa occidental, dado el grado de desarrollo socioeconómico y la solidez de sus instituciones políticas. Con la excepción de unos cuantos grupos minúsculos dispuestos a organizar militarmente la revolución —y parece que no hay otra forma de ponerla en marcha—, el intelectual europeo constriñe su marxismo al ámbito de sus labores —un arte socialista, una ciencia social comprometida—. La estructuración en «compartimentos estancos» propia del capitalismo avanzado, conlleva que esta marxistización de la vida intelectual apenas infiera sobre otros «compartimientos» de la realidad política, económica o social.

Para el socialismo europeo contemporáneo la relación con el marxismo ha dejado de ser cuestión clave: el marxismo se ha disuelto en una multiplicidad de marxismos. De poco sirve, en las condiciones actuales de Europa, empeñarse en poner de manifiesto que la propia interpretación o la soviética o la trotskista o la maoísta es la correcta. Existiendo varios centros que se reclaman del marxismo cualquier pretensión de ortodoxia desemboca en la secta. El pluralismo de interpretaciones del marxismo subyace en sus propios supuestos y corresponde al pluralismo que implica la concepción actual de la ciencia. Choca, sin embargo, con la concepción decimonónica y cuestiona la pretensión de Marx de que su teoría constituiría nada menos que el «socialismo científico» que anularía a todas las demás.

Mucho debe el socialismo a Marx, pero también no pocos descalabros provienen de su doctrina. Considero fuente de no pocos males, justamente, este su afán, dogmáticamente cientificista, de identificar su propio pensamiento con el socialismo sin más. En aceptar o rechazar esta identificación se consumió el quehacer teórico de la primera etapa fundacional. La polémica sobre cuál era el verdadero marxismo, la interpretación europea o la bolchevique, domina la segunda etapa de entreguerras, sin que de ello resulte otra cosa que su congelación dog-

mática en el estalinismo o su rechazo total en la socialdemocracia.

La pluralidad actual de marxismos ofrece la oportunidad real de superar este falso dilema, aceptar en bloque una ortodoxia marxista, con el peligro inminente de caer en un antimarxismo que sea a la vez profunda y cabalmente antisocialista. El socialismo europeo no puede ser ya ni marxista ni antimarxista —falsa alternativa—, sino que ha de plantear el problema de la superación de la sociedad capitalista, desde el nivel actual de conocimientos, la experiencia histórica de esta parte del mundo y una ya larga tradición de pensamiento socialista. Tradición que de ningún modo se agota en Marx y en su escuela. Volver la mirada a otros clásicos del socialismo —Proudhon, Lassalle, Bakunin, los fabianos, etc.— sin por ello aceptarlos sin la menor crítica no sólo es deber de justicia, sino punto de partida para salir de algún que otro atolladero de los muchos que aún nos mantienen encallados.

4. Alternativa socialista

El fraccionamiento del marxismo en múltiples corrientes es, por un lado, señal contundente de su supervivencia activa —cumplido más de un siglo, el marxismo sigue hoy influyendo vigorosamente sobre las ciencias sociales y el pensamiento socialista del mundo entero—, pero también prueba palpable de que tal cantidad de reinterpretaciones y de revisiones se han hecho imprescindibles al invalidar la realidad histórica algunos de sus supuestos básicos. En tres fundamentales hemos de insistir, en cuanto constituyeron la base de la fascinación que produjo el marxismo: 1. La crítica inmanente del capitalismo, al poner de manifiesto sus contradicciones internas, hizo patente que el capitalismo, lejos de ser expresión de la *razón económica*, y, por tanto, hallarse más allá de la historia, como lo concibieron los clásicos de la economía, constituye una «formación histórica», con un comienzo históricamente comprobable y un fin científicamente demostrable: las crisis internas del sistema capitalista, sus contradicciones crecientes llevan consigo su necesario derrumbamiento. 2. El capitalismo no sólo está condenado a desaparecer —Marx habría descubierto las leyes objetivas que garantizan su desmoronamiento—, sino que, en su propio seno, ha creado la clase históricamente destinada a sustituir a la burguesía. El proletariado es la clase que, nacida del capitalismo, ha de enterrar al capitalismo. Su ascenso al poder,

empero, implica una ruptura *cualitativa* con todo el pasado histórico, en cuanto el proletariado es la única clase universal que, al liberarse a sí misma, libera a toda la humanidad, ya que por debajo de ella no existe otra clase que pueda ser instrumentalizada y explotada. La «dictadura del proletariado» es la dictadura, es decir, el poder de la inmensa mayoría —el pueblo trabajador— sobre una exigua minoría de capitalistas explotadores. Democracia como poder del pueblo, poder de la mayoría y dictadura del proletariado, poder de la inmensa mayoría que constituyen los trabajadores, son conceptos que no sólo no se contradicen, sino que expresan un mismo contenido. 3. La supresión de la propiedad privada de los bienes de producción, su apropiación por el proletariado, es requisito necesario y suficiente para la construcción de una sociedad inconmensurablemente más libre y productiva: el socialismo. Sabido es que Marx no gustó de espculaciones sobre la futura sociedad socialista. No hubieran tenido demasiado fundamento desde su situación histórica, pero tampoco parecían necesarias, convencido de que bastaba con que el proletariado se apoderase de los bienes de producción para que comenzase la edificación de la nueva sociedad.

Estos tres puntos resumen la esencia del marxismo, tal como lo vulgarizó el movimiento obrero. De manera coherente y sugestiva, resuelve los problemas básicos que se plantea cualquier socialista: el porqué y el cómo de la supresión del capitalismo. Su irresistible fascinación proviene de las implicaciones prácticas que se derivan de premisas teóricas, adornadas con el prestigio de la ciencia. No es ya una reprobación moral del capitalismo por la injusticia y opresión que implica, sino la certeza científica de que está condenado a hundirse, sacudido por sus propias contradicciones. Un análisis científico de las tendencias inmanentes del capitalismo habría puesto de manifiesto la indefectibilidad de la revolución socialista, la clase social destinada a acabar revolucionariamente con el orden vigente, así como el primer acto que la clase obrera llevará a cabo, una vez que se haya hecho cargo del poder político: la eliminación de la propiedad privada de los bienes de producción. Los problemas con los que hoy se enfrenta el socialismo dependen en gran parte de que se haya venido abajo esta certidumbre. No sabemos muy bien qué vía conduce al socialismo, ni qué política hemos de poner en práctica para llevar a construirlo. Con la brevedad que esta introducción impone, veamos en qué han quedado estos tres supuestos fundamentales del marxismo.

Tres han sido las concepciones de revolución socialista que

han gozado de predicamento en el movimiento obrero: la de Marx, como resultado indefectible de las contradicciones del capitalismo; la de Lenin, que, sin negar estos condicionamientos, desconfía de la espontaneidad de los factores objetivos o de la espontaneidad de la lucha de clases y pone énfasis en la acción militar de un partido de revolucionarios profesionales; la del sindicalismo revolucionario, con su noción de «huelga general» como única forma de acceso al poder de que dispondría la clase obrera. No cabe duda de que estas tres concepciones no tienen demasiada vigencia en la Europa actual.

Ya a finales de siglo, el revisionismo bernsteiniano surgió de poner en tela de juicio el supuesto marxista de que el capitalismo estuviera destinado a perecer, aplastado por sus propias contradicciones, en un plazo políticamente relevante. Pues que el capitalismo, como todo lo humano tendrá su fin, es un conocimiento que no ayuda mucho a la hora de plantear una política concreta. Lo innovador del pensamiento de Marx no consistió simplemente en haber descubierto que el capitalismo engendra en su seno los elementos que acabarán destruyéndolo, sino el haber puesto de manifiesto las contradicciones precisas y en aumento que permiten pronosticar su pronta caída: justamente, porque el derrumbamiento del capitalismo está a la vista, tiene sentido y se justifica una política revolucionaria sin concesiones ni compromisos.

Las ocho décadas que llevamos de siglo han confirmado, por el contrario, la capacidad de adaptación y de sobrevivencia que posee el capitalismo. A pesar de que las crisis económicas, políticas y sociales que acompañaron a dos guerras mundiales han sido gravísimas, el capitalismo europeo se ha repuesto de manera sorprendente, la última vez a partir de los años cincuenta. No ha logrado, por supuesto, eliminar las crisis, pero ha adquirido una técnica harto precisa en el arte de manipularlas y de mantenerlas bajo control. En los últimos cien años, los marxistas han propendido a calificar de definitiva cada crisis que aparecía en el horizonte. Por tanto, su trabajo teórico ha tenido que centrarse en dar cuenta de las razones de por qué el capitalismo se mantiene, a pesar de que el análisis de Marx sobre la agudización progresiva de sus contradicciones no habría perdido nada de su vigencia. Los argumentos principales se formularon en víspera de la Primera Guerra Mundial: con la rápida concentración del capital y el predominio del capital financiero cabe una cierta organización y planificación de las inversiones, de forma que las crisis pierden gran parte de su virulencia (Rudolf Hilferding); la expansión impe-

rialista salva, por lo menos temporalmente, las dificultades crecientes en la realización del plusvalor (Rosa Luxemburg). La concentración del capital, la reestructuración monopolista de la economía, la expansión imperialista, la intervención reguladora y creciente del Estado son los factores que explicarían la permanencia de esta última etapa del capitalismo que Lenin llamó «imperialismo», o también, como prefieren los teóricos soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial, «capitalismo monopolista de Estado». La literatura marxista de estos últimos años sigue haciendo los mismos análisis y manejando los mismos conceptos[4]. Se concluye así que el capitalismo habría entrado en su crisis definitiva desde hace por lo menos sesenta años. Lo grave de una noción tan peculiar y elástica de crisis es que no se sabe si esta crisis general del sistema durará aún otros sesenta años o el doble o el triple de esta cifra. En todo caso, el bloque soviético basa su política en el supuesto de que, a pesar de «la agudización creciente de las contradicciones del capitalismo», éste aún podría tener una larga vida.

El socialismo europeo ha perdido la certeza de que el sistema capitalista, ahogado en sus propias contradicciones, estaría a punto de desplomarse. Se es consciente de las desigualdades que implica, de la opresión latente o abierta que conlleva, de la contradicción creciente entre el desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas y las relaciones capitalistas de producción, entre la producción social y la apropiación individual, pero también de la enorme flexibilidad y capacidad de adaptación que ha dado prueba el capitalismo en situaciones harto difíciles. En comparación con el colectivismo burocrático de los países del Este, incluso se puede hablar de su enorme dinámica tanto en el desarrollo tecnológico como en la transformación de las formas y niveles de vida de amplios sectores de población. Ello explica el que algunas socialdemocracias del norte de Europa hayan preferido convertirse en diligentes gestores del sistema, convencidas de que en las circunstancias actuales no cabría más que elegir entre un modelo como el occidental, perceptible de ulterior perfeccionamiento, y el burocrático de los países del Este, que une a una gran ineficacia económica el aplastamiento de los derechos más elementales de la persona.

---

[4] Véase Paul A. Baran y Paul M. Sweezy, *Monopoly Capital. An Essay on the American Economic and Social Order*, Nueva York, 1966 y Ernest Mandel, *Der Spätkapitalismus*, Francfort, 1973. Léase la crítica marxista a estos dos libros en Paul Mattick, *Kritik der Neomarxisten*, Francfort, 1974.

En la Europa occidental no se puede contar en un plazo históricamente previsible con el derrumbamiento violento del capitalismo —hipótesis que, por otro lado, tampoco cabe excluir por completo—. Tampoco parece tener grandes probabilidades el que un partido revolucionario, según el modelo leninista, organice militarmente la revolución. Pero, si resultase, no es demasiado halagüeña la perspectiva de quedar al arbitrio de una minoría de revolucionarios, de una «vieja guardia» que se sentiría sujeto predestinado de la historia. No cabe esperar, por otro lado, que estalle la «huelga general», sobre todo en una época en que ha perdido incluso su prestigio de mito. Pero si contra todo buen sentido tuviera éxito, no dejaría más que un vacío político y un caos económico que las fuerzas armadas se apresurarían a llenar. En suma, en nuestro viejo continente, y por el plazo en que tiene sentido hacer pronósticos, hay que excluir cualquier camino revolucionario al socialismo. En ello parece existir un consenso bastante general: los revolucionarios a ultranza o bien se quedan en puro verbalismo, o bien no logran salir del terrorismo, en el fondo profundamente reaccionario. La cuestión clave del socialismo europeo contemporáneo es si una vía pacífica, gradual y democrática puede realmente conducir al socialismo. En el pasado, los partidos que eligieron esta vía terminaron encallando en un reformismo pazguato, empeñados, en último término, en administrar correctamente el sistema que un día afirmaron querer abolir.

5. La vía democrática hacia el socialismo

Lo que hoy define al socialismo europeo es, en primer lugar, la elección clara y sin titubeos de un camino democrático, es decir, pacífico y gradual, basado en el consenso de la mayoría. Para llegar al socialismo no cabe más que marchar por la vía democrática. Y no se trata de una mera consideración táctica —el camino revolucionario no parece tener hoy, en la Europa occidental, grandes posibilidades de éxito—, sino de un convencimiento fundamental. Si bien en teoría el orden establecido podría derrumbarse de muy diferentes formas y en virtud de muy distintos acontecimientos, únicamente cabe que lo sustituya el socialismo si el fin del capitalismo ha sido obra de un amplio movimiento de masas organizado democráticamente. Este convencimiento implica, por tanto, dos premisas en las que importa insistir: 1. Al socialismo, como realización de la democracia, sólo se llega democráticamente; 2. Cabe muy bien

la desaparición del capitalismo sin que por ello lo sustituya un orden socialista. Existen diferentes modelos —unos realidad ya, otros posibles— de sociedad postcapitalista no socialista.

La primera premisa parecería de una evidencia indiscutible —la democracia socialista sólo se consigue ampliando, profundizando la democracia, no suprimiéndola— si Lenin, al disolver violentamente la Asamblea Constituyente en enero de 1918, no se hubiera visto obligado a contraponer «democracia burguesa» a «democracia proletaria». Esta última la identifica con la «dictadura del proletariado», que Lenin define como «un poder que ha sido conquistado y se mantiene por la acción violenta del proletariado sobre la burguesía, un poder que no está limitado por ley alguna» [5]. Su particularidad consiste, pues, en ser pura expresión de fuerza, más allá de cualquier orden jurídico. Así como el poder de la burguesía habría sido absoluto y arbitrario por el proletariado, así el poder del proletariado ha de ser absoluto y arbitrario para la burguesía. Repárese que Lenin traslada los caracteres que considera propios de la dictadura de la burguesía a la del proletariado, es decir, que en el fondo maneja un concepto «burgués» de dictadura. Segundo, que la caracterización del poder burgués de absoluto y arbitrario puede corresponder a la tradición estatal de la Rusia preburguesa, pero de ningún modo se ajusta a los países típicamente burgueses de la Europa occidental. Justamente, las llamadas libertades formales que Lenin tanto desprecia —derecho de huelga, de organización, de manifestación, de prensa, de participación libre en los comicios, etc.— constituyen las armas más eficaces de que dispone la clase obrera. Qué duda cabe que los derechos hoy meramente formales en el socialismo, sin perder un ápice de su formalidad, se llenaran de un contenido preciso que alcance a todos los ciudadanos, pero nada más absurdo que eliminarlos de raíz para mejor contribuir a su esplendor. En su apreciación sobre la Revolución rusa, escribió Rosa Luxemburg: «Cierto, toda institución democrática tiene sus limitaciones y defectos, lo que, claro está, comparte con las demás instituciones humanas. Pero he aquí la panacea que han descubierto Trotzki y Lenin: la eliminación total de la democracia; mil veces peor que los males que tratan de corregir: es encenagar la fuente viva de donde provienen los remedios para los defectos consustanciales con cualquier institución social: la participación política de amplias masas populares, de manera

---

[5] LENIN, *Werke*, 28, pág. 234.

activa, enérgica, sin cortapisa alguna»[6]. Puede criticarse, por demasiado abstracta, la contraposición formal entre dictadura y democracia, que utiliza Kautsky en su crítica de la revolución bolchevique[7], pero está mucho más cerca de la tradición socialista que la confusa retahíla de insultos y de verdades a medias que amontona Lenin en su libelo «La revolución proletaria y el renegado Kautsky», para defender su visión de una dictadura absoluta y arbitraria, irrisión de los derechos democráticos más elementales, como si se tratara del paso decisivo hacia la «verdadera democracia socialista».

La vía democrática hacia el socialismo supone que este nuevo orden social *sólo* puede alcanzarse con el consenso y el esfuerzo común de la mayoría de la población. Principio fundamental del movimiento socialista y obrero es que «la liberación de la clase obrera no puede ser más que obra de la clase obrera misma». Un corolario y un problema se derivan de este principio. Por un lado, implica el rechazo absoluto de cualquier forma de sustitución de la voluntad de la mayoría. Nada más erróneo, y en el fondo más profundamente antisocialista que la pretensión de algunas minorías de revolucionarios de interpretar la «auténtica voluntad popular» a partir de un análisis objetivo de las relaciones de clase, repudiando la voluntad popular que se manifieste en contra como expresión de la enajenación e incultura que atosiga al pueblo en el capitalismo. No importa que tres semanas después de la llamada «revolución de octubre» el pueblo ruso dé el doble de votos al partido socialrrevolucionario que al bolchevique. Lenin sabe —no en vano es el intérprete fiel de la verdadera doctrina— que la política bolchevique, es decir, su política, es la correcta, y que el pueblo ruso, en su gran mayoría todavía campesino, ha de tender a la desviación pequeño-burguesa que caracterizaría a esta clase. La «doctrina correcta» da cuenta del carácter subjetivo de los errores de las masas, así como permite a una minoría consciente el imponer, por la fuerza si fuere necesario, lo que objetivamente mejor les convendría. No vale la pena extenderse en las raíces metafísico-dogmáticas —la «doctrina correcta»— y autocráticas —imponer al pueblo por la fuerza su propia felicidad— que caracteriza a esta posición. Baste con subrayar que en nada se distingue de las formas clásicas de antidemocratismo que conocemos desde Platón: en nombre de la «verdad» se impone al pueblo no lo

---

6 Rosa Luxemburg, «Die russische Revolution», en *Schriften zur Theorie der Spontaneität*, Reinbeck bei Hamburg, 1970, pág. 183.

7 Karl Kautsky, *Die Diktatur des Proletariats*, Viena, 1918.

que dice querer, sino lo que «realmente le conviene». Los socialistas europeos, en cambio, fieles a la tradición científica y democrática del continente, no conocen «doctrina correcta» ni aceptan dogma alguno, sino que dejan que la práctica social verifique o anule las distintas teorías de que disponemos, conscientes de que, en política, cualquier aproximación teórica sólo puede tener un éxito temporal y condicionado, y que la piedra de toque de su «verdad» radica, en último término, en conseguir la aprobación del mayor número. En vez de imponer su verdad al pueblo, el demócrata supone verdad lo que, en cada momento, decida libremente el pueblo.

La vía democrática hacia el socialismo parte del supuesto de que la mayoría de la población, el llamado «pueblo trabajador», está objetivamente interesado en la realización de este nuevo orden social, y que, por tanto, un programa de reformas socialistas contará con un consenso cada vez más amplio. El problema consiste en definir con cierta precisión sociológica qué se puede entender hoy, en una sociedad capitalista altamente industrializada, por «pueblo trabajador», de modo que quede claro qué clases y sectores sociales hay que considerar como portadores de la nueva sociedad. El postulado básico del marxismo, que la clase obrera constituye el «sujeto de la revolución», la clase a la que corresponde la edificación del nuevo orden, es tan convincente al nivel abstracto de la contradicción fundamental capital-trabajo como empíricamente cuestionable. El desarrollo del capitalismo llevaría consigo una polarización creciente en dos clases: burguesía y proletariado. La rápida concentración del capital aminora la clase burguesa a un número cada vez más exiguo, a la vez que obliga a proletarizarse a los demás sectores y clases sociales. Desde el momento en que más del 90 por 100 de la población componga el proletariado, el fin del capitalismo resulta forzoso. Desde estos supuestos, Marx no puede prever dificultad alguna entre el principio de la dictadura del proletariado —poder de la inmensa mayoría— y la realización de la democracia a que aspira el socialismo.

El engorro radica en la ambigüedad del concepto de proletariado. Desde el punto de vista de la economía política, se define por el hecho de no poseer bienes de producción, de modo que para subsistir está obligado a vender su fuerza de trabajo. La condición de asalariado es lo que en realidad hace al proletariado. Por otro lado, desde una perspectiva de análisis de clase, por proletariado se entiende tan sólo la parte de población asalariada que realiza un trabajo manual y en este sen-

tido se identifica con la clase obrera. Ciertamente, la concentración de capital ha convertido en asalariado al 80 por 100 de la población de un país altamente desarrollado. Pero ello no quiere decir que gerentes, cuadros técnicos y administrativos, funcionarios públicos de alto y medio nivel, etc., pertenezcan a la clase obrera. En su sentido sociológico restringido de trabajadores manuales, la clase obrera constituye del 30 al 40 por 100 de la población, con tendencia muy clara a disminuir, dado las posibilidades e imperativos de la automación y de la revolución tecnológica.

La ambigüedad que entraña el concepto marxista de proletriado —a estas dos significaciones todavía se añade una tercera filosófico-histórica con implicaciones sobre el carácter intrínsecamente revolucionario de la clase obrera— ha contribuido en gran manera a la confusión reinante. *En teoría,* la clase obrera, con el desarrollo del capitalismo, habría de convertirse en la clase mayoritaria, a la vez que las contradicciones crecientes del sistema agudizarían su conciencia revolucionaria. *De hecho, l*a clase obrera, llegada a un determinado nivel de desarrollo tecnológico, tiende a disminuir en relación con el resto de la población, y sobre sus ímpetus revolucionarios en la «sociedad de consumo» caben las más fundadas dudas. No se puede dejar de tomar seriamente en consideración el carácter claramente pequeño-burgués de la clase obrera de la Alemania occidental o de los Estados Unidos. El socialismo no tendría ningún futuro si no correspondiese a los intereses objetivos de la gran mayoría de la población, a esa masa tan heterogénea de asalariados manuales, administrativos y técnicos en los servicios y en la producción.

Aún es un tema relativamente virgen que exige gran cantidad de estudios empíricos el determinar qué capas y grupos sociales dentro de esa inmensa mayoría de asalariados apoyan con más vigor una política de transformaciones socialistas. En un primer análisis del electorado que votó por el Partido Socialista francés en las elecciones de marzo de 1973 se comprobó tan sólo una «falta de especificidad sociológica», aunque, claro está, la mayor parte de los votos provinieron de la clase obrera y de los empleados y cuadros medios, que son a la vez los grupos sociales más numerosos. Otros factores, como edad, sexo, medio rural o urbano, confesionalidad mostraron su importancia, pero no se logró establecer correlaciones significativas. Lo único que quedó claro es que «el desarrollo es máximo donde la implantación anterior era débil», es decir, el nuevo Partido Socialista francés alcanzar los mejores resultados

allí donde la S.F.I.O. apenas había tenido influencia, y a la inversa [8].

Detectar las capas sociales más fácilmente movilizables hacia el socialismo es un problema urgente que sólo puede resolverse con suficiente información empírica. Cabe presumir que los condicionamientos nacionales influyen poderosamente, de modo que los resultados variarán mucho de un país a otro. Diferencias importantes se comprueban hoy entre los países del norte de Europa —Alemania occidental, Austria, Holanda, Suecia—, donde posiciones antisocialistas ganan terreno, y el sur de Europa —Italia, Francia, Portugal—, donde es patente una movilización de amplios sectores de población hacia reformas socialistas. No cabe duda que el asalariado —incluyendo a la clase obrera— sigue oscilando entre soluciones capitalistas y socialistas, y que en estos vaivenes juegan un papel importante, además del grado de desarrollo y el mejor o peor funcionamiento de una política social, la experiencia habida con regímenes que se llaman socialistas —la realidad de la R.D.A. sigue siendo un antídoto eficacísimo frente a cualquier experimento socialista en la Alemania Federal— y la credibilidad de que gocen las instituciones vigentes: en Italia, mínima, por razones bien patentes. Lejos de dejarnos atolondrar por una metafísica de la historia, según la cual la clase obrera estaría destinada a realizar el socialismo, importa tener claro: 1. Que para realizar el socialismo no basta la clase obrera, una minoría todo lo cualificada que se quiera, pero al fin y al cabo una minoría, sino que es preciso incluir y movilizar a otros sectores de asalariados. De ahí la problematicidad de un partido socialista que se quiera exclusivamente obrero. 2. No existe ninguna evidencia empírica de que la clase obrera se mantiene más fiel o más inclinada al socialismo que otros sectores asalariados. 3. Una política socialista ha de tener presente estas oscilaciones del asalariado. Nada más grave que suponer la adhesión segura al socialismo en virtud de un análisis de los intereses objetivos de clase. En un plazo relativamente corto, unos pocos errores graves de la izquierda socialista pueden transformar a la mayoría de la población en furiosamente antisocialista.

Estas consideraciones quieren tan sólo insistir en la necesidad de llevar a cabo estudios serios y pormenorizados sobre la estructura social del capitalismo tardío —sobre el tema predominan las ideas más descabelladas—, a la vez que poner énfasis

[8] Colette YSMAL, «Renouvellement et stabilité de l'électorat socialiste», en *Nouvelle Revue Socialiste*, n.° 1, abril 1974, págs. 25-31.

en algo que, sin la enorme confusión que han creado algunas interpretaciones del marxismo, debería resultar de una claridad meridiana, a saber, que al socialismo sólo se llega por la *vía democrática,* la cual exige una movilización y el control democrático de amplios y muy heterogéneos sectores de la población asalariada, de modo que *gradualmente* vayan tomando posesión *directa* de los medios de producción. Porque, en último término, al hablar de socialismo, de lo que se trata es del control directo y democrático de la economía por los productores mismos. En este sentido, el socialismo no es más que la fase final del proceso de democratización que empezó con las primeras formas de control ciudadano sobre el aparato estatal (gobierno representativo). Ampliar hoy la participación ciudadana en el gobierno central, regional y muncipal exige como requisito previo la democratización de la empresa. El socialismo no significa una ruptura brusca con las instituciones democráticas del Estado burgués; antes, al contrario, es lo que posibilita su más amplio despliegue, su más profundo enraizamiento. Pues no cabe duda que el poder antidemocrático más fuerte que todavía subsiste, lo que impide la consolidación de un régimen auténticamente democrático, es la propiedad privada, es decir, más allá de todo control democrático de los bienes de producción. El socialismo supone la democratización de la economía como base para la democratización de todas las demás esferas de la vida social y política, a la vez que la democratización progresiva de estas esferas es requisito para llevar adelante la democratización paulatina de la esfera económica.

Socialismo y democracia forman una unidad indisoluble: no hay democracia real sin socialismo, pero tampoco socialismo que merezca este nombre sin democracia. Si el socialismo no es más que la realización plena de la democracia en las distintas esferas de la vida económica, política y social, no hay otra forma de llegar al socialismo que luchando por la democracia, que ampliando la base democrática en las diferentes esferas de la vida social. No hay socialismo sin democracia y sólo por la democracia se puede llegar al socialismo.

La experiencia histórica ha confirmado plenamente la relación intrínseca entre socialismo y democracia que el socialismo europeo formuló hace ya un siglo. La mera eliminación de la propiedad privada de los bienes de producción no garantiza por sí el surgimiento de una sociedad socialista. Ciertamente, sin propiedad privada no hay capitalismo, pero no todos los regímenes que desconozcan la propiedad privada de los bienes de producción son por ello socialistas. En consecuencia, dos

problemas básicos, que aquí no cabe más que mencionar, ocupan al pensamiento socialista contemporáneo: 1. Distinguir y criticar los distintos modelos de sociedad postcapitalista no socialista. 2. Diseñar las formas de control democrático de la economía que permitan la construcción de un auténtica sociedad socialista. La primera cuestión se discute bajo el epígrafe de «sociedad en transición»; la segunda, bajo el concepto de «autogestión».

6. Posibilidad de la vía democrática

Parecería inconcebible, pero así es, que en medios de la izquierda revolucionaria se argumente contra la vía democrática y paulatina hacia el socialismo, poniendo énfasis en el hecho de que hasta ahora en ningún país en el que se ha optado por esta vía se ha conseguido otra cosa que un adecentamiento y renovación del capitalismo. Y la observación resulta peregrina precisamente en boca de gentes que se creen de izquierdas. Si al modo conservador fijamos la mirada únicamente en lo que es o lo que ha sido, el pronóstico sobre el socialismo tiene que ser desolador. En el mundo capitalista altamente desarrollado continúa siendo un proyecto futuro que la persona realista y que se quiere práctica califica, no sin buenas razones, de utópico; en el mundo subdesarrollado, el socialismo ha desaparecido incluso de su horizonte, sustituido por una sociedad burocrática. Es ésta, ciertamente, una experiencia muy valiosa que no cabe echar en olvido, pero que de ningún modo invalida la posibilidad —y no se trata de otra cosa— de que lleguemos al socialismo. Hemos aprendido que la transición no es un proceso tan fácil como se desprende de algunos esquemas decimonónicos y, sobre todo, y es lo más importante, hoy sabemos que no basta el hundimiento del capitalismo para que esté asegurado el despliegue de una sociedad socialista. Pero esta enseñanza corrobora, en fin de cuentas, lo bien fundado de la vía democrática: podrá acabarse de forma más expeditiva con el capitalismo —el suprimir la propiedad privada de los bienes de producción puede ser un acto de fuerza que lleve a cabo una minoría—, pero sin la participación activa de las masas, sin una base ampliamente democrática, no cabe construir el socialismo.

Del simple hecho de que hasta ahora por la vía democrática no se haya llegado al socialismo no se puede concluir que sea imposible. Desde el campo marxista se han aducido argumen-

tos de más peso contra el reformismo. El más importante consiste en señalar la imposibilidad de que se modifiquen las relaciones capitalistas de producción mientras la burguesía controle el aparato estatal. Unicamente cuando la clase obrera se haya hecho con el poder político cabe una transformación de la estructura capitalista de la economía. A diferencia de la revolución burguesa que se produjo cuando el capitalismo había alcanzado ya una cierta entidad y necesitaba acabar con las superestructuras feudales para desarrollarse plenamente, la revolución proletaria ha de preceder al establecimiento de relaciones socialistas de producción. «La base para una nueva sociedad surge sólo después de haberse llevado a cabo una revolución política. El nuevo poder político que actúa como motor de transformación de las relaciones capitalistas de producción en relaciones socialistas es la llamada dictadura del proletariado. Este término pone énfasis en el hecho de que es el poder de la clase trabajadora sobre la anterior clase dirigente la que derriba la base económica de la vieja sociedad y construye la base para un orden nuevo» [9].

Dos supuestos fundamentales subyacen en esta posición: 1. El Estado en una sociedad capitalista está totalmente sometido a los intereses de la clase dominante. Es, por tanto, completamente ilusorio otorgarle un cierto grado de autonomía o de neutralidad en la lucha entre clases. Se podrá acceder democráticamente al gobierno, pero de ningún modo cabe llegar a controlar democráticamente el aparato estatal de la burguesía. Los socialistas en el gobierno tienen que elegir entre plegarse a los intereses básicos del sistema, conformándose con algunas reformas superficiales de pura cosmética, o ser catapultados, de manera más o menos violenta, fuera del gobierno en cuanto intenten en serio modificar el orden establecido. 2. El capitalismo no permite se desarrollen formas de economía mixta o ya embrionarias del nuevo orden de la misma manera como en el seno del feudalismo surgieron y se consolidaron las instituciones capitalistas que habrían de destruir aquella formación social. El régimen capitalista, controlando el aparato estatal, la empresa privada está en condiciones de instrumentalizar en su propio beneficio las pocas empresas de tipo cooperativo que puedan ir apareciendo ocasionalmente. Por lo demás, el crecimiento del sector público, lejos de amenazar al sistema lo fa-

[9] Oskar LANGE, «Fundamental Problems in the Period of socialist Construction», en *Papers in Economics and Sociology*, Varsovia, 1970, pág. 23.

vorece, al estabilizarlo y dejar en manos del Estado aquellos servicios que trabajan con pérdidas o aquellas inversiones necesarias para el funcionamiento de la economía, pero poco rentables. El capitalismo ha engendrado a la clase que, justamente, por no tener base económica propia, está destinada a destruirlo revolucionariamente: el proletariado nada tendría que perder a no ser sus cadenas. Desde estos supuestos resulta inconcebible cualquier transformación gradual, cualquier proceso paulatino que conduzca al socialismo. De ahí la necesidad de instaurar la «dictadura del proletariado» en el largo y difícil período de transición que va desde la toma revolucionaria del poder a la construcción del socialismo.

Ni que decir tiene que estos dos supuestos no han sido nunca aceptados por el socialismo europeo, ni siquiera en los momentos en que la influencia del marxismo había sido más fuerte. La concepción marxista del Estado, como mera superestructura que reproduce cabalmente la base económica, no deja de plantear serios problemas. En cambio, si se admite un cierto grado de autonomía en la esfera ideológica y en la política respecto a la económica, cabe dar cuenta de la dinámica que se produce precisamente en razón de estos desequilibrios. En la Europa actual no está nada claro que las ideas dominantes —por lo general de izquierdas— sean las de la clase dominante, ni que el aparato estatal actúe siempre al servicio de los grandes monopolios. Tensiones ideológicas y políticas entre los diferentes grupos sociales y económicos son fácilmente detectables en una democracia moderna. A pesar de la influencia que el gran capital ejerce sobre los medios de comunicación de masas, una parte considerable del electorado italiano vota por el Partido Comunista; y, en Francia, el candidato de la izquierda, François Mitterrand, consigue en las elecciones presidenciales de mayo de 1974 un poco más del 49 por 100 de los votos. Precisamente, la necesidad de conservar a una parte mayoritaria del electorado obliga a los gobiernos europeos a realizar una política de compromiso entre los distintos sectores y clases sociales. Cierto que la presión que hoy ejerce el gran capital, perfectamente organizado y en conductos directos con el poder, no es ni de lejos comparable con la que puede atribuirse al electorado, sin cohesión alguna y que sólo entra en función esporádicamente. Pero en vez de negar dogmáticamente la posibilidad de que las grandes masas puedan ejercer una presión suficiente sobre el poder, de lo que se trata es de organizarlas de tal modo que realmente lo ejerzan.

Afirmar la posibilidad de una vía democrática y paulatina

hacia el socialismo implica admitir, primero, que las instituciones democráticas del Estado burgués no se agotan en el sostenimiento de la propiedad privada de los bienes de producción. Antes, al contrario, la contradicción que lleva en su seno la revolución burguesa radica en que su pretensión universal de libertad, igualdad y fraternidad supera, y en el fondo niega, el orden económico en que se basa. Lejos de existir una relación consustancial entre la ideología humanista, liberal e igualitaria que crea la burguesía ascendente en los siglos XVII y XVIII y el capitalismo primigenio en que se apoya, hay que consignar una divergencia en aumento entre la ideología liberal y humanista y las instituciones democráticas, por un lado, y los intereses capitalistas, por otro. El socialismo nació de esta contradicción y, lejos de negar en bloque la tradición liberal, humanista y democrática de la burguesía ascendente, se siente su legítimo heredero. En consecuencia, no rechaza sin mayor discernimiento toda la tradición cultural y política de la burguesía, pues en su universalidad rebasa los intereses específicos de una clase. El socialista es consciente de que el *Estado democrático* ha sido uno de los grandes logros de la burguesía, que de ningún modo cabe degradar a simple órgano de dominación de la clase dirigente. El Estado contemporáneo cumple tareas en el orden social, educativo, sanitario, etc., que de alguna manera prefiguran las que llevará a cabo en la sociedad socialista. Por tanto, su fin no puede consistir en destruirlo, sino en conquistarlo democráticamente, convirtiéndolo así en instrumento principal de transformación socialista. Frente al antiestatismo anarquizante que subyace en Marx, los partidos socialistas europeos han mantenido una posición más diferenciada y, a mi modo de ver, más correcta, sobre el papel y significación del Estado burgués.

El segundo supuesto, imprescindible para que parezca verosímil la vía democrática y paulatina hacia el socialismo, es que en el seno de la sociedad capitalista, en virtud de su dinámica y de sus contradicciones, vayan cuajando instituciones económicas bien de carácter mixto, bien embrionarias del nuevo orden. Por un lado, la tendencia irreversible a la concentración monopolista lleva consigo una intervención creciente del Estado en la vida económica, bien como regulador indirecto de precios e inversiones, aplicando las técnicas convencionales de la política monetaria y fiscal, bien directamente, dada la expansión continua del sector público. No es difícil prever un enfrentamiento creciente entre los distintos Estados nacionales y las grandes empresas multinacionales, problema que ya ha plan-

teado incluso la conservadora socialdemocracia alemana. En este campo, las innovaciones futuras pueden ser realmente significativas. Pero tan primordial como las necesarias nacionalizaciones son cambios profundos en la estructura de la empresa: es preciso ampliar los derechos de los trabajadores imponiendo modelos de cogestión como primer peldaño hacia la meta final de la autogestión. Lo decisivo es crear las instituciones legales que permitan una participación y control creciente del personal sobre la empresa pública o privada. La democratización de la empresa constituye la reivindicación esencial por la que lucha hoy el socialismo. Téngase bien en cuenta que el peligro más serio que amenaza a la futura sociedad socialista no es tanto la propiedad privada, cada vez más parasitaria y residual, como la burocratización creciente de la economía y de la sociedad.

7. Un partido de nuevo tipo

En un punto hay que dar a Lenin toda la razón: al nivel concreto de la praxis política, el problema del socialismo es sustancialmente una cuestión de organización. Desde la perspectiva de las grandes etapas históricas pueden parecer determinantes los llamados factores objetivos. Resulta apasionante perseguir en el pasado cómo la burguesía, dando mil vueltas y no sin encajar frecuentes derrotas por caminos pacíficos y violentos, ha ido eliminando paso a paso, pero sistemáticamente, las instituciones feudales. En Europa, cada historia nacional es a este respecto bastante distinta, pero todas convergen en los mismos resultados. En el futuro, con una perspectiva suficiente, también parecerán necesarios los caminos insólitos y por lo demás contingentes que, en el mejor de los casos, condujeron al socialismo. La racionalidad en la historia se revela *post festum*. Para la acción política poco ayudan este tipo de especulaciones. La creencia de que la historia marcha con nosotros podrá elevar la moral, pero de ningún modo garantiza el éxito. En política, lo único que tiene sentido es fijar las metas a corto y largo plazo, una vez que el análisis de la situación concreta haya determinado los medios con que se cuenta. Un planteamiento semejante sólo cabe dentro del marco nacional.

Una de las características más sobresalientes del movimiento socialista europeo es su afán de subrayar una *vía nacional hacia el socialismo*. Del arsenal de viejos conceptos, ninguno hoy tan desacreditado como el de «internacionalismo proleta-

rio». A ello ha contribuido tanto la manipulación estalinista de este concepto, que ha servido de justificación para someter el movimiento comunista internacional a los intereses nacionales de la U.R.S.S., como a lo problemático de plantear una estrategia coherente para el proletariado del mundo entero. Parecería paradójico que el socialismo se nacionalizase en un momento en que económicamente dominan las empresas multinacionales y las naciones europeas están a punto de integrarse políticamente. Sin embargo, sin echar raíces profundas en las comunidades nacionales, de poco sirve la retórica internacionalista. Sólo cuando un movimiento socialista de envergadura se haya consolidado en los principales países de Europa occidental tendrá sentido plantear una estrategia europea hacia el socialismo. El nacionalismo de hoy, como medio de ampliar su base, es requisito del europeísmo de mañana, y tal vez del internacionalismo mundial de pasado mañana. Pero todo a su tiempo.

Si una estrategia socialista a corto plazo únicamente se puede fijar a nivel nacional y los partidos socialistas y comunistas de Europa recalcan su autonomía ideológica y organizatoria, en el momento actual sólo cabe un análisis comparativo de los distintos programas y tácticas, estudio que sobrepasa con mucho el alcance de este capítulo. En una introducción como ésta hay ceñirse a plantear problemas que atañen al movimiento socialista europeo en su mayor generalidad. Lo esencial ha consistido en recuperar a este nivel de abstracción la meta del socialismo —una sociedad autogestionada—, así como la única vía —democrática y paulatina— que puede llevarnos a este nuevo orden. Pero ¿cómo se traducen estos principios en la práctica?, ¿qué tipo de acción tienen que llevar a cabo los partidos socialistas para encaminarnos a esta meta? Unas brevísimas consideraciones sobre el tipo de organización capaz de una transformación democrática de la sociedad capitalista, tema en el que volveremos a insistir a lo largo de este libro.

La pregunta: «¿Qué hacer?» tiene su respuesta, como agudamente subrayó Lenin, en el plano de la organización. Pero aquí acaba nuestro acuerdo. Un partido férreamente disciplinado y fuertemente centralizado según el modelo burocrático por antonomasia, el ejército, podrá tal vez ser eficaz en la lucha clandestina contra un orden despótico, pero de ningún modo puede ser vía de partida para un movimiento democrático. El principio leninista de organización contiene en su entraña la sociedad burocrática que iba a resultar de la revolución bolchevique. Pero tampoco el modelo socialdemócrata de partido de masas, muy burocratizado, que se agota en la lucha parlamentaria,

parece la organización capaz de superar el capitalismo. El movimiento socialista tiene que resolver en la práctica lo que a muchos parece la cuadratura del círculo, a saber, una organización de masas que incluya a una parte considerable de la población asalariada cabalmente democrática en su organización, sin desviaciones burocráticas, pero también sin perder un ápice de cohesión y de eficacia. Si un tipo semejante de organización fuera por completo ilusorio, entonces habría que descartar el socialismo como un sueño irrealizable.

Teóricamente el problema es fascinante y ha de ocupar al científico social de manera creciente. En la práctica no es cuestión que se va a resolver de inmediato y no resulta lo más inteligente adoptar una posición extrema, absolutamente anticentralista y antiburocrática. Del anarquismo todavía tenemos que aprender mucho, tanto en lo que respecta a las formas concretas de superación del burocratismo, como de los errores y peligros mayúsculos que puede originar un antiburocratismo a ultranza. Plegándonos todo lo que fuere preciso a las exigencias de la realidad —realismo político por lo demás irrenunciable—, lo que importa, al nivel de generalidad en que nos movemos, es no perder de vista que el enemigo más contumaz de una posible sociedad socialista es la burocratización creciente de la sociedad industrial.

Lo dicho conlleva dos consecuencias esenciales en lo que respecta al tipo de organización que precisa un partido socialista capaz de cumplir con su misión histórica: 1. Ha de impulsar al máximo la democratización interna del partido, combatiendo enérgicamente las distintas formas de desprendimiento e independización del aparato burocrático respecto a la masa de afiliados. 2. Ha de ampliar su esfera de acción más allá de la actividad meramente política en sentido estricto. Ambas tareas se suponen mutuamente, de modo que no cabe caminar con éxito por la vía de la democratización interna sin haber dado el mismo avance por la de diversificación de actividades.

Reducir la actividad del partido, como es el caso de las socialdemocracias europeas, a las solas tareas electorales y parlamentarias conlleva un predominio absoluto de los dirigentes y funcionarios, la clase política profesional con acceso a los cargos (ministros, diputados, alcaldes, concejales), frente al resto de los afiliados, que se mantienen en el grado de atomización y de impotencia que caracteriza al electorado. Parlamentarismo como actividad primordial y casi exclusiva de un partido de masas y su burocratización progresiva son dos fenómenos correspondientes que se fortalecen mutuamente, como ya puso de

manifiesto la socialdemocracia alemana a principios de siglo. Su resultado es el que el grupo dirigente del partido, completamente desprendido de los intereses y del control de la base, termina por integrarse parlamentariamente en el sistema político y social establecido. Si bien el parlamentarismo cumple una función esencial en la movilización de las masas y en la selección de talentos políticos, no basta, sin embargo, para superar el capitalismo.

Empero, nada más erróneo que concluir que el parlamentarismo constituye *a priori* un obstáculo insalvable hacia el socialismo y que, por tanto, lo oportuno sería eliminarlo violentamente. La única alternativa hoy existente al régimen parlamentario es la dictadura, por esencia mucho más minoritaria y antidemocrática que cualquier forma de parlamentarismo. Se trata de no caer ni en una crítica aniquiladora del sistema parlamentario —hoy por hoy no existe alternativa— ni en su ingenua glorificación, como si en él se agotase la esencia de la democracia. Un partido socialista ha de aprovechar todo el juego que permita el combate parlamentario, ha de luchar con todo vigor por conseguir mayorías parlamentarias a nivel nacional, regional y municipal, pero de ningún modo puede y debe reducirse a esta lucha política. A diferencia de los demás partidos burgueses, que no tienen otra meta que conseguir el poder para administrar el orden establecido, un partido socialista lo que pretende es cambiarlo. La distinción nítida que establecen aquellos partidos entre el ámbito propio de la política y el económico y social, del que ya se ocupan otras instituciones —el empresariado, la administración pública o las Iglesias—, no puede aceptarla un partido socialista sin negarse a sí mismo.

El objetivo de un partido socialista es la transformación del orden socioeconómico establecido, y para ello no basta con llegar al gobierno. El acceso al poder es realmente significativo si detrás del partido y de su mayoría parlamentaria existen diferentes organizaciones de masas capaces de movilizar gran parte de la población en los distintos sectores y en las que pueda apoyarse para combatir desde dentro el aparato burgués del Estado. En último término, cuando se propugna la vía democrática hacia el socialismo, lo que está proclamando es la necesidad de ir creando, en el seno de la sociedad capitalista, parcelas económicas y sociales que contengan, ya en embrión, el nuevo orden a que se aspira. Pues si bien es cierto que el socialismo no puede ser el resultado de la acción dictatorial de una minoría, tampoco cabe esperar que surja de repente por un acto creador de las masas. Justamente en la promoción de estos

sectores embrionariamente socialistas, tanto en la vida económica —empresas sindicales autogestionadas, cogestión de las empresas, cooperativas de vivienda y de consumo con amplia base popular, etc.— como en lo social —universidades populares e institutos de educación de adultos gestionados por los trabajadores, «casas del pueblo» con una nueva calidad en la ocupación del ocio, etc.— consiste la tarea principal de un partido socialista. Labor que, desde luego sólo es posible en un régimen que garantice las libertades fundamentales: de ahí la importancia de conseguir o de conservar un Estado democrático de derecho.

De mayor trascendencia que los éxitos electorales o parlamentarios es la creación de un gran movimiento de masas que ponga en práctica nuevas formas de convivencia democrática. No vale darse a engaño: un empeño semejante no se lleva a cabo en una generación. El socialismo sigue divisándose en una lejanía considerable, pero lo decisivo es marchar por la buena ruta. Y sólo así, ampliando continuamente la base y con una cierta dispersión del poder en distintas organizaciones del partido cabe combatir con éxito las tendencias burocráticas inherentes a cualquier partido de masas. Como precisó Lenin, el problema del socialismo es una cuestión de organización, pero no de una como la que él propugnó, elitista y fuertemente burocratizada, sino de un *nuevo tipo de partido* capaz de llevar a la práctica una nueva y más profunda concepción de la democracia.

CAPITULO II

EL SOCIALISMO DIFICIL

En el capítulo anterior hemos enunciado los problemas fundamentales que hemos de ir desarrollando a lo largo del libro. Los temas ya no van a cambiar. Se trata tan sólo de hacerlos explícitos desde diferentes perspectivas. Nos hemos centrado en un concepto europeo de socialismo y hemos esbozado muy brevemente las estapas de su evolución, sin intentar siquiera una introducción histórica que estudiase en su contexto propio los significados más importantes que ha tenido este vocablo desde que surge hacia 1830. Tampoco estamos interesados en hueras especulaciones abstractas sobre lo que pudiera o debiera significar el concepto de socialismo, contraponiendo opiniones y barajando de seguro los tópicos más extendidos. Si un planteamiento histórico nos llevaría demasiado lejos y renunciamos a uno especulativo, no nos queda otra opción que concretar nuestro tema —qué entendemos por socialismo— a una situación determinada y preguntarnos no lo que ha significado en las distintas épocas y países, ni lo que debería significar en abstracto, sino simplemente lo que significa *hoy* para los socialistas españoles.

1. Socialismo democrático y socialdemocracia

¿Qué entendemos hoy los socialistas españoles por socialismo? A pesar de las muy distintas matizaciones, existe un acuerdo básico, tanto en los *fines* —acabar con la explotación capitalista del trabajo ajeno, realizando las condiciones socioeconó-

micas para el libre desenvolvimiento de cada individuo— como en los *medios:* llevar a cabo este proceso de emancipación por la vía democrática, es decir, aceptando la voluntad mayoritaria en un marco político en el que se respeten las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Para los socialistas, lo esencial en todo caso es la relación intrínseca entre fines y medios, de modo que no cabe alcanzar la libertad real que se pretende sin la profundización de la democracia.

Dos corolarios de la mayor importancia subyacen en esta definición: 1. El socialismo se concibe como la aspiración a un orden socioeconómico cualitativamente distinto del que hoy existe, que llamamos capitalista. La propiedad privada de los bienes de producción, las relaciones salariales, la división vertical del trabajo, la producción para un mercado y no para satisfacer las necesidades humanas son elementos constitutivos de la sociedad capitalista, que se denuncian como opresivos y, por tanto, incompatibles con la libertad real a que aspira el socialismo. 2. No cabe que una transformación tan radical de la sociedad se consiga en breve plazo por un acto de violencia revolucionaria. Si importa no hacer concesiones en las metas, por utópicas que puedan hoy parecer, no es menos necesario tener bien claro que su realización no está al alcance de la mano. El utopismo resulta reaccionario cuando pretende su pronto alumbramiento con ayuda de la violencia. Cualquier simplificación de socialismo, empeñándose a la vez en conseguirlo por las vías más expeditivas, se paga a muy alto precio. La simplificación que heredamos del pasado consiste en creer que basta la eliminación de la propiedad privada de los bienes de producción para lograr el socialismo. Cierto que resultan incompatibles propiedad privada y socialismo, pero también lo son propiedad estatal y socialismo. La socialización de la economía se presenta como un proceso mucho más largo y complejo de lo que imaginaron los clásicos del siglo XIX.

A menudo estos dos corolarios se han entremezclado de tal forma, que el uno ha terminado por obnubilar al otro. El hecho de que el camino hacia el socialismo se haya revelado mucho más largo y difícil de lo que se pensó en un principio —por un lado, el capitalismo, lejos de estar a punto de saltar destruido por sus contradicciones internas, ha dado prueba de una dinámica y de una capacidad creadora verdaderamente impresionantes; por otro, la eliminación de la propiedad privada de los bienes de producción se ha revelado como un factor insuficiente para caminar seguro hacia el socialismo— ha llevado consigo bien eliminar la meta socialista del horizonte histórico, bien

identificar el socialismo con el colectivismo burocrático que inesperadamente resultó de la estabilización de la economía en una situación caótica de «comunismo de guerra».

Mantener la dimensión utópica del socialismo, sin retoques en las metas, implica a la vez apartarlo de la actualidad. El socialismo ya no estaría a punto de convertirse después de una revolución triunfante en deslumbradora realidad, como se pensó en el siglo pasado; bajo este concepto se alude más bien hoy a toda una época histórica de continua democratización. Aherrojados todavía en los prejuicios decimonónicos, la tentación primera consistió, bien en eliminar el fin de una sociedad cualitativamente distinta del orden social establecido, que es lo que en rigor hemos de llamar «socialdemocracia», bien en identificar la propiedad estatal con el socialismo, que es lo que denominamos «colectivismo burocrático».

La socialdemocracia, al insistir unilateralmente en el segundo corolario —no cabe una transformación repentina ni violenta del orden establecido—, acaba por negar la posibilidad misma de un orden distinto del existente. Las relaciones capitalistas de producción se conciben como el único modelo apropiado para una economía «moderna» y «eficaz» sobre la que podría funcionar la «democracia». En vez de afirmar que no hay democracia sin socialismo, el socialdemócrata, confundiéndose con el liberal, insiste en que sólo resulta posible la democracia allí donde impera la libre empresa y la economía de mercado: prueba, el régimen despótico que ha surgido en los países que han eliminado la propiedad privada de los bienes de producción.

Lo que caracteriza a nuestra comprensión actual del socialismo es un distanciamiento crítico tanto de la socialdemocracia que, en último término, elimina de su horizonte la «meta final» de una sociedad distinta, como la tesis revolucionaria que se aferra a la idea de cambiar de repente y por la violencia el orden establecido. Hay que enterrar la noción revolucionaria de la conquista del poder por la clase obrera, sin por ello, a la manera socialdemócrata, aceptar la sociedad capitalista como la única capaz de combinar eficacia y libertad. Para el socialdemócrata, la actual «sociedad industrial» del mundo desarrollado no necesitaría más que algunos remiendos para aprender a controlar las crisis periódicas, propiciando un mejor reparto de la renta nacional.

En lo que desgraciadamente no se ha insistido lo suficiente es en la complementariedad y mutua dependencia del reformismo socialdemócrata con el revolucionarismo verbal y dogmático. Mientras la única alternativa a la socialdemocracia sea la

revolución, la socialdemocracia se desarrollará tranquilamente. Si se afirma dogmáticamente que en una sociedad capitalista no cabe una política de verdad socialista y se comprueba que la hora revolucionaria se evapora en un futuro incierto, en la práctica habrá que aceptar a regañadientes y a beneficio de inventario el orden social dado. Si además lo comparamos con la sociedad «revolucionaria» surgida de la nacionalización de los bienes de producción, el «colectivismo burocrático» que ha realizado el modelo soviético, que se considera la única alternativa realista al capitalismo, entonces sí que la socialdemocracia se confirma como la única salida posible.

Lo que caracteriza al socialdemócrata es su aversión a distinguir entre socialdemocracia y socialismo, proclamando que estos dos conceptos son idénticos, o bien que las diferencias teóricas que pudieran construirse no tendrían significación política práctica. Este libro está construido sobre el supuesto de que la diferencia entre ambos conceptos es esencial, hasta el punto de que sólo en base a esta distinción cabe abrir un horizonte futuro para el socialismo.

Hay, en el fondo, dos tipos de socialdemocratismo: uno, abierto y descarado, que niega simplemente la posibilidad de un orden económico distinto del existente, reduciendo el fin de un partido socialista a conseguir «más justicia y libertad» en el interior del mismo sistema; otro, práctico, que, manteniendo en teoría los fines de un orden social distinto, no es capaz de concebir y de aplicar una política, aquí y ahora, que de algún modo integre la perspectiva por la que se lucha. En una lejanía imprecisa se sigue manteniendo la meta socialista, pero no está asumida en la política cotidiana. Recogiendo los viejos prejuicios marxistas se parte de postular la imposibilidad de una política socialista mientras duren relaciones capitalistas de producción, dando por lo demás por supuesto, que por la propia dinámica del desarrollo objetivo de la historia llegara un día en que efectivamente se pueda hacer una política socialista. Y cuando se pregunta, en qué puede consistir esta política socialista, que hoy parece imposible y que mañana habrá madurado por sí misma, nos encontramos que no se piensa más que en la nacionalización de la economía, entiéndase, su estatalización. Importa dejar bien claro que socialismo y economía estatalizada nada tienen que ver entre sí y que, además de distinguir entre socialismo democrático y socialdemocracia, hay que separar nítidamente socialismo y colectivismo burocrático.

2. La vía política y la vía social hacia el socialismo

Estas consideraciones sobre lo que significa hoy el socialismo en España nos ha llevado a dejar constancia de algo que de ningún modo puede sorprender: desde el momento en que no nos conformamos con unos cuantos tópicos generales las cosas son todo, menos claras. Frente a las afirmaciones rotundas del pasado —que sólo perviven en minorías cerradas dentro de los partidos, sin mayor incidencia social—, los socialistas de cara a la sociedad propenden a un cierto escepticismo realista. Ya no resulta tan fácil creer que el modelo soviético o la práctica socialdemócrata del norte de Europa conducen sin más al socialismo. Como hasta 1917, el socialismo constituye otra vez un horizonte histórico, pero, a diferencia de aquella época, nuestro tiempo arrastra una experiencia que invalida la mayor parte de los supuestos que entonces pasaban por «científicos».

En los últimos cien años, nunca como ahora habíamos manejado un concepto tan borroso de socialismo ni fue tan patente la falta de una política socialista adecuada a los condicionamientos del momento. O se desentierran ídolos pasados, o se actúa con el oportunismo más a ras de suelo. Si llegamos a convencernos de que el socialismo es imposible —depende de cómo se defina— o de que no está al alcance de la mano en bastantes generaciones —se trata de un proceso histórico— digámoslo claramente, pero de ningún modo toleremos que se venda un viejo liberalismo remozado como si se tratase del socialismo que anhelan los pueblos.

La crítica del orden social establecido resulta eficaz si incluye una perspectiva del nuevo, así como del modo de avanzar hacia esta meta. En el pasado, los marxistas pusieron de relieve las contradicciones del sistema capitalista, así como la dinámica de la lucha de clases que culminaría en la toma revolucionaria del poder por la clase obrera. Hoy no desconocemos estas contradicciones ni negamos la lucha de clases, pero sabemos que se trata de un proceso que puede tener muy distintas salidas y sólo una puede considerarse socialista. En todo caso, lo que parece claro es que no hay relación necesaria entre el avance hacia el socialismo y la toma revolucionaria del poder; probablemente incluso el tipo de revolución decimonónica, típicamente burguesa, impida su realización. Si logramos tomar conciencia de que la noción de revolución que arrastra Marx y el socialismo marxista supone la sacralización de la Revolución

francesa como modelo definitivo de revolución, y que este tipo de revolución, típicamente burgués, implica siempre la consolidación de una minoría en el poder, habremos dado el salto decisivo que nos separa de la tradición decimonónica.

La sociedad capitalista altamente industrializada nos ofrece nuevas posibilidades para avanzar hacia el socialismo, pero también nuevos peligros y desvíos posibles. Nuevas oportunidades en las distintas formas de organización social al margen del Estado y demás instituciones paraestatales, pero también nuevas amenazas en el grado de burocratización que ha alcanzado el sector público y la economía privada. La terrible experiencia histórica de este siglo XX que se resume en el estalinismo y el fascismo ha dejado por lo menos estos dos puntos con la claridad debida. Los cambios sustanciales que precisa la sociedad se inician y se sustentan en ella o, si provienen del poder, terminan por robustecerlo, extendiendo la burocratización. Los procesos sociales que cuentan tienen su propia dinámica al margen del Estado. El Estado no antecede a la sociedad, sino que va a su zaga.

En el pasado los socialistas pecaron de estatistas. Hubo un tiempo en el que la estatificación de la economía y de la sociedad se presentó como panacea universal. La historia vivida nos obliga a corregir un estatismo tan simplista como resbaladizo. Frente a esta tradición burocrática y estatal, el socialismo tiene que subrayar, como su nombre indica, su carácter social: es decir, *su ámbito es la sociedad y su fin la libertad.* Consciente de lo que significa el Estado como instrumento de poder de la clase dominante, el socialismo no puede caer en el error contrario, diluyéndose en un anarquismo, todo lo atractivo que se quiera, pero que olvida condicionamientos objetivos y, sobre todo, el posible papel liberador que en determinadas condiciones puede desempeñar el Estado.

En el pasado dominó lo que llamaríamos «vía política hacia el socialismo». Fundamental resultaba la organización política de la clase obrera para conquistar un día el poder político. Sólo dominando el aparato del Estado —o destruyéndolo— cabría la posibilidad de iniciar la construcción del socialismo. En cambio, la experiencia de este siglo potencia la que valdría llamar la «vía social hacia el socialismo», que supone reconocer la primacía de la actividad social de los diferentes grupos que se organizan democráticamente para conseguir las más diferentes metas económicas, sociales y culturales. Es en la sociedad, en sus modos de producción, en sus formas de pensar y de comportarse donde tienen que operarse los cambios profundos que

permitan avanzar hacia el socialismo. Los socialistas en el gobierno pueden ir tan lejos como lo permita la sociedad sobre la que actúan. Desde el Estado y la superestructura política sólo se pueden cerrar procesos que se iniciaron en la sociedad. En consecuencia, la dimensión política no es la prioritaria, ni mucho menos la fundamental, en la marcha hacia el socialismo.

3. Crisis del socialismo marxista

A nadie medianamente perspicaz se le oculta que el socialismo pasa por una profunda crisis. Como horizonte de liberación, continúa atrayendo a las clases oprimidas y a los hombres que no se resignan ante la injusticia y la opresión, pero los que un día parecieron sus fundamentos «científicos» han terminado por desmoronarse. Cabalmente nadie sabe con exactitud cómo podemos avanzar hacia otro orden más libre y más justo. Pero, frente a las fórmulas rígidas del pasado, hemos aprendido que los caminos son muchos y variados. El porvenir no está escrito y se hace camino al andar. La imaginación puede y debe campear por sus respetos. Empecemos librándonos de las falsas seguridades del pasado, de los análisis presos en conceptos desfasados, del temor a que sea verdad todo lo contrario de lo que pensamos. Lo que un día se denunció como «socialismo utópico» vuelve a ser nuestro punto de partida. El que se derrumba es el que se llamó a sí mismo «científico».

Los intelectuales marxistas de mayor prestigio hablan de nuevo de la crisis del marxismo. Hay que insistir en *de nuevo*, ya que este estado crítico constituye su estado normal desde el primer revisionismo. En el capítulo anterior ya señalábamos que el marxismo sólo puede ser en la forma de revisionismo. Pues bien, la crisis del marxismo de la que hoy se habla es la crisis del revisionismo socialdemócrata y la del revisionismo leninista. La primera forma de revisionismo ha terminado por eliminar el último residuo marxista, pero ha echado también por la borda la meta socialista. La socialdemocracia se constituye así en una de las corrientes predominantes del capitalismo avanzado. Por su parte, el revisionismo leninista ha dado origen a una nueva formación social, el colectivismo burocrático, que, lejos de constituir una forma de transición hacia el socialismo, reproduce mecanismos sociales de dominación que en algunos aspectos corresponden a formas precapitalistas de dominación. El revisionismo marxista, en sus dos vertientes, que consiguió penetrar en el movimiento obrero, se ha conver-

tido, en la Europa occidental, en la nueva ideología del capitalismo avanzado, y, en la periferia, en un régimen burocrático que en el proceso de industrialización y de organización del Estado moderno sustituye a la burguesía.

La crisis actual del socialismo es en gran parte resultado de la crisis del marxismo. Los dos revisionismos que lograron implantarse históricamente, el socialdemócrata ha terminado por eliminar al socialismo, al deshacerse del marxismo, y el leninista lo ha congelado dogmáticamente, convirtiéndolo en mera legitimación ideológica de la nueva formación social, el colectivismo burocrático, que si bien nada tiene que ver con el capitalismo, tampoco con el socialismo, patentizando así el enorme error de haber creído que a la altura de nuestro desarrollo histórico sólo cabía la disyuntiva capitalismo o socialismo. La realidad se presenta siempre mucho más compleja y creadora de lo que pudo predecir el mejor análisis teórico.

Los que no se resignan a romper la identidad socialismo-marxismo, y son por lo demás conscientes de lo que ha dado de sí estos dos revisionismos, proponen como tabla de salvación el volver al marxismo originario, al pensamiento de Marx depurado de sus degeneraciones socialdemócrata y leninista, para desde esta base segura redefinir marxistamente la situación en que nos encontramos y la pertinente estrategia. Ahora bien, toda vuelta a la situación originaria, además de implicar una utopía tan reaccionaria como imposible, tiende a interpretar la historia vivida como un continuo error: si no se hubieran apartado de la buena doctrina, otro gallo nos cantaría. ¿Habrá forma más ingenua de idealismo? Desde una interpretación que se pretende genuina, se condenan las formas concretas que encarnó el marxismo, acusándolas de desviaciones heréticas, sin indagar siquiera los motivos por los que socialdemócratas y leninistas se apartaron de postulados fundamentales de Marx. El que las cosas hayan transcurrido de manera muy distinta a la que Marx había previsto no se debe a imponderables accidentales ni a traiciones personales, sino simple y llanamente a que una buena parte del análisis de Marx, así como sus pronósticos más relevantes, se han revelado falsos. Desde esquemas superados, hipótesis falsificadas por la historia, conceptos ambivalentes y doctrinas agotadas no se puede hacer política, y menos que nada política socialista.

Se manifiesta así la radicalidad de la crisis por la que pasa el socialismo: por un lado, la eliminación sistemática de contenidos marxistas ha llevado a un socialdemocratismo que difícilmente puede diferenciarse ya de un liberalismo con ciertos ri-

betes sociales y progresistas; por otro, el mantenimiento retórico de un marxismo harto aguado —empeñarse en una política cabalmente marxista es ilusorio en cuanto sus supuestos fundamentales han sido falsificados por el ulterior desarrollo histórico— impide plantear una política auténticamente socialista acoplada a los condicionamientos específicos de nuestro mundo. El marxismo se convierte así en mera tapadera ideológica de un pragmatismo acomodaticio que de ningún modo cuestiona en la práctica el sistema que rechaza en teoría.

En tres tipos cabría clasificar a los distintos marxismos actuantes en la Europa de hoy. Un *marxismo revolucionario*, a la búsqueda del marxismo genuino, que pone énfasis tanto en la crisis general y definitiva del capitalismo como en el carácter intrínsecamente revolucionario de la clase obrera. El que, a pesar de la crisis definitiva del capitalismo, la clase obrera no dé demasiadas muestras de ímpetu revolucionario se debería al grado total de enajenación a que habría llegado en la sociedad de consumo y a la manipulación que sobre ella ejercerían las organizaciones sindicales y políticas que se pretenden obreras, pero que, en realidad, controlarían burócratas al servicio del sistema.

Al separarse de las organizaciones que realmente encuadran al movimiento obrero y perder todo contacto con las masas, los marxistas revolucionarios, en gran parte provinientes de sectores intelectuales desclasados, se aíslan en pequeños grupos que mantienen una enorme presión sobre sus miembros, pero que no tienen otra alternativa que agotarse en una retórica revolucionaria, o bien iniciarse en las distintas formas de subversión armada. Al final, nada aísla tanto como el terrorismo, y una vez emprendida esta vía no se encuentra salida fácil aun cuando se descubra que objetivamente se está sirviendo a las fuerzas políticas más reaccionarias. La confrontación armada es justamente la forma de lucha en la que los fascistas tienen, hoy por hoy, todas las de ganar.

«La construcción del socialismo en un solo país», y además en uno subdesarrollado, da origen a un *marxismo burocrático*, que constituye el segundo tipo y el más extendido de los hoy existentes. El marxismo, solidificado en dogma, se convierte en mera ideología legitimadora de las relaciones de poder dadas. Aunque, indudablemente, el marxismo burocrático tiene su asiento principal en la Unión Soviética y en los países y partidos comunistas que se mueven en su órbita, no es, desde luego, el único de esta clase. La burocratización del movimiento obrero no es un fenómeno exclusivo de los partidos que se

reclaman de Lenin. Ya en la socialdemocracia alemana, anterior a la Primera Guerra Mundial, aparecen formas de marxismo burocrático, es decir, reinterpretación del pensamiento de Marx acoplado a los intereses específicos del aparato del partido.

Con todo, este marxismo burocrático aspira a la superación de relaciones capitalistas de producción, aunque su sustituto no sea el socialismo, sino el colectivismo burocrático. La crítica más incisiva y contundente que se puede hacer al socialismo tiende a mostrar que no cabría opción fuera del dilema capitalismo o colectitvismo burocrático, y que, por consiguiente, habría que decidirse por el menor de estos dos males. Para unos, el mal menor sería el colectivismo burocrático, que con todos sus manifiestos inconvenientes supone haber superado la contradicción fundamental —producción social, propiedad privada de los bienes de producción—, quedando con ello eliminados las crisis periódicas, el paro y la inseguridad social y política que caracteriza al capitalismo. Para otros, el mal menor sería el capitalismo, que por lo menos deja un ámbito de libertad individual y social para luchar por su transformación.

Acudiendo al «grado de desarrollo de las fuerzas productivas», a la «correlación de fuerzas», a las «contradicciones, síntesis y nuevos equilibrios y desequilibrios», que caracterizan a una sociedad clasista, etc., etc., cabe desarrollar, en una terminología más o menos de sabor marxista, una nueva justificación del capitalismo, por lo menos para nuestra situación histórica. Nos encontramos así con el tercer tipo de *marxismo, como ideología del capitalismo tardío*. La sociedad capitalista avanzada es capaz de asimilar las más diferentes ideologías como base de su legitimidad. Tal vez su mayor proeza ha consistido en haber convertido al marxismo en uno de los factores que contribuyen a su estabilidad si es que hoy no resultasen evidentes muchos elementos burgueses que se ocultan en el pensamiento de Marx. Así como los eurocomunistas italianos no tienen mejor política que apoyar desde fuera —desde dentro no se les permite— al gobierno de minoría cristianodemócrata, así no faltan en nuestras latitudes «marxistas modernos» convencidos de la utilidad de la propiedad privada de los bienes de producción en casi todos los sectores económicos.

4. Estado y sociedad

Salir de esta falsa disyuntiva —socialdemocracia o marxismo— es el reto que tiene planteado el socialismo contemporá-

neo para recobrar su identidad. Si se mantiene este falso dilema entonces existe el peligro de que el socialismo se divida en una multitud de sectas a la búsqueda del marxismo genuino, por completo inoperantes al colocarse al margen de la sociedad, extremándose en sus luchas intestinas, y un partido socialdemócrata, en nuestra latitud cada vez más reducido, también incapaz de cuestionar el orden social dado, al encuadrarse por completo dentro de él. En las dos formas, puramente marxista o puramente socialdemócrata, un partido socialista resultaría inocuo a los intereses dominantes.

Hemos señalado la procedencia marxista de la socialdemocracia y del colectivismo burocrático para hacer explícita su intrínseca complementariedad. No se trata de seguir hilvanando remiendos entre estos dos polos, sino de romper con sus supuestos comunes, es decir, librar al pensamiento socialista de la camisa de fuerza marxista. La operación es todo, menos sencilla; para tomar conciencia de su complejidad resulta imprescindible un pequeño rodeo teórico.

Nos llevaría muy lejos, además de repetir conocimientos sólidamente asentados, si intentásemos fundamentar la conexión histórica entre el nacimiento del capitalismo y la disolución del concepto unitario de *res publica* en la dicotomía sociedad-Estado. El capitalismo, como modo de producción, y el Estado, como institución que no se deja subsumir en los conceptos de gobierno, autoridad o poder político, son realidades en su origen específicamente europeas que definen la Modernidad. Desde que la ciencia política italiana renacentista introdujo el concepto de Estado y la filosofía política de la burguesía ascendente, en los siglos XVII y XVIII, el de sociedad frente al Estado, toda reflexión política que concierna a la realidad específica de la Europa moderna ha de ocuparse primordialmente de la relación de estos dos conceptos básicos.

Con el concepto de «sociedad», la burguesía delimita una esfera «privada» para la actividad y desenvolvimiento del individuo, en la que no se consiente la intervención del Soberano. La propiedad, la libre actividad económica, la religión y las ideas que se profesan, la educación propia y la de los hijos, en fin, la «búsqueda de la felicidad», cada cual a su manera, siempre que se respete a los demás, se postulan como derechos inalienables del hombre. Al Estado se le encargan las tareas que, reputándose imprescindibles para garantizar la libertad de la vida social, sólo pueden llevarse a cabo en la esfera pública: la defensa del país, la policía interna, la justicia, la realización de obras públicas para promover el bienestar general, etc.

Cabe concretar la libertad a que aspira la burguesía en tres puntos esenciales: 1. Que el Estado no intervenga en la sociedad, es decir, que respete cada una de las esferas privadas que la constituyen; el ámbito privado de cada individuo es sagrado, en él ocupa, desde luego, lugar preeminente la propiedad y la actividad económica libre en busca de un lucro. 2. Que los poderes del Estado estén separados y reglamentados por un ordenamiento jurídico tan preciso y universal como el que ordena las relaciones privadas entre los ciudadanos (principio de legalidad y de separación de poderes). 3. Que las personas que estén al frente del Estado ejerzan sus poderes dentro de un marco legal y hayan sido elegidas para un plazo determinado por la mayoría de los ciudadanos (principio democrático de representación).

El Estado moderno se organiza según principios burocráticos de eficacia que tienen su modelo originario en el ejército profesional y permanente, disciplinado y jerarquizado, con la utilización racional de la más moderna tecnología. Como ha subrayado Max Weber, lo que caracteriza al Estado moderno es que los instrumentos de trabajo que utilizan los funcionarios públicos son propiedad pública. Propiedad estatal de los instrumentos de trabajo y de gestión, principio burocrático de organización, junto con los ya mencionados principios de legalidad y de representación, constituyen lo que podríamos llamar la «esencia» del Estado moderno.

Tal como surgieron históricamente, los conceptos de sociedad y de Estado suponen relaciones capitalistas de producción. Cuanto mayor el desarrollo capitalista, más clara la distinción entre la esfera privada y pública, más nítida la diferencia entre sociedad y Estado. Cuanto más eficiente la sociedad, como ámbito propio de la actividad económica, mejor organizado está Estado, mayor es su capacidad financiera y burocrática para llevar a cabo sus tareas específicas, lo que a su vez potencia el desarrollo capitalista. En cambio, donde el capitalismo encontró grandes dificultades para su despliegue, donde la burguesía no pudo imponerse como clase dominante, el Estado apenas pasó de ser una mera entelequia jurídica, con mínima presencia social. A un capitalismo frágil corresponde un Estado débil e ineficaz, lo que no quiere decir, antes al contrario, que el poder político no sea autoritario y deje de inmiscuirse en esferas que desde el punto de vista de la burguesía son claramente privadas. La combinación autoritarismo despótico y debilidad estatal se comprueba en muchos países subdesarrollados; el

franquismo, en algunas de sus etapas, tiene a este respecto un valor paradigmático.

La relación sociedad y Estado, tal como la concibe la burguesía en los siglos XVII y XVIII, y en gran medida se realiza en el XIX, resulta, con el desarrollo ulterior del capitalismo, cada vez más problemática. Por lo pronto, su racionalidad se impone únicamente desde la perspectiva del propietario. Para el que sólo dispone de su fuerza de trabajo, la libre actividad económica significa en realidad aceptar su condición de mano de obra. La disolución de la sociedad en una suma de individuos, en principio libres e iguales, no oculta las diferencias de clase, antes al contrario las exacerba. La sociedad feudal reconocía y justificaba sus desigualdades. Su principio era el de la diversidad, y cada cual, como en el gran teatro del mundo calderoniano, tenía que cumplir con su papel. La sociedad burguesa es la primera que proclama la libertad, la igualdad y la fraternidad como base y legitimación del orden social. Se comprende que las diferencias de clase, las limitaciones de la libertad que ésta conlleva, resulten especialmente intolerables. Esta divergencia entre principios y realidad es un factor nada despreciable de la dinámica de cambio, del potencial revolucionario que subyace en el capitalismo.

La discrepancia llega a su punto culminante cuando el «individualismo posesivo», para utilizar la expresión de C. M. Macpherson, que sustenta la concepción burguesa de la sociedad y su correspondiente relación con el Estado, deja de ser económica y socialmente operativo. En el capitalismo avanzado, el empresario individual, a la vez capitalista y gerente de su negocio, ha tenido que ceder el paso a la sociedad anónima, a la gran empresa, que en el proceso creciente de interdependencia económica hace tiempo que saltó las fronteras nacionales, convirtiéndose en las tan temidas compañías multinacionales. A su vez, el obrero organizado en sindicatos vende colectivamente su fuerza de trabajo. El precio del trabajo no se fija ya por la ley de la oferta y la demanda —el paro no incide sustancialmente sobre el precio del trabajo—, sino que parte de unos salarios mínimos que los sindicatos han negociado colectivamente y para una rama de la producción con los representantes patronales. La política de baja de los salarios sólo resulta posible por el camino peligrosísimo de la inflación o frenando el índice del crecimiento salarial, pero en cifras absolutas los salarios son prácticamente irreversibles.

En el capitalismo avanzado, el individuo como empresario o como trabajador independiente desempeña un papel cada vez

más marginal. La sociedad individualista del ideal burgués se ha convertido en realidad en un conglomerado de sujetos colectivos, cada uno con su propio campo de influencia, todos ellos fuertemente organizados y con un inmenso capital acumulado. Los sindicatos han terminado por afianzarse como uno más de estos centros de poder en algunos países europeos con fuerza considerable. La sociedad burguesa no puede definirse ya como una suma de individuos con una actividad económica independiente y libre, sino como el conjunto de sujetos económicos colectivos fuertemente burocratizados que sólo por continuar siendo propiedad privada reclaman como propia la esfera social de lo privado, acudiendo a las formas tradicionales de legitimación burguesa.

Dos procesos fundamentales inciden en el capitalismo tardío: 1. El proceso de acumulación y de concentración del capital pone de manifiesto lo ilusorio de la pretendida base individualista de la sociedad —la sociedad concebida como una suma de individuos libres e iguales—, pero una filosofía individualista continúa siendo la única forma de legitimación de relaciones capitalistas de producción. Ello explica, por un lado, el carácter ideológico creciente de la filosofía burguesa; por otro, la discrepancia, también en aumento, entre la base socioeconómica y las ideas dominantes. 2. El Estado ha tenido que ir ampliando sucesivamente su campo de acción —educación, seguridad social, cultura, etc.—, ámbitos que desde los supuestos clásicos de la burguesía pertenecen claramente a la esfera privada. Mucho más grave aún, el Estado tiene que intervenir cada vez con mayor frecuencia y en aspectos más variados en la esfera económica como condición imprescindible para mantener un cierto equilibrio social y económico que el libre desarrollo de las fuerzas económicas pondría radicalmente en cuestión.

De lo que importa dejar constancia, como resultado de la incidencia de estos dos procesos, es que tanto las grandes empresas como el Estado estructuran su acción a través de organizaciones altamente burocratizadas. El modelo burocrático de organización que desarrolló primero el Estado lo reproducen después los sujetos económicos colectivos del llamado sector privado. El aparato burocrático de una gran compañía multinacional se parece cada vez más al de un Ministerio: en sus formas de organización se influyen y se imitan mutuamente. Hoy ya no cabe la menor duda de que la tendencia más general y más profunda del capitalismo tardío es la burocratización creciente de la sociedad.

El Estado en el capitalismo desarrollado se legitima democráticamente y el aparato estatal, aunque con manifiestas tentaciones y posibilidades de una relativa autonomía, se ve limitado por las instituciones políticas dependientes del voto popular. En cambio, no existen todavía, o son harto insuficientes, medidas de control de los aparatos burocráticos del sector privado, cuya actividad, por lo demás, resulta decisiva para el bienestar y la paz de todos los ciudadanos. El Estado se ve obligado a planear y llevar a cabo una política social y económica para la que a menudo le faltan instrumentos de acción. Por otro lado, una conciencia democrática creciente no tolera ya reservados sociales en los que impere la voluntad de unos pocos, a pesar de que sus decisiones inciden sobre toda la sociedad. El proceso general de democratización que inició la revolución capitalista encuentra hoy límites infranqueables en los intereses minoritarios del sector privado burocratizado que desde luego no limita ni corrige la ficción de un mercado libre y transparente.

Desde la perspectiva de las grandes empresas, la intervención creciente del Estado resulta tan intolerable como desde la de la sociedad y las instituciones políticas del Estado democrático el poder que concentran determinados sectores económicos. La situación actual en sus rasgos más generales puede caracterizarse tanto por la frustración creciente de ambos —ni las grandes empresas ni el Estado democrático pueden imponer su propia política— como por la conciencia de que, dado el equilibrio de fuerzas, están condenados a entenderse. Las instituciones democráticas enmarcan las condiciones reales de la negociación, en la que, desde luego, cada parte pretende imponer a la larga sus posiciones y principios.

Hay, sin embargo, dos formas harto simplistas de resolver el conflicto que constituyen tentación permanente en un régimen democrático. En la primera solución, los grandes centros económicos del sector privado, es decir, la sociedad capitalista en su actual grado de concentración, absorbe y controla el aparato estatal. Suprimiendo o recortando las instituciones democráticas, el conflicto sociedad-Estado aparentemente se resuelve en un modelo unitario, en el que los intereses económicos dominantes y el Estado convergerían en la realización de una misma «tarea nacional». La mítica armonización de todos los intereses se realizaría en un concepto irracional de nación. Se trata del *modelo fascista,* del que, desde luego, caben muy distintas formas, algunas muy sutiles y modernizadas. Mientras el proceso de democratización no llegue a la esfera social, a la so-

ciedad misma, en el capitalismo avanzado el fascismo constituye una amenaza permanente. La segunda falsa solución consiste en que el aparato estatal se apodere de la economía, la estatalice, creando la ficción de que así se ha logrado una unidad armónica entre sociedad y Estado, sobre la que en realidad se levanta la dominación incontrolada de la burocracia estatal. Es el *modelo leninista-estalinista,* posibilidad siempre actual allí donde sociedad y Estado son demasiado débiles para llevar a cabo una política de rápido desarrollo social y económico: es, si se quiere, la tentación propia del mundo subdesarrollado.

No hace falta insistir en que los socialistas rechazan el control del Estado por las grandes empresas privadas, siendo especialmente susceptibles frente a cualquier solución de carácter fascista, por muy disimulada y amañada que se presente, así como repudian la fórmula estatista-burocrática que lleva en su entraña formas preburguesas de dominación y significa objetivamente el fin de las libertades.

Los socialistas no sólo propugnan ninguna solución simplista del actual conflicto sociedad-Estado, sino que son particularmente conscientes de los peligros que conlleva cualquier simplificación. Más aún, la diferenciación sociedad-Estado, esfera privada y pública, que históricamente inicia y fundamenta la burguesía, supone para los socialistas un avance histórico de significación universal. No creemos ni aspiramos a una armonía total, a una sociedad perfecta, en la que, desaparecidos todos los conflictos, al suponer que su única fuente fuere la estructura de clases que cimenta la propiedad privada de los bienes de producción, el Estado y el Derecho podrían disolverse un día en la mera «administración de relaciones objetivas». En consecuencia, no conciben, en la dimensión histórica en la que cabe hacer pronósticos, el fin del Estado justamente, porque no lo reducen a mero instrumento de dominación de la clase dominante. No es que ignoren cuál ha sido y cuál sigue siendo la función del Estado burgués en el mantenimiento de la sociedad capitalista, pero saben que de ningún modo se agota en ella.

Precisamente porque el Estado es más que instrumento de dominación asistimos hoy a la conflictividad creciente entre el Estado democrático y los centros económicos dominantes. Así como estamos al cabo de la calle sobre las flaquezas y no pocos sinsentidos del análisis marxista del Estado, distinguimos muy bien entre un análisis científico de la realidad y una filosofía mesiánica de la Historia que seculariza el «Reino de Dios» en «sociedad comunista». La distinción entre sociedad y Estado

que inicia el capitalismo pervivirá en el socialismo, ya que competen al Estado funciones esenciales en la organización libre y pacífica de la sociedad. Los socialistas desenmascaran al anarquismo como ideología residual de un individualismo desclasado, incluyendo en el rechazo los elementos puramente anarquistas del pensamiento de Marx. Lo cual no es óbice para que dejen de aprender, en determinados aspectos parciales, de algunos pensadores anarquistas, tan afanados como los socialistas en la democratización de la sociedad.

La burguesía ha identificado y sigue identificando Estado democrático y sociedad capitalista, de modo que cualquier alternativa a la sociedad capitalista se interpreta como una amenaza a la libertad y a la democracia. El axioma fundamental de la burguesía reza: sólo una sociedad capitalista puede ser cabalmente democrática. El anarquismo —y en este punto el marxismo no es más que una especificación particular del anarquismo— acepta sin ulterior crítica esta identificación, y como tiene sólidas razones para combatir al capitalismo, incluye en su estrategia la destrucción o superación del Estado. Los socialistas, en cambio, no confunden la crítica del capitalismo —injusto, antidemocrático, inhumano— con la del Estado. La dicotomía sociedad-Estado, con el consiguiente reconocimiento de un ámbito inalienable de la persona y el control ciudadano de las instituciones políticas, supone para los socialistas una conquista irrenunciable.

Justamente porque los socialistas toman en serio las libertades que proclamó la burguesía revolucionaria se afanan en su realización. De lo que se trata es de incrementar y fortalecer el ámbito personal de la libertad, introduciendo en la sociedad formas de convivencia democrática semejantes a las establecidas en la esfera pública: no en balde la sociedad del capitalismo avanzado se ha organizado burocráticamente de manera parecida a como se organizó el Estado. Resulta intolerable, y a la larga insostenible, poder participar en el gobierno del municipio, de la provincia, de la región y del Estado, pero no en la empresa en que es trabaja, en la que habría de imperar por toda la eternidad la voluntad de una minoría sin otra cualificación que su título de propiedad.

Conviene insistir en la distinción fundamental entre una posición *liberal*, todo lo social y progresista que se quiera, pero que en último término identifica democracia con capitalismo, y una cabalmente *socialista*, que parte de la crítica de la sociedad capitalista y exige consecuentemente una democratización profunda de la economía y de la sociedad como requisito básico

de la realización de la democracia. Mientras que para los partidos burgueses, incluidos los socialdemócratas, no hay otra democracia que la que se sustenta en relaciones capitalistas de producción, para los socialistas la realización de la democracia supone haberla extendido a la esfera social y económica.

El conflicto enunciado entre sociedad, como esfera de actuación de la empresa privada, y el Estado democrático no se resuelve por el predominio unilateral de las fuerzas empresariales o del aparato estatal, sino por la progresiva democratización del Estado y de la sociedad. Una política socialista es, por tanto, una política de democratización del Estado y de la sociedad, en la que los poderes que se ejercen en ambas esferas queden legitimados y controlados democráticamente. La democracia es así el *fin* y el *medio* de una política socialista. *Su fin,* en cuanto socialismo no significa otra cosa que una comunidad en la que la esfera pública estatal y la social privada se rigen por instituciones democráticas. *Su medio,* porque no cabe otra forma de expandir la democracia que democráticamente, respetando escrupulosamente las instituciones y las reglas de juego democráticas. De una cosa se puede estar seguro: los socialistas no cuestionan las instituciones democráticas del Estado ni las libertades fundamentales de la sociedad; todo lo contrario, en la lucha por su conservación, perfeccionamiento, extensión y profundización cifran el sentido fundamental de una política socialista.

Para despejar en la práctica todos los obstáculos y hasta contradicciones que conlleva un proceso semejante de democratización de la sociedad y del Estado hay que introducir el factor tiempo. Nadie puede esperar razonablemente que se consiga en un par de años. El proceso general de democratización de que hablamos supone un largo período histórico, toda una época de transición pacífica y democrática hacia el socialismo. El que posea una mínima perspicacia histórica sabe que hace tiempo que empezó en el mundo la larga marcha hacia el socialismo, pero también que en ningún sitio está escrito o garantizado que se logrará. El fundador de la ciencia política, Nicolás Maquiavelo, ya nos advirtió que «no hay nada tan difícil de lograr, tan dudoso ni tan peligroso como iniciar un nuevo orden de cosas». Adaptarse a la realidad es el gran instinto del político trepador; disponerse a cambiarla, la verdadera virtud del hombre de Estado. No hay cambio sin riesgos, pero también nada se pudre tan rápidamente como las aguas estancadas.

CAPITULO III

EL MODELO LENINISTA

La vulneración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los países llamados «socialistas» no es un fenómeno reciente ni excepcional. No hacía falta que Alejandro Soljenitsin hubiera publicado su estremecedor *Archipiélago Gulag* para que los que querían enterarse estuvieran enterados. Si recogemos la información denunciadora de hechos que no ya desde una perspectiva socialista, sino simplemente humana hay que reputar de muy graves desde los años de la guerra civil hasta los más terribles del estalinismo (1937 a 1938), podríamos llenar bibliotecas. Y desde entonces, aunque no haya trascendido más que la punta de un inmenso iceberg, no han faltado acontecimientos escandalosamente espeluznantes. Reducir el problema de la violación de los derechos humanos en la Unión Soviética al caso especial de unos cuantos disidentes conocidos —Amalrik, Sinyavski, Bukovski—, supone ya una falsificación burda. No se trata de que el Gobierno soviético haya cometido algún desliz criticable en esta o aquella ocasión. El verdadero problema consiste en que desde el mismo origen de la Revolución de Octubre, los derechos humanos más elementales han sido pisoteados de manera constante y sistemática.

Hasta la crisis del 68 —mayo francés y agosto de Praga—, en amplios sectores de la izquierda europea no se podía hacer una aseveración semejante sin descalificarse por completo. Hasta tal punto continuaban vivos viejos mitos del movimiento comunista sobre la naturaleza del Estado soviético. La menor crítica a su realidad se rechazaba como una «provocación» que únicamente servía al «enemigo imperialista», se fuere de ello

consciente o no. Hoy, en determinados medios de una ex-izquierda tan decepcionada como impotente, el peligro radica más bien en una generalización abstracta de la «experiencia Gulag», identificándola con la esencia misma del poder que se rechaza desde posiciones «metafísicas» o «nihilistas», pero igualmente individualistas, con lo que se destruye la única dimensión real —la histórica— desde la que cabe plantear esta cuestión.

En un punto, sin embargo, existe común acuerdo: no es posible eludir por más tiempo la historia trágica, por lo menos así hay que caracterizarla desde la perspectiva de los derechos humanos, de sesenta años de poder bolchevique. Entre lo que se propuso la revolución comunista —un mundo libre de opresión— y lo que se ha convertido en realidad, la discrepancia no puede ser mayor. Existen las más diferentes interpretaciones sobre la naturaleza de la sociedad y del Estado soviéticos, pero en lo que no puede caber la menor duda es en la diferencia abismal entre pretensión y logro. No es fácil aceptar con objetividad lo que ha ido a parar una revolución que en su día encarnó la esperanza de millones de oprimidos, seguros de que una sociedad libre y justa no sólo es posible, sino que en la lejana Rusia se había puesto en marcha. Cierto que desde el mismo noviembre del 17 no faltaron voces críticas que desde una perspectiva socialista advirtieron los peligros y supieron decir no a los bolcheviques, pero quedaron por mucho tiempo aplastadas en el tumulto de los que deseaban el fracaso de la Rusia revolucionaria como garantía de los propios privilegios.

El largo despertar de la izquierda europea a la realidad soviética constituye la otra cara de la medalla de la profunda crisis del movimiento comunista, que en rigor cabe remontar a los mismos comienzos de su organización. La historia del movimiento comunista se confunde así con la de su crisis. El problema consiste en averiguar qué puede significar el concepto de crisis cuando puede aplicarse a sesenta años de historia en los que también se consideraba al capitalismo consumiéndose en su «crisis general». La experiencia histórica de este siglo XX se presenta como la de una larguísima crisis que en su duración ilimitada —quién puede asegurar que se divisa su fin— termina por perder todo sentido propio, exigiendo una reconsideración de los criterios que la definen.

La paulatina ruptura con el leninismo es el acontecimiento más significativo ocurrido a la izquierda europea en este último decenio. En cambio, en el llamado «tercer mundo», el leninismo ha ganado considerable ascendencia, lo que no dice poco sobre el verdadero carácter de esta corriente ideológica. Hasta me-

diados de los años sesenta, la izquierda europea estaba constituida por los partidos comunistas que por lo menos verbalmente se reclamaban del leninismo, fuertes sólo en el sur de Europa, y los pequeños grupos y partidos que, frente al burocratismo soviético, se creían fieles depositarios de la tradición revolucionaria del leninismo: trotskistas, los de carácter leninista más puros; maoístas, los que habían filtrado su leninismo a través de la experiencia revolucionaria china. En todo caso, generalizando se puede decir que la izquierda europea era leninista y que la crítica al estalinismo no cuestionó a Lenin ni a la Revolución de Octubre.

El hecho nuevo cargado de enormes consecuencias es que el leninismo ha dejado de ser la ideología de la izquierda. El llamado «eurocomunismo» consiste fundamentalmente en la «desleninización» de los partidos comunistas, aproximándolos en sus planteamientos a las posiciones de la socialdemocracia de hace medio siglo. Hoy, los comunistas están mucho más cerca de Kautsky que de Lenin. En los grupos minoritarios de pureza revolucionaria se observa también un desplazamiento del trotskismo leninista y del maoísmo hacia posiciones que reactualizan la tradición del socialismo libertario.

Desde 1917, nunca había estado el leninismo tan en baja como en nuestros días. Cierto que en los países del bloque oriental la más leve crítica a Lenin se castiga como delito de alta traición: el culto a la persona, superando no ya lo que cabría pensar desde una concepción marxista, sino incluso los límites del buen gusto, permanece intocable. Pero el leninismo oficial del bloque soviético cuenta cada vez menos. Las contradicciones internas de los mal llamados «países socialistas», sus tensiones sociales y sus dificultades económicas son demasiado evidentes y duran demasiado tiempo para que puedan taparse con el dogmatismo pétreo del marxismo-leninismo y el humo de incienso del culto a Lenin. Los partidos comunistas europeos, sin atreverse a una crítica abierta del leninismo, van recusando una a una sus tesis fundamentales y, sin haber borrado el nombre de Lenin de su liturgia, le han puesto sordina. Hoy cabe que el intelectual de izquierdas critique determinados aspectos del pensamiento o de la actividad política de Lenin, sin por ello desacreditarse de antemano en los círculos marxistas. Como botón de muestra, baste mencionar que los dos líderes estudiantiles que adquirieron notoriedad en la revuelta estudiantil berlinesa del 68, Rudi Dutschke y Bernd Rabehl, han publicado cada uno un libro de «arreglo de cuentas» con el leninismo.

Las reflexiones que siguen intentan tan sólo delimitar el al-

cance y sentido de la discusión actual en torno al llamado «modelo soviético». La estupefacción que en determinados círculos siguen levantando las noticias sobre la falta de libertades, persecución de disidentes, vulneración de los derechos humanos más elementales en los países del Este, nos remiten directamente a esta problemática. En efecto, ya no cabe seguir escondiendo la cabeza debajo del ala, tildando informes semejantes de infundios y patrañas típicos de la prensa capitalista; tampoco, sesenta años después de la revolución, resulta posible justificarlos como «enfermedades infantiles» de un régimen todavía no consolidado que lucha por afianzarse en un mundo hostil. El que en los mal llamados «países socialistas» existan relaciones sociales y políticas en crasa contradicción con lo que entendieron los clásicos —y seguimos entendiendo hoy en Europa— por socialismo, exige una explicación que necesariamente plantea el tema de la naturaleza y carácter de estas sociedades.

1. Marx y Lenin ante la revolución

El problema clave de una interpretación de Lenin es la forma como se resuelva su relación con Marx. Dos posiciones son posibles, y ambas están ampliamente representadas en la literatura. La posición oficial, y desde luego más extendida, descubre en Lenin el *continuador genial* de la obra de Marx. Sus innovaciones responderían a los imperativos que conlleva una nueva etapa del capitalismo. Así como Marx edificó su teoría en base a la experiencia del «capitalismo competitivo» de la Europa occidental, y en particular de la Inglaterra de mediados del siglo XIX, Lenin tuvo que acomodar el marxismo tanto a las exigencias de un país industrialmente subdesarrollado como a los condicionamientos del «capitalismo monopolista» que, en cuanto «imperialismo» y a nivel mundial, habría llegado a su mayor y último grado de desarrollo: «el imperialismo, último estadio del capitalismo». Las diferencias entre Marx y Lenin se explicarían, por tanto, en virtud del distinto contexto histórico en el que ambos actuaron.

La segunda posición insiste en el *carácter revisionista* que implicarían estas innovaciones. No se niega la posibilidad, y aun la necesidad, de un desarrollo continuo del marxismo. En cuanto método, no pretende más que dar cuenta de la realidad, transformándola, y al considerar que es el «ser el que determina a la conciencia», y no a la inversa, el marxismo como teoría y praxis ha de revisar permanentemente sus resultados de

acuerdo con la dinámica transformadora en que consiste la realidad. La innovación teórica es consustancial con cualquier pensamiento científico, máxime con el marxismo que además de científico se quiere revolucionario. Pero una cosa es el desarrollo de una idea y muy otra la sustitución de sus principios básicos por otros que se apoyan en supuestos totalmente incompatibles con los primeros. Las innovaciones de Lenin serían de este cariz e implicarían de hecho una ruptura con el marxismo. Con muy diversas matizaciones en esta segunda posición coinciden la mayoría de los marxistas contemporáneos de Lenin, parte de los sovietólogos fuertemente hostiles a la Unión Soviética, y de nuevo, y de manera creciente, algunos marxistas de nuestros días. La fusión del marxismo con el leninismo no resulta hoy tan evidente e indiscutible como lo fue en la izquierda hace tan sólo dos décadas.

Pero sea cual fuere el modo como resolvamos esta cuestión, el punto crucial que vincula estrechamente a Lenin con Marx es la común creencia en la «actualidad de la revolución». Ambos montaron su praxis política sobre el supuesto de que la «revolución» estaba a la vista. Marx cree haber descubierto las leyes científicas que determinan el desarrollo del capitalismo, sus contradicciones internas que indefectiblemente llevan en su seno la revolución proletaria. Pero este horizonte revolucionario no se traslada a un futuro lejano e impreciso, sino que hasta 1852 se concibe como una perspectiva cercana y luego, más cauto, se retrasa todo lo más al plazo de una generación. Marx y Lenin enfocan los acontecimientos políticos del día desde la perspectiva de la revolución, y es esta perspectiva la que, en último término, fundamenta la táctica a seguir. «La actualidad de la revolución: éste es el pensamiento básico de Lenin y a la vez el punto que lo vincula decisivamente con Marx», ha escrito Georg Lukàcs, en un estudio sobre Lenin, que a pesar de estar publicado en 1924 continúa siendo la exposición más acertada del pensamiento de Lenin desde una posición cabalmente leninista [1].

En la expectativa de una pronta revolución coinciden Marx y Lenin. También en ambos cabe rastrear el hecho, de por sí harto explícito, de que esta creencia antecede a su descubrimiento del «marxismo»: en Marx, antes del contacto con la economía política, antes de que concibiera siquiera su crítica económica del capitalismo. Lenin es revolucionario, como lo era

---

[1] Georg Lukács, *Lenin. Studien über den Zusammenhang seiner Gedanken*, Viena, 1924, pág. 11.

la juventud crítica de su tiempo antes de haber conectado con los primeros círculos marxistas en su corta visita a la universidad. El joven Marx, filósofo hegeliano, desde la categoría filosófica de la enajenación y desde su posición de intelectual desclasado en régimen tan autoritario como el prusiano de su tiempo, llega a concebir al proletariado como sujeto histórico de la emancipación. Lenin es revolucionario a lo más tardar desde la crisis que desencadena la muerte de su padre y la ejecución de su hermano Alejandro. Pero no es el momento de indagar, aunque el tema sea apasionante, cuáles son los condicionamientos sociales, así como los mecanismos psicológicos y los resortes morales que convierten a un hombre en revolucionario. De lo que importa aquí dejar constancia es que en ambos el talante revolucionario precede y de ningún modo se agota en una determinada cosmovisión. Ahora bien, que Marx y Lenin pensaran y actuaran desde la misma perspectiva revolucionaria, el que ambos vivieran desde la «actualidad de la revolución», no basta, como quiere Lukàcs, para vincularlos indisolublemente. Pues si bien es cierto que el talante revolucionario une estrechamente a Lenin con Marx, no es menos cierto que su comprensión y práctica de la revolución los separa tajantemente.

El gozne que une la filosofía, la política, la sociología y la economía de Marx es la concepción del proletariado como clase objetivamente revolucionaria. La diferenciación althusseriana entre el joven Marx filósofo-ideólogo y otro maduro ya cabalmente científico, o la schumpeteriana, partiendo a Marx como a un pastel, en un Marx profeta, sociólogo, economista, político, resultan vanas al desconocer el papel unificador que de todo su pensamiento tiene la noción de «proletariado revolucionario». El carácter revolucionario del proletariado es justamente la categoría que da unidad al pensamiento de Marx desde sus primeros tanteos hegeliano-filosóficos hasta sus últimos escritos políticos y económicos. En función de ella, y desde ella, hay que comprender tanto su filosofía de la historia como su crítica de la economía política. Si la suprimimos, claro que Marx sigue teniendo mucho que ofrecer como analista crítico de la dinámica del capitalismo o de las luchas de clase, como metodólogo de las ciencias sociales, como filósofo de la historia, etc., pero desaparece el marxismo como un sistema coherente capaz de dar cuenta de la «totalidad» de la historia.

La situación objetiva del proletariado —otra cosa es lo que subjetivamente piense y sienta cada proletariado— es tal, que no deja recoveco posible para un acomodo como clase. Su situación social, dominando relaciones capitalistas de producción,

es la del permanentemente desposeído, situación que nunca podrá aceptar, y aunque inicie su lucha por reivindicaciones particulares en la dialéctica de esta lucha llegará inexorablemente a la conclusión de que no cabe liberación personal: en último término, sólo puede aspirar a la emancipación de su clase. Pero no habiendo debajo de ella clase que oprimir, la emancipación del proletariado lleva consigo la emancipación de la humanidad, del hombre como género humano, al implicar la desaparición de las clases y con ellas de cualquier tipo de opresión. Una lógica implacable pone de manifiesto que el proletariado no puede realizarse como clase más que revolucionariamente en una revolución que, por ser proletaria, suprime las clases.

Y esto es así, sea de ello consciente el proletariado o no. Marx concibe al proletariado como *objetivamente* revolucionario. Se trata de un proceso objetivo —Marx en su terminología hegeliana habla de un «movimiento real»— en el que el proletariado, por mucho que descarríe, por mucho que le engatusen cantos de sirena, al final no puede encontrar otra salida que la revolución. Revolución que por estar hecha por el proletariado como clase, por la inmensa mayoría del pueblo trabajador, se diferencia radicalmente de todas las revoluciones habidas en la historia, porque esta vez ya no puede tratarse de sustituir una clase dominante por otra, sino de la eliminación de todas las clases: y a esto llama Marx comunismo. El proletariado es, por tanto, objetivamente y esencialmente revolucionario y comunista.

Pero tanto como el carácter objetivo de la revolución proletaria y del comunismo importa subrayar su corolario más importante: la liberación del proletariado únicamente puede ser obra del proletariado mismo. No cabe sustitución posible. Y ello porque el proceso histórico de toma de conciencia del proletariado, desde los primeros estadios de reivindicaciones sociales, hasta la madurez necesaria para hacerse con el poder político, es requisito esencial para el triunfo de la revolución comunista. No sólo es imprescindible un determinado desarrollo de las fuerzas productivas hasta el punto en que prácticamente todas las clases se hayan disuelto en una minoría exigua de capitalistas y una inmensa mayoría de proletarios, sino que junto a este proceso de proletarización que lleva consigo el desarrollo del capitalismo corresponde uno de toma de conciencia del proletariado como clase. A la vez que el proletariado crece y se agudizan las contradicciones de clase en las luchas que se derivan de esta situación crecientemente conflictiva, el proletariado va autoeducándose y transformándose como hombre. En

la lucha revolucionaria el proletariado va desprendiéndose de los temores y egoísmos propios del estado enajenado, de modo que al fin del proceso es un «hombre nuevo» el que realiza la revolución. El «hombre nuevo» no surge de repente y por generación espontánea una vez que la clase obrera se haya hecho con el poder, sino que la clase obrera, como clase, no puede tomar el poder hasta que su lucha revolucionaria no haya creado al «hombre nuevo». La transformación del proletariado en «comunista» es resultado de la lucha revolucionaria, a la vez que supuesto de que su revolución se convierta en realmente «comunista».

El esquema es verdaderamente portentoso. En la fusión de la historia con la lógica radica la fascinación del hegelianismo. Y no hay por qué engañarse: Marx es profundamente hegeliano. Para unos, es esto su mayor defecto; para otros, como para el Lukàcs de *Historia y conciencia de clase* o para el Marcuse de *Razón y revolución*, su mayor grandeza. Pero lo que no cabe duda es que existe estrecha relación entre esta visión dialéctica, es decir, hegeliana, de la historia y una posición revolucionaria. En la socialdemocracia alemana de la Segunda Internacional la perspectiva revolucionaria iba desapareciendo según se iba positivizando el marxismo. Ahora bien, este desprendimiento de la dialéctica no hay que interpretarlo, como se ha hecho a menudo, sin más como una traición, sino como lo que realmente era: un afán de no perder de vista la realidad que parecía no querer acoplarse a tan implacable lógica.

El esquema lógico-histórico es ciertamente fascinante; lo grave es que difícilmente encaja con la historia vivida desde que Marx lo formuló genialmente a mediados del siglo pasado. El «movimiento real» desgraciadamente no coincidía con el movimiento pensado como real. Estas dificultades asediaron a Marx desde el fracaso de la revolución de 1848, y el esfuerzo enorme que hizo en la redacción de *El Capital* no lograron apaciguar todas las dudas. Problemas psicológicos, pero también dificultades intrínsecas impidieron que Marx acabase su obra. Hay libros tan ambiciosos que necesariamente tienen que quedar truncados. No es el momento de analizar en detalle estas dificultades: nos llevaría muy lejos. Baste decir que la introducción del concepto de «dictadura del proletariado», un parche relativamente tardío, trajo más desgracias que resolvió problemas. De alguna manera la historia del pensamiento marxista puede reducirse a esta tensión continua entre el esquema lógico-histórico y una realidad sorprendentemente reacia a someterse al esquema.

Lenin reacciona contra el revisionismo socialdemócrata que había reducido la perspectiva revolucionaria a mera retórica de mitin dominguero, ejecutando una política reformista claramente antirrevolucionaria. Con Lenin vuelve a estar presente la «actualidad de la revolución». Ahora bien, para salvar el marxismo como práctica revolucionaria, Lenin tira por la borda nada menos que la categoría que constituye el gozne central del pensamiento de Marx: el carácter intrínsecamente revolucionario del proletariado.

En efecto, si Lenin hubiera concebido la revolución según el esquema marxista —un proceso en el que el desarrollo de las fuerzas productivas conlleva el desarrollo de un proletariado cada vez más fuerte y más consciente—, hubiera tenido que renunciar a la revolución en Rusia. Pero renunciar a la revolución constituye a los ojos de Lenin la mayor traición al marxismo: para salvar la revolución —es decir, al marxismo— es preciso renunciar al marxismo —es decir; a un esquema lógico-histórico que no se acopla a la realidad—; pero como el marxismo lo concibe precisamente como la lógica de la realidad, al adaptarse a ésta, modificando lo que haya que modificar del esquema, permanece fiel al marxismo. Esta dialéctica permite a Lenin apostar por la realidad cuando ésta aparece en contradicción con la teoría —de ahí su realismo político—, pero el resultado lo interpreta dentro del esquema marxista: de ahí que crea que está haciendo algo distinto de lo que realmente está haciendo.

A este nivel de abstracción, lo anterior parece más un trabalenguas que una tesis razonable. Es preciso concretarla en el análisis de los tres momentos culminantes de la teoría y praxis revolucionaria de Lenin: la organización del partido, la organización de la revolución, la organización de la producción. Sólo a este nivel de concreción histórica cabe desentrañar las consecuencias, algunas de ellas graves, que conlleva esta posición.

2. La organización del partido

Una vez terminada la polémica con los populistas sobre el carácter capitalista de la Rusia de finales de siglo, Lenin plantea reiteradamente la «cuestión urgente» de la organización. Ya en un manifiesto de 1899 —*Protesta de los socialdemócratas rusos*— escribe: «Las tradiciones de todos los movimientos revolucionarios que nos han precedido exigen que la socialdemocracia concentre ahora todas sus fuerzas en la organización

del partido, en el reforzamiento de la disciplina en el partido y en el desarrollo de una técnica conspirativa»[2]. Este es el tenor de los muchos artículos que sobre esta cuestión preceden al folleto *¿Qué hacer?*, aparecido en 1902, y que con razón se ha considerado la primera formulación cabal del leninismo.

La insistencia de Lenin en la necesidad de una organización fuerte y disciplinada es la reacción realista y comprensible al fracaso del esquema marxista que concibe la organización de la clase en partido como resultado objetivo del desarrollo del capitalismo, la agudización de las luchas de clases y la concientización obrera como resultado de estas luchas. Marx reconoce el papel de las vanguardias como orientación de este proceso, con el fin de ganar tiempo y evitar graves descarríos; concibe una dialéctica entre teóricos proletarios y masas proletarias, pero su gran descubrimiento científico es justamente la objetividad inexorable de este proceso. No cabe, por otro lado, reducir a Lenin a un blanquista cualquiera que concibiera la revolución como el logro exclusivo del quehacer conspiratorio de una minoría de revolucionarios. Lenin parte del análisis marxista de que el proceso revolucionario tiene su base en las contradicciones del sistema capitalista, y son precisamente estas contradicciones, tal como se expresan en la lucha de clase, las que en último término hacen posible que la actividad de un partido revolucionario minoritario pueda tener incidencia histórica. Cierto, el proceso revolucionario tanto para Marx como para Lenin supone una relación dialéctica entre clase y partido, entre iniciativa de la vanguardia y factores objetivos. La diferencia fundamental radica en que, mientras para Marx el proletariado es en sí y objetivamente revolucionario, Lenin, en base a la experiencia europeo-occidental, tiene que reconocer que el proletariado, abandonado a sí mismo, no desemboca necesariamente en una posición revolucionaria.

Lo que cuestiona Lenin en *¿Qué hacer?* es ni más ni menos que el carácter intrínsecamente revolucionario del proletariado. «Hemos dicho que los obreros no pueden tener en absoluto una conciencia socialdemócrata. Esta sólo les puede llegar desde fuera. La historia de todos los países da testimonio de que la clase obrera, por propia fuerza, únicamente puede crear una conciencia tradeunionista, es decir, el convencimiento de la necesidad de formar organizaciones propias para defender sus intereses particulares»[3]. El proletariado abandonado a sí mismo

---

[3] LENIN, *Werke*, 5, pág. 386.

[2] LENIN, *Werke*, 4, pág. 175.

se agota en sus luchas sindicales reivindicatorias (economismo) y apoya cualquier política que, sin cuestionar el sistema capitalista, signifique una mejora concreta de su situación (oportunismo).

Frente a la noción lógico-ontológica de Marx de que el proletariado es intrínsecamente revolucionario, Lenin observa la realidad empírica y toma nota del comportamiento real del proletariado europeo y ruso: ambos se le revelan como economicistas, es decir, les importa sobre todo sus reivindicaciones salariales, y oportunistas, apoyan una política que, sin cuestionar revolucionariamente el sistema, les aporte mejoras sociales.

Este análisis empírico del comportamiento real del proletariado les es común a Bernstein y a Lenin, sólo que sacan conclusiones inversas. Si la clase obrera, según se desarrolla el capitalismo, se va integrando cada vez más en el sistema, y lo que le importa no es la revolución, sino el mejoramiento de su situación social, entonces, piensa Bernstein, hay que tomar nota de este hecho, por muy sorprendente que pueda parecer desde los postulados del marxismo, y apoyar a la clase obrera en su desenvolvimiento político, tal como es y no tal como se pensó que tenía que ser. Esto significa en la práctica desprenderse del mito de la revolución y colaborar con las reivindicaciones democráticas del proletariado.

La respuesta de Lenin es completamente la opuesta: si el proletariado por sí tiende al reformismo, entonces es preciso imponerle desde fuera una organización férrea que le lleve a la revolución, que subjetivamente no quiere hacer, pero que objetivamente tiene que hacer. Dejar la cuestión de la revolución a la «espontaneidad» del desarrollo socioeconómico o a la «espontaneidad» de la lucha de clases —piensa Lenin— es decidirse por el reformismo. Si, para Bernstein, el camino es todo y la meta nada, para Lenin la meta —la revolución— es todo y el camino que se haya de recorrer se define en cada ocasión en función de aquélla. En su lucha contra el «oportunismo», el «revisionismo», el «economicismo», el «reformismo» —y esto llena gran parte de la actividad de Lenin a lo largo de su vida—, lo que se combate es siempre la «espontaneidad» del proceso revolucionario. La revolución es el quehacer propio de un «partido de revolucionarios».

La noción de partido como la «organización de los revolucionarios» es el aporte leninista que en la práctica resuelve la contradicción que vivía la Segunda Internacional: proclamarse revolucionaria con un movimiento obrero sustancialmente reformista. Si la revolución no podía estallar hasta que el des-

arrollo de las fuerzas productivas no hubiera llegado a ese punto en que las relaciones capitalistas de producción las congelaran por completo, entonces un partido marxista no tendría más que cooperar con el capitalismo para su más rápido desarrollo, de modo que lo antes posible llegara este punto de explosión. Por otra parte, en cuanto partido obrero, tendría que dirigir la lucha del proletariado para conseguir o afianzar sus reivindicaciones salariales y sociales, lo que retrasaría indefinidamente la esperada explosión revolucionaria. Desde una posición verbalmente revolucionaria, la socialdemocracia europea no podía llevar a cabo más que una política reformista.

Lenin resuelve esta contradicción entre reformismo obrero y voluntad revolucionaria que agobia y anquilosa a la socialdemocracia europea, optando claramente por la vía revolucionaria y sustituyendo al proletariado, al partido de los trabajadores, por el «partido de los revolucionarios», es decir, aquél que no tiene otra función ni justificación que hacer la revolución. En el partido de revolucionarios, Lenin halla el gozne que articula la contradicción básica, pero excesivamente abstracta, entre «fuerzas productivas» y «relaciones de producción» con la dinámica de la lucha de clases. Precisamente porque Marx no había depurado un concepto de partido como organizador de la revolución, el marxismo se debatía en la ineficacia bien de insistir en una perspectiva «objetivista» —«los factores objetivos» nunca aparecían lo suficientemente maduros para lanzarse a la revolución—, bien cayendo en una potenciación exclusiva de la lucha de clases que llevaba consigo el fortalecimiento de la represión y de las fuerzas más reaccionarias.

Reducido a su dimensión objetivista, el marxismo desemboca en un determinismo que termina por congelar toda actividad revolucionaria: el despliegue del capitalismo por su propia dinámica originará contradicciones cada vez mayores, que al final del proceso explotarán revolucionariamente (teoría catastrófica de la revolución sin plazo definido). La insistencia unilateral en la lucha de clases, abandonada a sí misma, sin contar con una estrategia ni una organización revolucionaria, acaba en un terrorismo voluntarista, del que pronto se separará la clase obrera, o se reconvierte en posiciones reivindicatorias de carácter puramente sindical. Sólo un «partido de revolucionarios» puede establecer el equilibrio creador entre la agudización de las contradicciones y multiplicación parcial de la lucha de clases y una estrategia y una dirección que conduzca conscientemente a la revolución.

Desde el horizonte leninista la revolución ya no es tan sólo

ni principalmente un proceso histórico objetivo, sino una meta que hay que alcanzar en virtud de una estrategia correcta, necesitando para ello, como cualquier organización que funcione, de un *staff*, de un comité director y de un aparato eficaz. El problema de la revolución socialista lo reduce Lenin a un problema específico de organización que, si bien sólo puede tener éxito si se dan determinados condicionamientos objetivos, no bastan éstos si falta la organización adecuada.

El concepto de organización no ocupa en Marx un lugar destacado y, cuando aparece éste, carece de un sentido sociológico preciso. Ello no es de ningún modo casual: la dimensión filosófico-económica que caracteriza a Marx anula lo sociológico como una problemática autónoma. En cambio, lo que es significativo, y sobre ello quiero llamar la atención, es que Lenin, sin el menor contacto con la sociología de su tiempo, en virtud de los imperativos de su actividad política, desarrolla un concepto de organización comparable al que preconiza el padre de la moderna sociología de la organización: Max Weber. Lenin en la práctica revolucionaria, Weber en la teoría conscientemente antirrevolucionaria, ambos centran su atención en la noción de organización.

A partir del no reconocimiento del carácter intrínsecamente revolucionario del proletariado, las diferencias que separan a Lenin de Marx son considerables. En dos de importancia crucial conviene insistir. Primero, Lenin cuestiona un principio básico no ya sólo del marxismo, sino de todo el movimiento socialista en general: que la liberación del proletariado únicamente puede ser obra del proletariado mismo. Lenin piensa exactamente lo contrario: el proletariado por sí mismo nunca podrá emanciparse. La emancipación del proletariado, y con él la de la sociedad toda, exige que el proletariado acepte una «teoría correcta», el marxismo, que le viene de fuera y que por sí mismo nunca hubiera podido elaborar. Segundo, mientras que la categoría central para aprehender la revolución es en Marx un «proceso dialéctico» que se manifiesta objetivamente como el «movimiento real» de la sociedad capitalista, Lenin, sin ignorar ni rechazar los «factores objetivos» ni la «dialéctica de la lucha de clases», insiste sobre todo en que este proceso no culminará en un cambio revolucionario sin una organización adecuada que también le viene impuesta desde fuera al proletariado.

Así como el tipo de organización leninista reproduce la diferenciación social que se pretende eliminar, la comprensión del marxismo como la «teoría correcta» que viene de fuera lo petrifica en un dogma cerrado e inmutable. Para Marx, la origina-

lidad de su pensamiento consistía en ser la expresión del movimiento real: su «verdad» radicaría en la unidad dialéctica del movimiento de lo real y el movimiento de lo pensado. Pero esta segunda dimensión de lo pensado no tiene entidad en sí como quiere el idealismo, sino que expresa tan sólo el movimiento de lo real en cada uno de los momentos del despliegue de su «totalidad». Lenin comprueba una divergencia entre lo real y lo pensado por Marx como real —el proletariado no se comporta por sí mismo de manera revolucionaria— y resuelve la aporía de manera burocrática: congelando el marxismo en la «teoría correcta», que como tal no exige ulterior despliegue o corrección —lucha contra el revisionismo—, y poniendo en marcha un tipo de organización burocrática capaz realmente de actuar revolucionariamente. Ahora bien, una organización burocrática y revolucionaria se revela como una contradicción en sí.

El problema que se plantea Lenin es el de elevar la organización de criterios «artesanales a científicos». La concepción «científica» de la organización corresponde al modelo burocrático. Lenin desarrolla tres criterios básicos: 1. Necesidad de una dirección estable y respetada por la base. Ningún movimiento revolucionario puede existir sin una dirección permanente que asegure su continuidad, y cuanto mayor sea la base sobre la que esta dirección incida, más fuerte e indiscutible tiene que ser la dirección. No cabe una acción política coherente y eficaz sin una dirección que, sobrepasando el localismo engañador, tome en consideración los factores más diversos, integrándolos en una táctica unitaria. Sólo una dirección centralizada puede tener una visión general de la situación y, en consecuencia, centrar todas las fuerzas en el punto flaco del enemigo. 2. Principio de especialización: un aparato eficaz no puede funcionar sin un cuadro de especialistas dedicados plenamente a la organización. En consecuencia, en el «partido de los revolucionarios» no podrán admitirse más que aquellos que conociendo la «teoría correcta» dediquen su actividad plena al partido. El partido ha de estar integrado exclusivamente por «revolucionarios profesionales» que consagren a la revolución «no sólo las tardes libres, sino toda la vida». 3. Principio de jerarquía: la eficacia de la organización está en relación directa con su capacidad de que las decisiones tomadas en la cúspide sean rigurosamente aplicadas en la base. La disciplina en el cumplimiento de las consignas, así como el principio de cooptación de los mandos por la dirección, son corolarios que se derivan del principio jerárquico.

A Lenin no se le oculta que su concepción «científica» del

partido está en crasa contradicción con los principios democráticos de organización que parecen consustanciales con el movimiento obrero. Pero ¿qué sentido puede tener una organización democrática que exigiría una perfecta transparencia de la actuación de los dirigentes, así como el poder ser revocados por la base en un momento de lucha clandestina contra el aparato represivo del Estado? «Una organización revolucionaria en realidad nunca se ha organizado según los principios democráticos y nunca lo podrá hacer por mucha voluntad que ponga en ello» [4]. Las formas democráticas de organización se manifiestan como inservisibles e inoportunas no sólo en el período difícil de la lucha clandestina, sino también y sobre todo en la etapa mucho más peliaguda de «edificar el socialismo» a partir de la situación de aislamiento y de subdesarrollo de la Rusia soviética. Antes o después de la Revolución, en las circunstancias especiales de Rusia, la democracia parece impracticable. En cada etapa se justifica su supresión como requisito imprescindible para poder establecerla plenamente en el futuro. Sesenta años de poder soviético ha patentizado lo que da de sí esta falacia.

3. El concepto bélico de revolución

El modelo cabal de una organización burocrática es el ejército. Nada tiene de extraño que Lenin, en su concepción de un partido férreamente centralizado y disciplinado, recurra a una terminología propiamente militar: táctica, estrategia, etc. Lenin utiliza un lenguaje no sólo metafóricamente militar —«hay que organizar un asedio en regla a la fortaleza enemiga, o con otras palabras, hemos de concentrar todos nuestros esfuerzos en reunir, organizar y movilizar a un ejército regular»—, sino que su concepción militar de la organización le lleva a subsumir en categorías militares el proceso revolucionario mismo.

En primer lugar, es consciente de la estrecha relación entre revolución y guerra. En 1904, Lenin ya había previsto las posibles consecuencias revolucionarias de que Rusia perdiese la guerra contra Japón. En 1914 proclama la consigna de transformar la «guerra imperialista» en «guerra revolucionaria». Efectivamente, las revoluciones rusas de 1905 y 1917 han sido consecuencia directa de dos guerras perdidas. La guerra como factor desencadenante de la revolución es el supuesto en que Lenin basa su expectativa de una pronta revolución en Occi-

[4] Lenin, *Werke*, 5, pág. 92.

dente. En 1936, todavía Trotski prevé la revolución socialista en Europa como consecuencia de la guerra que se avecina. Se trata de un esquema de interpretación sin duda válido para Rusia y otros países subdesarrollados —el triunfo de la revolución china también está en relación con una guerra perdida—, pero inadecuado para el mundo capitalista desarrollado que ha sobrevivido a dos grandes guerras, y sobre todo muy poco marxista, que, desde luego, no concibe la revolución como resultado de que un enemigo externo haga añicos el aparato estatal.

Lenin no se reduce, sin embargo, a considerar la guerra como un factor desencadenante de la revolución, sino que desde 1905 identifica guerra con revolución. «La revolución es guerra. De todas las guerras que conoce la historia la única legítima, justa, realmente grandiosa [...] y en la guerra hay que actuar según las leyes de la guerra»[5]. La revolución es un proceso que hay que interpretar con categorías bélicas, porque en último término implica siempre una guerra civil. Cierto que sin un proceso objetivo de movilización de las masas no hay revolución, pero tampoco, piensa Lenin, cabe su triunfo sin un partido que canalice militarmente el levantamiento de las masas. «Una época revolucionaria es para la socialdemocracia lo mismo que el tiempo de guerra para un ejército»[6]. La espontaneidad revolucionaria de las masas prepara las condiciones para un cambio revolucionario, pero éste sólo se produce si existe una organización capaz y dispuesta a hacerse con el poder *manu militari*. Frente a la consigna menchevique de «autogestión revolucionaria», los bolcheviques proponen la de «organizar la revolución», es decir, organizar su brazo armado. La crisis social, por profunda que sea, no desembocará en un nuevo orden sin una «insurrección armada» que destruya el aparato represivo del Estado burgués. Desde la perspectiva del asalto militar al poder, se comprende lo que significa disponer de un ejército disciplinado de revolucionarios profesionales. La concepción burocrática del partido corresponde a una concepción asimismo burocrática de la revolución: el partido como ejército se justifica desde la comprensión de la revolución como guerra.

---

[5] LENIN, *Werke*, 8, págs. 95 y 97.
[6] LENIN, *Werke*, 8, pág. 207.

4. Restablecimiento del Estado

La toma del poder por los bolcheviques en 1917 lleva el proceso revolucionario a su cenit, a la vez que patentiza su contradicción fundamental. No cupo ciertamente la posibilidad de que se consolidase en su etapa democrático-burguesa —la creación de los soviets había superado esta eventualidad—, pero tampoco con una mayoría de población agraria apegada a la propiedad de la tierra resultaba posible superar esta etapa. Intentar retrotraer el proceso revolucionario a su marco burgués, como en vano se esforzaron los mencheviques, implicaba de hecho abandonar a las masas a su espontaneidad revolucionaria hasta que el golpe militar restableciese el «orden»: en un país subdesarrollado la dictadura militar es la forma política de estabilización del orden burgués amenazado. Una vez saltado el Rubicón, con el asalto al Palacio de Invierno, a los bolcheviques no les quedaba otra alternativa que un sectarismo izquierdista que los hubiera aislado de las masas o plegarse a las corrientes pequeño-burguesas dominantes en un país de campesinos. Esto último podía salvar la revolución, pero a costa de su carácter socialista, por lo menos en el primer período.

La erosión que produjo el sistema de «doble poder» y la primacía bolchevique en los soviets de las grandes ciudades fueron factores decisivos en el éxito de la «insurrección armada». Pero, una vez los bolcheviques en el poder, los «soviets» constituyeron el principal obstáculo para que este poder se consolidase. El «Estado de los soviets», lejos de sustituir favorablemente a una burocracia centralizada —como había sostenido Lenin en *Estado y revolución*—, se revela ahora, desde la perspectiva del poder, como fuente continua de tensiones, confusión y caos. La teoría leninista de los soviets partía del supuesto de una coincidencia *a priori* entre la práctica espontánea de las masas, la de sus representantes elegidos en los soviets y la política del partido bolchevique, coincidencia que, si bien por un momento hizo posible la Revolución de Octubre, no pudo durar más de unas pocas semanas.

Los soviets no sólo resultaron para los bolcheviques de poco fiar —lo que nada tiene de extraño si tenemos en cuenta sus principios de organización y la influencia que sobre ellos ejercían los distintos partidos revolucionarios—, sino que además, en contra de las especulaciones y expectativas de Lenin, se mostraron pésimos administradores. Desde comienzos de 1918, el

Gobierno bolchevique toma conciencia de los peligros que conlleva un desmontaje completo del aparato del Estado y se apresura a dar marcha atrás, reorganizando la vieja Administración, utilizando incluso, no había otro, el personal heredado del zarismo.

Los imperativos de la guerra civil que desencadena la toma insurreccional del poder aceleran este proceso de reconstrucción del viejo aparato estatal. Ganar la guerra significa por lo pronto organizar un ejército según los principios burocráticos de eficacia inherentes a esta institución. Ello significa disolver las «milicias revolucionarias» que los soviets habían agrupado según sus propios principios de elegibilidad del mando y de control por la base. La superioridad militar de un ejército organizado según el modelo clásico de centralización, jerarquía y disciplina ni siquiera se discutió: el mayor entusiasmo revolucionario no sustituye el saber técnico-militar, y los peritos no se improvisan. Reorganizar el ejército exigía reintegrar en el mando a los «especialistas en materia militar», que naturalmente sólo podían reclutarse entre los antiguos jefes y oficiales zaristas. Paradójicamente, la revolución no podía defenderse más que volviendo a establecer los órganos más característicos del Estado burgués: la policía y el ejército.

5. Organizar la producción

El problema clave, una vez ganada la guerra, era «organizar la producción». Ahora bien, poner en marcha la producción respetando la autonomía de los comités de fábrica y de los soviets se revela como una quimera imposible. Al esbozar su política económica, Lenin no se deja llevar por ningún utopismo, dispuesto a desmontar por completo el «Estado de los soviets» con tal que se logre poner en marcha la producción: es ésta la prioridad absoluta, y en este campo sólo cuenta la eficacia. Primer paso imprescindible, reintegrar a los técnicos y especialistas que, a causa de su ideología y de su tirantez con los líderes obreros, habían sido desplazados de los puestos de responsabilidad. La propiedad privada de los bienes de producción es ciertamente un monopolio de clase que cabe suprimir con relativa facilidad. En cambio, no es fácil socializar, democratizar el saber específico, el saber técnico, también monopolio de clase. El proletariado en un momento de crisis del Estado puede incautarse de las fábricas. Lo que ya no puede adquirir de repente es el saber técnico para mantenerlas en funcionamiento.

Lenin sabe que sólo puede ganar la «batalla de la producción» si logra recuperar a los técnicos disponibles, lo que sólo parece factible aceptando las formas burguesas de distribución, es decir, pagándolos generosamente y respetando sus privilegios. Ello significa, desde luego, renunciar a uno de los principios básicos del «Estado de los soviets»: nadie, sea cual fuere su función, recibirá un salario más alto que el del obrero. La «organización de la producción» exige hacer nuevas concesiones, admitiendo junto con el centralismo en la empresa y en la economía, desigualdades económicas y sociales, según la función que se ejerza.

Para organizar la producción, única forma de consolidar el poder bolchevique, hay que volver al capitalismo en el campo —dejando atrás la etapa bélica de las requisiciones violentas y arbitrarias de productos agrícolas— e instaurar un «capitalismo de Estado» en el sector industrial. Ahora bien, piensa Lenin, el restablecimiento del capitalismo no significa la disolución del «poder proletario», sino que es justamente lo que permite su consolidación. El capitalismo privado en el campo y el estatal en la ciudad resultan necesarios para desarrollar las fuerzas productivas, pero el poder proletario, es decir, el aparato estatal en manos de los bolcheviques, es la garantía de que este despliegue capitalista de las fuerzas productivas camine en última instancia hacia el socialismo.

Lenin define así la formación social que ha cuajado en Rusia después de la revolución como un «capitalismo de Estado en un Estado proletario». El resultado, medido con las aspiraciones, no puede ser más sorprendente y contradictorio, pero Lenin, atento siempre a la realidad y sin pelos en la lengua, así lo reconoce: «Sucedió de otra forma, y ningún Marx ni ningún marxista lo pudo prever... un capitalismo de Estado, esto es lo más inesperado que cabía, un capitalismo que nadie pudo anunciar, pues nadie pudo prever que el proletariado se iba a hacer con el poder en uno de los países menos desarrollados y que tendría que ocuparse primero de organizar la producción en masa y de su distribución entre los campesinos, y que, dado el nivel de civilización, no se podría cumplir con estas tareas sin acudir al capitalismo. Esto nadie lo podía haber previsto. Y no por ello deja de ser una realidad indiscutible»[7].

[7] LENIN, *Werke*, 33, págs. 296-297.

6. El «socialismo» del subdesarrollo

Todos los análisis pasados y presentes de la Rusia zarista y de la Rusia soviética parten de la constatación de su *subdesarrollo*. El concepto de subdesarrollo no tiene contenido propio, sino que se define por contraste con la «sociedad desarrollada». Sociedad desarrollada es un eufemismo para decir sociedad capitalista altamente industrializada, justamente porque en esta formación social el despliegue de las fuerzas productivas ha llegado a sus índices más altos. Llamamos entonces sociedad subdesarrollada a la que no ha logrado el grado de desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado por las sociedades capitalistas de Occidente. De ella se sabe lo que no es —una sociedad industrializada—, pero no lo que positivamente es, ya que entre las llamadas sociedades subdesarrolladas las diferencias son considerables. Comparadas entre sí, o estudiadas desde su propia evolución histórica, hay que dejar constancia de los distintos modos de producción que albergan, así como de las muy diferentes formas en que éstos se amalgaman o coexisten uno con el otro. A pesar de que el concepto de subdesarrollo da cuenta de un hecho esencial —no haber alcanzado el grado de desarrollo del capitalismo más avanzado—, no basta en ningún caso para definir a una sociedad.

Aunque el concepto de subdesarrollo ha surgido de ese proceso general de trivialización y readaptación de categorías marxianas a las necesidades de una ciencia social, ya sin ninguna pretensión crítica sobre la realidad que estudia, y a pesar de su contenido meramente negativo, de él han partido no sólo los sovietólogos burgueses, sino también los estudiosos marxistas, de Isaac Deutscher a Herbert Marcuse, para citar los nombres tal vez más representativos. La noción de subdesarrollo subraya un hecho tan fundamental como indiscutible —la Rusia de 1917 estaba muy lejos de haber alcanzado el grado de desarrollo del mundo capitalista occidental—; por consiguiente, desde los supuestos marxistas, la edificación del socialismo a partir de esa realidad se revela desde un principio como una quimera imposible.

A partir del subdesarrollo ruso cabe seguir las distintas modificaciones del pensamiento de Marx que Lenin, con fidelidad indestructible a su vocación revolucionaria, tiene que llevar a cabo en su afán no menos constante de plegarse a los condicionamientos concretos de cada situación. El concepto clave de

Lenin es el de *organización:* organizar el partido, organizar la revolución, organizar la producción. En los tres subyace una noción burocrática de organización, idéntica a la que ha desarrollado el capitalismo. Lenin es consciente de ello, pero también de que la circunstancia particular de Rusia no permite otra opción. En los dos últimos años de su vida, en lucha contra una enfermedad implacable, toma conciencia clara de los peligros que lleva consigo este proceso de burocratización. Mientras lleno de vitalidad estuvo al frente del partido, imposible que dudara del carácter proletario del Estado que dirigía. No desconocía ni ocultaba las «deformaciones burocráticas» inherentes a un «capitalismo de Estado» en una sociedad tan «salvajemente atrasada» como la rusa, pero, con todo, era la clase obrera, encarnada en el Partido Comunista, la que, en último término, detentaba el poder. Ahora, con la muerte rondándole de cerca, su crítica de la burocratización del aparato estatal y del partido, que forman ya una simbiosis indisoluble, adquiere un cariz trágico. Moshé Lewin ha descrito este «último combate de Lenin» en un libro verdaderamente patético[8].

Hemos tenido que vivir la experiencia cruel del estalinismo y la petrificación burocrática subsiguiente para que la izquierda marxista vuelva a empalmar con la problemática que Lenin divisa angustiosamente en sus últimos meses de vida consciente. La concepción estalinista de que el socialismo, en su concreción real, no podía ser otro que el que termina por cuajar en la Unión Soviética, ha perdido toda credibilidad y hoy la cuestionan hasta algunos partidos comunistas de la Europa occidental. La noción de «socialismo real» implica ya el reconocimiento de que éste se diferencia del socialismo pensado y esperado. En sí nada tiene de sorprendente que la realidad no coincida totalmente con lo pensado si la diferencia no consistiera en que la formación social que hoy se autodenomina socialista, lejos de haber aminorado la sumisión, opresión y dependencia del individuo, en determinados aspectos ha alcanzado formas de opresión inconcebibles en una sociedad de suyo tan opresiva como la capitalista.

Efectivamente, el pensamiento y la práctica de Lenin se inscriben en el contexto de una sociedad subdesarrollada, así como el «modelo soviético» está condicionado por el «atraso salvaje» de Rusia, pero resulta demasiado simplificador reducir el leninismo y la problemática del Estado soviético a una cuestión exclusiva de su subdesarrollo. Si en el pasado fue un error

[8] Moshé LEWIN, *Le dernier combat de Lénine,* París, 1967.

grave atribuir a la Revolución de Octubre y al Estado soviético que de ella surge un carácter universal —el único modelo posible hacia el socialismo—, no es menos irresponsable el deshacerse hoy del engorro que para cualquier socialista significa la experiencia soviética, negándola todo valor ejemplar o cualquier contacto con el concepto europeo de socialismo. El «socialismo» soviético es ciertamente el socialismo posible en el subdesarrollo y desde el subdesarrollo, pero nos enseña también no poco sobre las posibilidades y peligros que en la realidad puede conllevar otro modelo socialista.

Hoy ya no basta con cuestionar el marxismo de Lenin —esto ya lo hicieron abundantemente sus contemporáneos, aunque el triunfo bolchevique lo haya mantenido olvidado durante decenios— ni desprenderse del leninismo alegando su desviación del marxismo o su oportunidad tan sólo en una determinada situación histórica. No basta con negar el carácter socialista del Estado soviético, ni sostener que este colectivismo burocrático nada tiene que ver con el socialismo europeo. Una teoría de la experiencia soviética, de lo que ha ocurrido en Rusia que, como escribió Lenin, «ningún Marx ni ningún marxista lo pudo prever», resulta imprescindible para revisar no pocas categorías clave del pensamiento de Marx. La izquierda socialista que hace diez años se sentía cabalmente leninista ha superado a Lenin y se siente hoy cabalmente marxista. Dentro de los próximos diez años empezará con la crítica de Marx, si no quiere perder por completo la posibilidad de orientarse en el mundo que vivimos.

CAPITULO IV

LAS PARADOJAS DEL EUROCOMUNISMO

Hace unos meses, Milovan Djilas afirmaba en la televisión alemana occidental que el eurocomunismo es el acontecimiento político más importante ocurrido en Europa desde el fin de la «guerra fría». El antiguo líder comunista yugoslavo se sentía reivindicado de tantos años de cárcel, persecución y calumnia, al descubrir en el eurocomunismo atisbos de lo que desde hace tiempo constituye su posición básica: el mundo soviético, el llamado «socialismo real», nada tiene que ver con el socialismo, en cuanto socialismo y democracia son indisolubles y, por tanto, inconcebibles el uno sin la otra. Para Djilas, como para todos los socialistas que han mantenido su ideal sin arreglarse con el burocratismo oriental ni con el socialdemócrata de los países capitalistas avanzados, el eurocomunismo representa la posible encarnación histórica de una gran esperanza: el socialismo en libertad, el socialismo democrático en un tiempo en que no faltan motivos para perder toda esperanza.

La fascinación que ha despertado el eurocomunismo se debe tanto a haber remozado las esperanzas de los hasta ahora siempre decepcionados socialistas como al hecho innegable de incidir sobre la relación de fuerzas establecidas, replanteando la cuestión, enojosa pero siempre presente, de la dominación externa de Europa. Hay, por tanto, una problemática *socialista* del eurocomunismo —¿cuál sería el camino europeo hacia el socialismo?— y otra *europeísta:* ¿qué significa el desprendimiento de los partidos comunistas de la égida moscovita en la relación de fuerzas entre las dos grandes potencias?; ¿conlleva acaso esta autonomía creciente de los partidos comunistas

una posibilidad de mayor autonomía europea? El que estas dos cuestiones estén íntimamente ligadas —no hay vía europea hacia el socialismo sin una mayor independencia europea— no quiere decir que no convenga el diferenciarlas nítidamente, ya que son muy distintos los intereses sociales que subyacen en cada uno de estos planteamientos. Pues si bien es cierto que las fuerzas sociales interesadas en avanzar hacia el socialismo luchan por una mayor independencia europea, no todos los sectores sociales interesados en una mayor autonomía europea pretenden precisamente una alternativa socialista.

En la actual discusión en torno al eurocomunismo, no poca confusión se deriva de no distinguir suficientemente el aspecto socialista del internacional de la cuestión y, desde luego, no han sido los eurocomunistas los que, al propugnar una «vía europea hacia el socialismo», hayan contribuido a clarificar sus implicaciones internacionales. El problema de la relación entre el nacionalismo, Estado-nación, vía nacional hacia el socialismo e internacionalismo proletario sigue planteado en los mismos términos confusos y contradictorios que lo estaba en tiempos de la Segunda Internacional.

1. Primera aproximación al eurocomunismo

El eurocomunismo constituye una realidad indiscutible, por muy discutible que pueda ser su denominación. No vale la pena explayarse sobre lo adecuado o inadecuado del término. Las sutilezas al respecto sirvieron mientras que los eurocomunistas no se atrevieron a presentar claramente sus posiciones aceptando esta denominación. El término podrá ser más o menos feliz, pero ya ha adquirido carta de naturaleza. Tampoco a estas alturas resulta ya muy fructífero analizar críticamente las muchas dudas que sobre la existencia misma del eurocomunismo se han formulado en estos últimos años. De interés sólo sería dejar constancia del acuerdo tácito, en ésta como en muchas otras cuestiones, entre la derecha capitalista y los partidos comunistas del bloque oriental o completamente subyugados a sus directrices. Para ambos defensores a ultranza del *statu quo*, el eurocomunismo ni existe ni puede existir.

La derecha europea ha sacado de nuevo a la calle el viejo arsenal de argumentos sobre la inmutabilidad y el carácter intrínsecamente perverso del comunismo. El comunismo, siempre al servicio de Moscú, no cesaría nunca en su diabólico plan de dominar el mundo. Por tanto, sus apelaciones a la «democra-

cia» y al «pluralismo» hay que desenmascararlas como lo que realmente son, pura táctica para ganar audiencia, fortalecer sus posiciones y mejor preparar el golpe final. No en vano poco antes de tomar el poder en las llamadas «democracias populares», entre 1944 y 1948, los comunistas proclamaron muchas de las consignas que hoy reactualiza el eurocomunismo, y ya sabemos cómo, una vez dueños del aparato del Estado, han sido pisoteadas las libertades fundamentales y cualquier noción de democracia.

En todo caso, este último argumento infiere dos hechos innegables: primero, que las tesis eurocomunistas no son tan novedosas como algunos pretenden, sino que cabe rastrear sus antecedentes hasta los años treinta en la política de «frente popular» y en la concepción de «democracia popular» que los comunistas barajaron en la inmediata posguerra; segundo, que, una vez consolidado el poder de los comunistas con la intervención directa del ejército soviético, el modelo que se puso en práctica fue realmente el estalinista, con todas sus consecuencias en la erradicación de la democracia. Pero que para muchos comunistas sus concepciones democráticas no eran meras declaraciones tácticas quedó también patente en las «depuraciones» estalinistas que sufrieron los partidos comunistas de la Europa oriental una vez en el poder. Claro que podrá decirse: ¿de qué sirve el testimonio de ingenuos idealistas, condenados al papel de héroes? El problema es de otro orden; consiste en discernir si objetivamente la situación de los países del este europeo en los años de la inmediata posguerra es comparable a la del sur de Europa a finales de la década de los setenta.

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de la Alemania occidental (DKP), Herbert Mies, considera el eurocomunismo pura invención de la prensa burguesa para intentar confundir el movimiento obrero en momentos en que el capitalismo mundial atraviesa una seria crisis. En una situación difícil para la burguesía se pretende obnubilar a los pueblos construyendo falsas divergencias y fracciones dentro del movimiento comunista. La política que se atribuye a los llamados eurocomunistas es de clara factura reformista y socialdemócrata, pero, naturalmente, no corresponde a la de los partidos comunistas de la Europa latina, que se mantienen fieles a la línea marxista-leninista.

Las reacciones soviéticas al libro de Carrillo *Eurocomunismo y Estado*, acusado expresamente de «antisovietismo», han terminado por minar la base a las tesis conservadoras, tanto de la derecha —el eurocomunismo no existe, es pura táctica de

diversión de los soviéticos— como de los partidos comunistas ortodoxos —el eurocomunismo no existe, es pura táctica de diversión de la burguesía—. Es digno de tenerse en cuenta que en el enjuiciamiento de la naturaleza del estalinismo también coincidieron formalmente la postura oficial soviética con la más derechista surgida en el mundo occidental, como he puesto de relieve en otra ocasión. Valdría la pena analizar en profundidad tan llamativas coincidencias; un estudio detallado de esta cuestión pondría de manifiesto correlaciones interesantes entre estructuras de poder y estructuras ideológicas en formaciones sociales harto distintas.

Si ya no puede caber duda sobre la existencia del eurocomunismo —los soviéticos al atacarlo han subrayado su existencia—, en cambio, sobre lo que realmente significa este concepto reina no poca zozobra entre eurocomunistas, adversarios y simpatizantes, con una sola excepción los soviéticos, que, con la sutileza y clarividencia heredadas de los mejores tiempos del estalinismo, lo han sabido reducir a «una nueva variante del anticomunismo, del antisovietismo». Este morbo ha podido infiltrarse en algunos partidos comunistas europeos debido a su rápido crecimiento —inconcebible sin la política soviética de coexistencia pacífica—, pero que ha traído consigo, al admitir a no pocos elementos pequeño-burgueses, una clara desviación nacionalista. Han llegado así a prevalecer puntos de vista «chauvinistas» sobre las exigencias internacionales que definen a un movimiento auténticamente revolucionario. Para los autores soviéticos y sus fieles seguidores, el eurocomunismo se explica poniendo en relación los distintos aspectos de una política típicamente pequeño-burguesa —reformismo, gradualismo, socialdemocraciatismo— con sus consecuencias en el plano internacional —nacionalismo, crítica del internacionalismo proletario, antisovietismo—, tendencias todas que desembocan en el anticomunismo profundo que caracterizaría al llamado eurocomunismo.

Diferencias importantes entre los partidos comunistas de Italia, España y Francia —los tres partidos que hoy se reclaman abiertamente del eurocomunismo— se ponen de manifiesto tanto en lo que se refiere a la historia de cada partido como a la situación nacional en la que se hallan inmersos. Pero no por ello dejan de presentarse rasgos comunes fundamentales que hacen indispensable un concepto propio para designar esta corriente dentro del movimiento comunista internacional. En cuatro pueden resumirse los caracteres esenciales del eurocomunismo: 1. Profundizando en la noción de una «vía nacional ha-

cia el socialismo», se pone énfasis en la «vía democrática» como la propia y adecuada para los países capitalistas avanzados. 2. Desde esta perspectiva, importa sobre todo defender y ampliar las libertades democráticas y los derechos fundamentales de la persona que, lejos de constituir una superestructura ideológica al servicio de la burguesía, representan una adquisición histórica irrenunciable y de carácter universal. 3. Se repudia, por tanto, como obsoleto y contraproducente al nivel histórico alcanzado el concepto de «dictadura del proletariado»; los partidos comunistas renuncian a su pretensión de ser el único partido de clase obrera y, por consiguiente, aceptan un pluralismo de partidos y un pluralismo ideológico, tanto en las etapas de transición hacia el socialismo como en su construcción y realización. 4. Semejantes posiciones implican un distanciamiento del «modelo soviético» como el único efectivo y posible; más aún, se critica el llamado «socialismo real» como un socialismo políticamente inmaduro, debido al subdesarrollo socioeconómico y a los condicionamientos culturales extraeuropeos que lo impregnaron en su origen.

Con estos postulados básicos, los eurocomunistas pretenden haber elaborado una posición «marxista» adecuada a los imperativos históricos de las naciones en las que actúan. Reconocen, desde luego, lo mucho que aún queda por hacer, desde una renovación creadora del marxismo, para hacer explícita esta posición en cada una de las intrincadas cuestiones que la práctica diaria plantea, pero creen presentar, en sus líneas generales, una alternativa válida tanto frente al «modelo soviético», que de seguir empeñándose en aplicarlo a la Europa de hoy significaría permanecer encerrados en un *ghetto* sectario sin posibilidad de incidir sobre la sociedad en la que se enquistan, como frente al reformismo socialdemócrata, que no es en el fondo más que una forma de perpetuar el capitalismo, administrándolo con más inteligencia que muchos partidos burgueses al llevar a cabo los remiendos imprescindibles para que siga a flote.

¿Dónde radica, entonces, la confusión sobre la naturaleza del eurocomunismo?; ¿cómo se puede hablar de inquietud y zozobra a la hora de poner en claro su verdadera significación? Las críticas al eurocomunismo vendrán necesariamente bien de posiciones pseudomarxistas, en el fondo conservadoras, ligadas a los intereses de gran potención de la Unión Soviética, interesada sobre todo en mantener el *statu quo* conservando su influencia sobre los partidos comunistas occidentales, bien de un pseudomarxismo residual que actualiza dogmáticamente posiciones

que, por muy revolucionarias que suenen, han sido largamente desmentidas por la práctica de la clase obrera a lo largo de todo un siglo, bien de la socialdemocracia, igualmente interesada en defender el orden social establecido, en el que ha logrado, por lo menos en algunos países europeos, una posición política casi hegemónica.

El eurocomunismo se preesnta como la única alternativa real para avanzar hacia el socialismo en el mundo desarrollado. Este capítulo pretende enunciar algunos problemas y contradicciones implícitos en el eurocomunismo, con el fin de ponerlo en su verdadero lugar. La crítica que se intenta puede tener un cierto valor, porque no se hace ni desde el dogmatismo soviético ni desde el dogmatismo «gochista», y, desde luego, no desde una posición socialdemócrata. Una crítica al eurocomunismo sólo resulta válida si se hace desde una posición claramente socialista, posición que el eurocomunismo pretende haber hecho suya y por eso la considera como posible fuente de crítica, pero que como intentaré demostrar está muy lejos de haber asimilado.

2. Eurocomunismo y socialismo

La tesis fundamental del eurocomunismo, «la vía hacia el socialismo ha de consistir en profundizar y ensanchar la libertad y la democracia», es una tesis, qué duda cabe, cabalmente socialista. El tema que hoy se plantea el eurocomunismo, el de la relación Estado, democracia y socialismo, ha venido ocupando a los socialistas desde hace más de un siglo, es decir, desde que sugen en el pensamiento político europeo las nociones de democracia y de socialismo como realidades que mutuamente se complementan para poder realmente existir. La conocida fórmula «no hay democracia sin socialismo, ni socialismo sin democracia» ha alcanzado ya una respetable antigüedad. Se podrá discutir la verdad de esta tesis —no en vano constituye uno de los temas más debatidos en la historia del movimiento obrero—, pero lo que parecería imposible es que se introduzca en la discusión actual como si se tratase de un nuevo conocimiento al que habrían llegado, empujados por su experiencia revolucionaria, algunos partidos comunistas de la Europa occidental.

Lo que produce enorme sorpresa —y reflexionando un tanto no poca desazón— no es que el comunismo europeo dé un giro copernicano en su rumbo ni que modifique postulados básicos que hasta hace poco había defendido acérrimamente: de

sabios es enmendar y si además consideramos la nueva línea más justa y adecuada a la realidad de nuestros países, miel sobre hojuelas. No son los cambios —en la historia del comunismo harto frecuentes— ni la dirección de estos cambios —por una vez parece que en el buen camino— lo que nos inquieta, sino el que se hayan llevado a cabo *sin asumir la historia vivida.* Al leer los escritos de Carrillo o Berlinguer parecería que comunistas y socialistas, desde que los dividió la Revolución rusa, no se hubieran enfrentado justamente en razón de las tesis que ahora cuestionan. Resulta alarmante que el eurocomunismo haya redescubierto viejas verdades socialistas sin aparentemente ser consciente de ello. Un tal desprecio por la historia, síntoma claro de que aún queda mucho por airear, no presagia nada bueno.

Entiéndase bien. No se trata de actualizar la historia para dar toda la razón a los socialistas y condenar a los comunistas como fuente de todos los errores y crímenes, invitándolos a reconocer los enormes perjuicios causados y a retornar contritos a los partidos socialistas, de donde nunca hubieran debido salir. Semejante posición, al sustituir el análisis histórico por una película de buenos y malos, remacha contenidos ideológicos igualmente pazguatos. Convertir a la historia en juez implacable para condenar al adversario es otra manera de huirla. Nada serviría mejor los intereses más reaccionarios que intentar aprovechar las contradicciones del eurocomunismo para hacer anticomunismo simplemente. Plantear correctamente los problemas que nos acucian precisa de una adecuada perspectiva histórica que al mostrar aciertos, fracasos y errores de unos y otros —quién ha dicho que los socialistas estén libres de toda culpa— aproximase posiciones y fortaleciese el «bloque político» de las clases y partidos que de verdad apuntan hacia el socialismo.

Esta historia no se despacha en unas cuantas páginas; nada nos ayudarían algunas generalizaciones globales. Basta por ahora con insistir en la labor conjunta que todavía tienen que realizar socialistas y comunistas: una revisión de su historia no desde una posición de partido, ignorándose o calumniándose mutuamente, sino desde su común perspectiva socialista. Porque ésta es la adquisición, probablemente irreversible, del eurocomunismo: el haber vuelto a la concepción que se fraguó en Europa y que vinculó desde un principio el socialismo al despliegue de la democracia. Ahora bien, los comunistas no pueden aceptarla coherentemente, y mucho menos llevarla a la práctica sin una profunda revisión de su historia. Pudiera ser que

algunos elementos que siguen considerando constitutivos de su propia identidad estuvieran en crasa contradicción con la «vía democrática hacia el socialismo» que ahora defienden. De ahí la confusión y el desasosiego que en tirios y troyanos produce el eurocomunismo.

Los partidos comunistas nacen arrastrados por el deslubramiento que ocasiona Lenin, el llamado renovador del marxismo revolucionario, que habría sido capaz de pasar la prueba decisiva de la práctica al dirigir la primera revolución socialista triunfante en el mundo. La razón de ser de los comunistas se sustenta en dos premisas fundamentales: 1. La teoría y la práctica revolucionarias de Lenin constituyen la última interpretación válida del marxismo para esta última etapa del capitalismo monopolista, el imperialismo. En consecuencia, sería falsificar el leninismo si se le niega esta significación universal, reduciéndolo a un fenómeno exclusivamente ruso o tan sólo aplicable a sociedades subdesarrolladas. 2. La Revolución rusa es una revolución socialista, como socialista es la sociedad que engendra.

Los socialistas, marxistas o no, no aceptaron estas tesis en 1917, ni en 1920, ni las aceptan en la actualidad. El leninismo pareció ya a sus contemporáneos un revisionismo que destruía o malinterpretaba postulados básicos del marxismo; la «gran revolución socialista de octubre», un golpe de Estado de un partido minoritario —los bolcheviques— que había logrado consolidar una dictadura desarrollista, pero que, en las condiciones sociales y económicas del país y con los métodos dictatoriales aplicados resultaba irrisorio, si no denigrante, el que pudiera hablarse de socialismo. Justamente, la antitética valoración del leninismo y de la Revolución rusa es lo que creó un muro infranqueable entre comunistas y socialistas, dando a cada corriente su identidad propia. El acercamiento del eurocomunismo a las posiciones básicas del socialismo conlleva necesariamente el tener que revisar su relación con el leninismo y con la Revolución rusa. Pero aquí empiezan las ambigüedades.

3. Las ambigüedades del eurocomunismo

Veámoslas en el eurocomunista que ha ido más lejos: Santiago Carrillo. La primera cuestión clave consiste en dilucidar la relación del eurocomunismo con el leninismo. No con esta o aquella tesis de Lenin, en esta o en aquella etapa; tampoco con la significación que se pueda atribuir a Lenin como teórico o

como revolucionario, sino con el leninismo comprendido «como el marxismo de la época del imperialismo», es decir, con lo que alguno ha llamado «un corpus teórico de valor universal», y cuyos postulados fundamentales sobre la organización del partido, la toma revolucionaria del poder por la clase obrera, la dictadura del proletariado en el período de construcción del socialismo, etc., son harto conocidos y hasta hace bien poco habían sido defendidos por los comunistas como dogmas inmutables e indiscutibles.

Carrillo elude la cuestión. Ni siquiera se atreve a repetir la evidencia de que el leninismo, como sistema acabado, es una invención de Stalin, forjado para consolidar su poder personal dentro del partido, el del partido dentro de la sociedad y del Estado soviético y el de la Unión Soviética dentro del movimiento comunista internacional. Carrillo se escapa por la tangente con unas cuantas banalidades sin sentido preciso, algunos circunloquios que encubren más que aclaran y muchos juicios de valor que transmiten en el lector la sensación de que, a pesar de que como marxista mantiene una relación crítica con Lenin, su valoración de su persona y su obra es altamente positiva.

No niega, desde luego, que los eurocomunistas se han distanciado de algunas posiciones leninistas —«quizás a algunos les suena a blasfemia leer que algunas tesis de Lenin están rebasadas» [1]—; así, por ejemplo, «la defensa de la realidad revolucionaria que está a punto de surgir, o que ha surgido ya después de octubre frente al democratismo burgués, que constituye el *summum* de las aspiraciones socialdemócratas, lleva a Lenin a subestimar y a reducir el concepto genérico de democracia» [2], pero en fin de cuentas esta revisión de algunas tesis de Lenin nada tiene de particular: «revisar, en sentidos contrapuestos, lo han hecho no sólo los antimarxistas, sino los marxistas más destacados» [3], incluso Stalin, el leninista por antonomasia, el inventor del término marxismo-leninismo, «consideraba que ciertas tesis de Lenin eran caducas» [4], pero todo ello no quita que «en el leninismo haya toda una parte importantísima: hay, en efecto, la aplicación del marxismo a las condiciones rusas y

---

[1] Santiago CARRILLO, *Eurocomunismo y Estado*, Barcelona, 1977, pág. 12. En lo sucesivo, citado como *E. y E.*

[2] *E. y E.*, pág. 115.

[3] *E. y E.*, pág. 24.

[4] Santiago CARRILLO, *Mañana, España. Conversaciones con Régis Debray y Max Gallo*, París, 1975, pág. 254. En lo sucesivo, citado como *M. E.*

a un mundo que salía de una guerra imperialista o que se preparaba a iniciarla; pero hay, al mismo tiempo y sobre todo, un método marxista muy valioso para enfrentarse con los problemas concretos de cada situación; es claro también que Lenin enriqueció el marxismo, por ejemplo, a propósito de los problemas nacionales y coloniales, sobre los del imperialismo, que Marx y Engels casi no habían tratado. Profundizó también en la idea de partido dirigente en el plano teórico»[5].

Quien haya leído a Carrillo no podrá acusarme de elegir textos especialmente equívocos o de haberlos manipulado con el fin de mostrar su radical ambigüedad. Esta se revela ya en el primer planteamiento: *Eurocomunismo y Estado* es cabalmente una réplica a todas y cada una de las tesis que defiende Lenin en *Estado y revolución*, sin que, claro está, en ningún momento se plantee inequívocamente en estos términos. Se podrá estar de acuerdo o no con el libro de Lenin —muchos no lo estamos—, pero es difícil negar su coherencia, sus raíces marxistas y su ímpetu revolucionario. En todo caso, merece que se discuta en serio. Desgraciadamente, el libro de Carrillo está a mil leguas de iniciar la discusión abierta y sincera que necesitamos, asimilando la historia de estas seis décadas y manteniendo una perspectiva socialista. Ahora bien, sin un debate leal y profundo con el leninismo, el eurocomunismo no podrá alcanzar una mediana credibilidad.

Pero, para terminar de rizar el rizo de la confusión, cuanto mayor es el disentimiento de fondo en las cuestiones claves que se refieren a la naturaleza del Estado y a su posible transformación democrática, más formalmente leninista se presenta Carrillo:: Lenin habría «subestimado» simplemente el concepto genérico de democracia en su lucha, por lo demás justificada, contra el «democratismo» socialdemócrata. Sobre el antiparlamentarismo visceral de Lenin, mejor tender el más tupido velo. No vale la pena discutir la tesis leninista sobre la necesidad de destruir el aparato burgués del Estado cuando ni siquiera en la Unión Soviética se llevó a cabo. El que los eurocomunistas se desvinculen de la noción de «dictadura del proletariado» se comprende después de las experiencias dictatoriales que ha vivido el siglo XX. Pero todo ello no significa que el eurocomunismo no reconozca los aportes esenciales del leninismo justamente en aquellas cuestiones que no les conciernen directamente por pertenecer bien a un pasado ya sacralizado, bien a un mundo como el colonial y subdesarrollado del que por suerte no

---

5 *M. E.*, pág. 255.

formamos parte. Lo único que de verdad se salvaría del leninismo como servible en el momento actual en las sociedades capitalistas avanzadas es su concepción del partido.

No menos ambigua es la relación con la Unión Soviética. «Algunos dogmáticos dicen de mí que soy antisoviético. Pero yo me hice comunista porque me atrajo el ejemplo de la Revolución de Octubre y entiendo muy bien el papel que desempeña la Unión Soviética en el proceso de la Revolución mundial» [6]. Sobre el origen del Estado soviético, así como sobre su papel revolucionario en la órbita internacional, se mantienen todos los mitos que en su día engendró el movimiento comunista. Preguntado directamente por su opinión sobre el Komintern, Carrillo se escapa por la tangente confesando paladinamente que «no he tenido suficiente tiempo para llevar a cabo una reflexión en profundidad sobre la Internacional. Quizás el tributo del militante demasiado ocupado por las cuestiones de cada día es no poder reflexionar suficientemente sobre los grandes problemas históricos» [7], para pasar a defender a continuación los viejos tópicos, aunque matizando un tanto al reconocer que con Stalin «la Internacional pudo aparecer como instrumento auxiliar de la política soviética», sin llegar, desde luego, a afirmar que realmente lo fuese, y si realmenet lo fue, «¿qué hay de extraño en ello? ¿No teníais conciencia de que nuesta tarea primordial era defender el primer Estado obrero? Yo esto ni lo discuto. Para mí, en aquella época, la defensa de la URSS era lo más importante» [8].

Lástima que los muchos quehaceres que atosigan al dirigente comunista hayan impedido a Carrillo el leer la historia más importante y lúcida que se ha escrito sobre el tema, obra por lo menos de un español que, dada su biografía paralela, no debiera resultarle demasiado extraño; nos referimos, naturalmente, a Fernando Claudín y a su libro, *La crisis del movimiento comunista. De la Komintern al Kominform*, aparecido en París en 1970, es decir, cinco años antes de que Carrillo manifestase no haber tenido tiempo de estudiar el tema a fondo. Su lectura le hubiera ayudado a clarificar no pocas posiciones o, por lo menos, a marcar nítidamente los puntos de su desentimiento sin recurrir a veladas alusiones. En todo caso, no hubiera necesitado estudios de envergadura para caer en la cuenta de que no se puede, por un lado, justificar la política de la Tercera In-

---

[6] *M. E.*, pág. 181.
[7] *M. E.*, pág. 104.
[8] *M. E.*, pág. 106.

ternacional afirmando que en 1936, en el apogeo de la dictadura de Stalin, la Unión Soviética era realmente «el primer Estado obrero» y, en consecuencia, afanarse en su defensa, el primer deber de un revolucionario; y, por otro, escribir que «la Revolución de Octubre ha producido un Estado que no es evidentemente un Estado burgués, pero tampoco es todavía el proletariado organizado como clase dominante, no es todavía una auténtica democracia obrera» [9]; el Estado soviético «ha guardado no sólo contenidos de derecho burgués, sino que ha llegado a deformaciones y degeneraciones que en otros tiempos sólo podíamos imaginar en Estados imperialistas» [10].

Y es que no hay forma de criticar al Estado soviético sin por ello dejar de poner en tela de juicio su papel en el proceso revolucionario mundial. Si se deja de considerar a la Unión Soviética el «primer Estado obrero» que ha hecho realidad todo lo que cabía dentro de sus condicionamientos históricos —«socialismo real»— y se pone énfasis en sus «deformaciones y degeneraciones burocráticos», entonces éstas pueden dar cuenta también de no pocos comportamientos «chovinistas», cuando no claramente imperialistas, en la política internacional de la Unión Soviética. Pero como se da una identificación completa entre la política internacional soviética y la de los partidos comunistas durante el período de la Tercera Internacional, que de ningún modo cesa con su desaparición en 1943, la crítica del Estado soviético supone a la vez una crítica de la política interna de los partidos comunistas. Esto lo saben perfectamente los soviéticos: de ahí que denuncien la menor crítica a su realidad social o estatal como «antisovietismo», que no sería en el fondo más que una forma de «anticomunismo».

4. El dogma del carácter socialista de la Revolución de Octubre

Vale la pena prestar alguna atención al lenguaje de Carrillo, mucho más sutil y ambiguo de lo que a primera vista pudiera parecer, en su imposible intento de hacer una crítica del Estado soviético, sin por ello cuestionar en bloque la historia del movimiento comunista internacional, incluida la historia de su propio partido. El afán de los eurocomunistas de nadar y guardar la ropa les lleva a las más sorprendentes puntualizaciones.

[9] *E. y E.*, pág. 199.
[10] *E. y E.*, pág. 202.

Desde luego, no se puede poner en duda el carácter socialista de la Revolución de Octubre: es el dogma básico que sostiene todo el edificio. Pero tampoco cabe seguir ignorando «que el fenómeno estaliniano, que ha sido una forma de totalitarismo abundantemente utilizado por la propaganda capitalista, ha debilitado la fiabilidad democrática de los partidos comunistas entre una parte de la población de nuestros países»[11]. Los partidos comunistas de la Europa occidental, si no quieren perpetuar la ineficacia del pasado aislándose en su propio enquistamiento sectario, no pueden obviar una cierta crítica «ante algunos aspectos del socialismo de hoy»[12].

El eurocomunismo se evita no pocas dificultades si la crítica a la realidad soviética la constriñe a nuestro tiempo. Así, los eurocomunistas se distancian de la invasión de Checoslovaquia en 1968, pero no del aplastamiento de la rebelión de Cronstadt en 1921, que significó el fin de la oposición y de las libertades proletarias. Primero, quién se acuerda de historias tan viejas; segundo, cómo salvar el dogma del carácter socialista de la Revolución de Octubre si la crítica se remonta a la misma épica de la revolución. Carrillo escribe que «los partidos incluidos en la corriente eurocomunista coinciden en la necesidad de ir al socialismo con democracia, pluripartidismo, parlamento e instituciones representativas, soberanía popular ejercida regularmente a través del sufragio universal, sindicatos independientes del Estado y los partidos, libertad para la oposición, derechos humanos, libertades religiosas, libertad de creación cultural, científica, artística y el desarrollo de las más amplias formas de participación popular en todos los niveles y ramas de la actividad social»[13]. Pero también Carrillo considera que «aunque las condiciones del desarrollo capitalista de Rusia y la ruina provocada por la guerra sean un terrible hándicap para realizar el socialismo [...], los comunistas rusos y la clase obrera no tenían otra opción que tomar el poder e intentar, con ayuda de la revolución europea o sin ella, sentar los fundamentos de una nueva sociedad»[14], lo que significaba —y sobre el particular nadie pudo ni puede tener dudas— disolver por la fuerza la Asamblea Constituyente, votada por sufragio universal; suprimir el parlamento y demás instituciones representativas, aludiendo a su carácter intrínsecamente burgués; eliminar el pluripartidis-

---

[11] *E. y E.*, pág. 200.
[12] *M. E.*, pág. 181.
[13] *E. y E.*, pág. 141.
[14] *E. y E.*, págs. 176-177.

mo imponiendo el partido único, con su consiguiente legitimación en el concepto de «dictadura del proletariado»; prohibir los sindicatos independientes, reducidos a meras cadenas de transmisión de las órdenes del aparato estatal; perseguir, como residuos ideológicos del orden burgués derrocado, las libertades y derechos fundamentales de la persona.

Nadie pone en duda que, en las condiciones de la Rusia revolucionaria, sin la política de Lenin los bolcheviques no se hubieran mantenido mucho tiempo en el poder. También cabe admitir, aunque en este punto habría que hacer muchos más distingos, que la única alternativa real a la dictadura bolchevique hubiera sido una dictadura militar por lo menos tan terrible como la bolchevique, pero al servicio de los intereses más reaccionarios de la sociedad. Pero no son éstas las cuestiones que se discuten. Lo que se debate desde hace sesenta años, y a nivel teórico lo único que importa, es si la política que puso en práctica Lenin podía llevar de alguna forma, dando los rodeos y por los vericuetos que fuere, al socialismo. Los socialistas, en virtud de su concepción del socialismo democrático, lo negaron entonces y lo siguen negando ahora. Los comunistas, en cambio, han afirmado durante décadas que sólo este camino podía conducir al socialismo, denunciando al socialismo democrático como una invención pequeño-burguesa. Los eurocomunistas continúan defendiendo la vía leninista como la apropiada a las condiciones de la Rusia zarista y tal vez para otras sociedades subdesarrolladas, pero piensan, y en esto consiste su novedad, que se trata de una vía entre otras muchas posibles; en todo caso, para los países capitalistas avanzados, la vía democrática y parlamentaria parecería la más adecuada.

El problema fundamental consiste en averiguar si la llamada vía democrática hacia el socialismo, que en su realización práctica —qué duda cabe— ha de tomar las más variadas formas, acorde con las circunstancias nacionales de cada país, es una opción junto a otros caminos no democráticos, pero igualmente posibles y en determinadas circunstancias incluso los únicos viables; o si, por el contrario, *la democracia es consustancial con el socialismo*, de modo que no se pueda avanzar lo más mínimo en esta dirección sin la participación activa de las masas, como implica, en último término, el concepto mismo de democracia, participación que, desde luego, sólo es factible en un régimen en el que, lejos de suprimirse, se hayan ensanchado las libertades en proporciones que hoy casi resultan inimaginables. Lo que en el fondo está en debate es si cabe marchar hacia el socialismo sustituyendo la presencia activa de las masas

por la actividad de una minoría encuadrada en el partido que, por estar en posesión de la «doctrina correcta», se arroga el deber y el derecho de imponer por la fuerza sus propios criterios, incluso contra la voluntad manifiesta de la inmensa mayoría, que se denigra como «enajenada» o «pequeño-burguesa». Y no vale desviar la cuestión confundiendo la verdadera violencia revolucionaria —dirigida contra una minoría numéricamente insignificante de privilegiados—, siempre legítima y en muchas ocasiones incluso indispensable, con la violencia estatal de una minoría para sustentar un orden político y social que, aunque se autodenomina revolucionario y socialista, rechaza la mayor parte de la población.

El eurocomunismo ha terminado por aceptar la vía democrática no por convencimiento de que no hay socialismo sin democracia ni otro camino hacia el socialismo que por la democracia, sino simplemente por razones tácticas: en el mundo desarrollado, hoy en día, no cabría emprender con esperanza de éxito otro camino hacia el socialismo que el democrático. Y aunque no faltan manifestaciones de este tenor, «las libertades democráticas políticas y los derechos humanos son un logro histórico irrenunciable del progreso humano» [15], los eurocomunistas conciben muy bien que haya sido preciso renunciar a estos logros «irrenunciables» si así lo exigieron las circunstancias —«las tesis de Lenin en 1917 y 1918 (eran) aplicables a Rusia y teóricamente al resto del mundo en aquella época» [16]— o lo siga siendo actualmente en los países subdesarrollados: «las soluciones que propugnamos no valen sin duda para todo el mundo, valen para el nuestro en grados semejante o superior de desarrollo» [17]. Y, desde luego, no se aduce razón alguna para no repudiar el camino democrático si se pusiese de manifiesto que tampoco daba el resultado esperado en el mundo capitalista avanzado. En el grado actual de elaboración teórica, arrastrando todavía la pesada carga de sus viejos dogmas respecto a Lenin y a la Revolución de Octubre, no cabe ahorrar al eurocomunismo el reproche de «tacticismo».

Pero insistir en el carácter intrínsecamente democrático del socialismo no es cuestión meramente formal que importa tan sólo a unos cuantos intelectuales empeñados en formular la «esencia» del socialismo al margen de las formas concretas de su realización, sino premisa fundamental con enormes conse-

---

15 *E. y E.*, pág. 17.
16 *E. y E.*, pág. 12.
17 *E. y E.*, pág. 25.

cuencias prácticas. Permanecer a este respecto en la ambigüedad que hoy caracteriza al eurocomunismo implica graves riesgos. Algunos me parecen de tal envergadura, que no pueden quedarse en el tintero.

El no romper el dogma sobre el carácter socialista de la Revolución de Octubre y de la sociedad que engendra obliga, si no se quiere dar la espalda a la realidad y sí mantener un cierto espíritu crítico, a construir un modelo tan contradictorio como el de un socialismo que presentaría «formas en cierto sentido totalitarias» [18]. Y aunque las diferencias con el fascismo resulten innegables, no sólo Trotski y cuarenta años más tarde Carrillo, sino cualquier observador imparcial tiene que reconocer que, «a pesar de la profunda diferencia de sus bases sociales, el estalinismo y el fascismo son fenómenos simétricos: en muchos de sus rasgos tienen una semejanza asombrosa» [19]. Pero así como un «socialismo democrático» es una redundancia, un «socialismo totalitario» o que presente «formas en cierto sentido totalitarias» es una contradicción en sí: un tal socialismo no existe, como no existe un círculo cuadrado o un círculo que presente ciertos aspectos del cuadrado.

Respecto a la naturaleza del Estado soviético, baste con recordar dos hechos fundamentales: 1. Desde octubre de 1917 a marzo de 1923, en que Lenin cae enfermo para no reponerse más, son muy distintas y hasta contradictorias las opiniones que sobre el carácter de la sociedad soviética cabe rastrear en sus escritos. De todas formas, según se derrumban las ilusiones sobre la revolución en el occidente europeo, es cada vez más consciente de que la única tarea que cabe acometer es la de modernizar el país, asimilando la técnica y la civilización europeas, de modo que un día pueda ser posible la construcción del socialismo. La meta a corto y mediano plazo es, por tanto, un «capitalismo de Estado» que lleve a cabo la «acumulación primitiva», la organización de la producción en grandes unidades, una alta tasa de productividad, la centralización del proceso económico, etc., elementos todos que ya son realidad en los países capitalistas avanzados, pero que faltan en la atrasada Rusia. Y sin ellos no habría posibilidad de construir el socialismo. Pero, insiste Lenin, se trata de un «capitalismo de Estado» que no tiene precedente en la historia en cuanto el Estado está en poder de la clase obrera y ésta es justamente la garantía de que el proceso «capitalista» de acumulación desemboque en la

---

18 *E. y E.*, pág. 124.

19 León TROTSKI, *La revolución traicionada*, México, 1963, pág. 229.

construcción del socialismo. 2. Fue Stalin el que zanjó la cuestión al considerar posibles relaciones socialistas de producción antes de haber conseguido un determinado grado de desarrollo económico y cultural. Su tesis, cabalmente antileninista y antimarxista, de la «construcción del socialismo en un solo país», máxime en uno subdesarrollado, únicamente pudo parecer verosímil en la teoría y en la práctica identificando sin más socialismo con economía estatalizada. La gran mistificación de Stalin consistió en identificar «estatal» con «socialista», de modo que pudo declarar el socialismo realizado una vez que el Estado llegó a controlar todas las ramas de la economía. La falsa equivalencia de socialista con estatal es lo que ha hecho factible que surgiera un «socialismo» (entiéndase, un «estatismo») «totalitario». El Estado puede ser totalitario, pero nunca el socialismo.

Seguir llamando socialista al Estado soviético no sólo conlleva admitir la contradicción de un «socialismo con rasgos totalitarios», sino también la mistificación que implica identificar socialismo con la mera estatificación de la economía. Mientras en el horizonte aparezca como socialista algo que tenga que ver con el «totalitarismo» soviético o con una economía harto ineficiente en manos del aparato del Estado, se comprende que el socialismo no levante grandes entusiasmos en los pueblos que han alcanzado un cierto grado de bienestar social. Otra cosa es el caso de los países subdesarrollados, en los que estos sistemas dictatoriales de concentración de todos los esfuerzos en un modelo estatal de desarrollo se han mostrado como relativamente eficientes en los primeros estadios de la «acumulación primitiva» y de rápido cambio sociocultural. Cabe muy bien defender sus ventajas y mostrarse solidario con los pueblos que están luchando por una independencia real, conservando su propia identidad en el necesario proceso de asimilar la técnica occidental sin por eso empeñarse que están realizando el socialismo en el sentido específico que tiene este concepto dentro del ámbito cultural en que surgió.

Lo esencial es acabar con el mito estalinista de que una economía en poder del aparato del Estado es ya socialista. Unicamente desde la aceptación implícita de esta premisa puede Carrillo considerar los problemas que se presentan en el bloque soviético como propios del «sistema político» y no del económico y social: «Ahí (en el sistema político) es donde el socialismo no ha logrado alcanzar aún la naturaleza del socialismo en tanto que sociedad nueva. Se han abolido las clases dominantes y han sido liberadas las clases explotadas, pero si bien esto de-

biera haber significado la liberación de toda la sociedad y del hombre, lo cierto es que el socialismo aún no ha llegado a ello.» La infraestructura económica y social del socialismo habría sido realizada —«se han abolido las clases dominantes y han sido liberadas las clases explotadas»—, pero nos encontramos con la horrible sorpresa de que no se ha producido el efecto liberador que de ello se esperaba. No cabe crítica más demoledora contra el socialismo; menos mal que el socialismo es cosa bien distinta de una economía en manos del Estado como pretenden los estalinistas. Para dar cuenta de esta contradicción entre un sistema político opresor y uno socioeconómico en esencia liberador, Carrillo recurre a la desviación burocrática que habría llevado consigo el hecho de que «la mayoría de los países que han pasado al socialismo en condiciones no previstas por Marx y Engels habían conocido el feudalismo asiático durante largos siglos» [20], retomando consciente o inconscientemente —el estalinismo tiene su lógica— un viejo argumento de Stalin: las deformaciones burocráticas, que Stalin no negó en los años veinte, no serían más que residuos del pasado que irían de por sí poco a poco desapareciendo, según se avanzase en la industrialización y modernización del país, que era lo que Stalin entendía por socialismo.

Hay que renunciar al análisis marxista más elemental para suponer que en los países del bloque soviético la opresión política nada tendría que ver con las estructuras socioeconómicas establecidas. Desde Kruschev a Carrillo, los comunistas que se vuelven críticos suelen abandonar el marxismo a la hora de enfrentarse con la realidad soviética: hasta tal punto resulta corrosivo para los intereses dominantes. Critica, sí, excesos en el culto de la persona, residuos de un largo pasado de feudalismo asiático, pero nada de un análisis concreto sobre las posibles relaciones del fenómeno burocrático con determinadas estructuras socioeconómicas que bien pudieran estar en su base. Ahora bien, mientras el análisis marxista no se aplique coherentemente al llamado «socialismo real», pervivirán viejos mitos y mentiras patentes, enmarañando, o quizás incluso cortando, el camino hacia el socialismo en nuestros países.

Por lo menos, en un punto resulta imprescindible aplicar esta óptica marxista: el papel de la Unión Soviética en el proceso revolucionario a escala mundial. Si se parte de la tesis de que la Unión Soviética es un país socialista, aunque deformado burocráticamente, sean cuales fueren las críticas parciales, ha-

---

[20] *M. E.*, pág. 186.

bría que aceptar con Carrillo que «no podemos dejar de ligar a la victoria de la gran Revolución Socialista de Octubre todos los cambios progresistas que se han desarrollado en el mundo y de considerarla como el punto de partida de las transformaciones revolucionarias que conducirán la humanidad al socialismo»[21]. La Revolución de Octubre sería así para el socialismo lo que la francesa representó para el capitalismo: el parto violento de un nuevo orden que, una vez establecido, por toscas que sean sus primeras formas, resulta imparable. «La Revolución rusa históricamente ha tenido para el futuro sistema socialista mundial la equivalencia de lo que fue la gran Revolución francesa para el sistema burgués»[22].

Por lo pronto, Lenin nunca negó el carácter democrático-burgués de la Revolución de Octubre. En su folleto *La revolución proletaria y el renegado Kautsky* (1918) escribe sin tapujos lo que por otro lado a la sazón afirmaban los marxistas del mundo entero: «Sí, nuestra revolución es burguesa mientras tengamos que marchar con la totalidad del campesinado. Sobre este punto teníamos plena conciencia y desde 1905 lo hemos afirmado cientos, miles de veces, y nunca hemos intentado saltar este estadio necesario del proceso histórico suprimiéndolo por decreto»[23]. El 18 de octubre de 1921, haciendo un balance de lo realizado, con motivo del cuarto aniversario de la Revolución, Lenin escribe en *Pravda:* «Hemos llevado la revolución burguesa a su fin, como nadie la había hecho hasta ahora. Marchamos con plena conciencia y seguros hacia adelante, hacia la revolución socialista»[24], que para Lenin aún no había llegado en 1921. Fue Stalin el que convirtió en «socialista» la Revolución de Octubre, como un elemento fundamental de su teoría de la «construcción del socialismo en un solo país».

Conviene que conste, sin intentar respaldarme en ningún argumento de autoridad, que no han sido pocos los marxistas, de Lenin a Rosa Luxemburg, que teniendo muy en cuenta las circunstancias rusas, han insistido en el carácter necesariamente democrático-burgués de la Revolución de Octubre. Tomando esta hipótesis en consideración, cabe muy bien poner en duda que la Revolución rusa sea comparable a la francesa. Pudiera ocurrir que la Revolución de Octubre no fuese más que el segundo tiempo de un mismo proceso revolucionario, esta vez aco-

---

21 *E. y E.*, pág. 172.
22 *E. y E.*, pág. 106.
23 Lenin, *Werke*, Berlín, 1972, vol. 28, pág. 300.
24 Lenin, *Werke*, Berlín, 1973, vol. 33, pág. 31.

plado a las condiciones específicas de la periferia extraeuropea, que se define negativamente por su incapacidad, tanto de crear una burguesía revolucionaria como de desarrollar un capitalismo autónomo. En todo caso, para plantear una estrategia socialista, mucho depende de la forma como se resuelva el dilema en cuestión: o bien de la Revolución rusa ha surgido un nuevo orden que enmarca el horizonte de la futura sociedad socialista, válido incluso para el mundo desarrollado de Occidente, o bien constituye un modelo típico y exclusivo del mundo subdesarrollado, indispensable tal vez para alcanzar en un plazo breve el nivel de desarrollo económico y cultural al que había llegado el mundo capitalista más avanzado, pero que de ningún modo preconfigura la sociedad socialista a la que aspiramos. El eurocomunismo, en la ambigüedad contradictoria que lo caracteriza, afirma globalmente la universalidad del modelo soviético —«punto de partida de las transformaciones revolucionarias que conducirán a la humanidad al socialismo»— para negarla en concreto: el modelo soviético ya no serviría a las necesidades de nuestros países.

Sólo una clarificación previa del carácter de la Revolución de Octubre y de la naturaleza del Estado soviético permite plantear con algún rigor el difícil pero fundamental problema de las relaciones entre la Unión Soviética y el movimiento obrero europeo. Si se hace sin antojeras ni ideas preconcebidas, tal vez se llegue a la conclusión que la influencia de la Unión Soviética sobre el movimiento obrero de la Europa occidental en estos últimos sesenta años ha sido bastante más negativa de lo que todavía muchos se atreven a imaginar. Escisión en 1920 del movimiento obrero, con todas sus consecuencias de debilitamiento y de polarización de grupos, partidos y sindicatos, que se combaten más entre sí que al enemigo común; choque frontal con la socialdemocracia, llegando a calificarla de ala izquierda del fascismo —«socialfascismo»— como contribución soviética a la lucha obrera contra el fascismo; capitulación de Yalta, dividiendo Europa en zonas de influencia, con la consiguiente neutralización de los partidos comunistas occidentales después de la Segunda Guerra Mundial; enquistamiento de los partidos comunistas en sectas tan dogmáticas como ineficaces en los años de la «guerra fría»; dos largas décadas en las que los partidos comunistas de Italia y Francia no lograban establecer una estrategia política coherente, paralizados por su dependencia con la Unión Soviética. Sin el ejemplo soviético, difícilmente cabe imaginar el antisocialismo visceral de amplias capas de la clase trabajadora en algunos países europeos. Tampoco sin la

Unión Soviética resulta concebible una petrificación tan absoluta del marxismo, ni el enorme *lag* teórico que queda por salvar para acomodarlo a las necesidades de nuestro mundo. Es preciso tomar conciencia de esta penosísima historia, porque pudiera ser que en un futuro no tan lejano también la Unión Soviética constituya obstáculo considerable a la marcha del socialismo en Europa.

Pero aquí no se acaban los males. Considerar socialista al Estado soviético conlleva además dos riesgos graves: primero, el problema clave de la economía política de la transición tiende a reducirse a la mera nacionalización, es decir, el control estatal de los medios de producción. Si bien es cierto que el eurocomunismo ha roto con el dogma absoluto de las nacionalizaciones a todo trance y a cualquier precio, amarrado todavía a no pocos mitos del pasado, sigue incapaz de esbozar una economía para la transición. Segundo, se esfuma del horizonte el reto más amenazador de nuestro tiempo: la alternativa al capitalismo no es necesariamente el socialismo, de modo que cualquier régimen que no sea capitalista es ya por ello socialista. Caben en teoría muy distintas formaciones sociales —algunas son ya realidad, las que para abreviar llamamos burocráticas— que habiendo eliminado el capitalismo por completo nada tienen tampoco de socialistas.

CAPITULO V

LA CUESTION DEL MARXISMO

El socialismo pasa hoy por una grave crisis de identidad. Ha terminado por desmoronarse la creencia de que estábamos avanzando seguros hacia una sociedad socialista, según el modelo occidental o el soviético. Los socialismos europeos, con la generalización de la crisis económica, han llegado al límite de sus posibilidades: han perdido el poder, como en Suecia o en Gran Bretaña, o donde se mantienen, como en la Alemania Federal, han abandonado hasta el más tímido reformismo. El modelo soviético, por su parte, no resulta creíble ni siquiera para los partidos comunistas, que se apresuran a marcar sus distancias. Nos interesa su estudio por los problemas teóricos que plantea y sobre todo como detectador de los riesgos y peligros que pueden ocultarse en un modelo socialista, pero de ningún modo como un ejemplo a seguir.

El socialismo sólo puede revivir si se cuestiona radicalmente a la búsqueda de nuevos caminos para realizar cada vez más su anhelo de libertad y de igualdad, convencido que «donde no existe la igualdad la libertad es una farsa». Pero para poder cuestionarse radicalmente es preciso librarse tanto de la camisa de fuerza que le impone el marxismo como del estatismo integrador de las socialdemocracias.

Este capítulo se ocupa de la primera tarea, argumentando a favor de tres tesis cuya aceptación me parece el supuesto mínimo para salir del atolladero en que se encuentra el socialismo: 1. Hay que distinguir nítidamente entre socialismo y marxismo. 2. La crisis por la que pasa el socialismo en la Europa de hoy está en relación con la crisis actual del marxismo, aun-

que la primera no se agote en la segunda. 3. La formulación de una política socialista exige desprenderse de algunas tesis centrales del marxismo que es preciso denunciar como falsas.

1. El socialismo no es idéntico a marxismo

El concepto de socialismo es genérico e incluye al marxismo como una forma específica de entender el socialismo. En principio no cabe la menor duda de que el socialismo, como corriente ideológica, social y política de la Europa contemporánea, tiene precedentes muy anteriores a Marx —pueden retrotraerse hasta la antigüedad clásica—, pero también coexisten con Marx distintas tendencias socialistas que desde luego no se agotan ni quedan obsoletas después del gigantesco esfuerzo creador de Marx y Engels. Desde los fabianos al intento de fundamentación de un socialismo cristiano, de Proudhon y Bakunin a las modernas corrientes libertarias, del anarquismo al sindicalismo, muy variada es la gama de posiciones que hay que subsumir bajo este concepto, cuyo único rasgo definitorio es su oposición a una sociedad basada en la propiedad privada de los bienes de producción. Este sí que es un elemento diferenciador esencial: un «socialismo» que aceptase la propiedad privada de los bienes de producción, nada tiene ya de socialista.

Identificar socialismo con marxismo es el acto que define justamente a los marxistas. Esta problemática identificación se remonta a Engels. «Socialismo utópico» sería aquél que no coincide con los supuestos y contenidos doctrinales del «socialismo científico» que Marx y Engels fundaron. En rigor, sólo se puede llamar marxista el que acepta esta identificación, que en el movimiento obrero predominó sólo en un determinado período —1890 a 1930— y exclusivamente en dos países: la Alemania imperial y la Rusia zarista. Dos imperios que tuvieron en común un rápido proceso de industrialización, el primero, desde luego, con una intensidad incomparablemente mayor, sin haber resuelto ambos la cuestión de la «revolución burguesa». En cambio, en Inglaterra, el marxismo no penetró nunca en el movimiento obrero, justamente el más viejo de Europa. Tampoco caló en Escandinavia. En Francia e Italia, el marxismo adquirió verdadera significación después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los partidos comunistas lo habían solidificado en su forma estalinista. En España, que hasta la guerra civil contó con una clase obrera muy politizada y militante, no surgió curiosamente ningún marxista digno de mención. El nivel teórico del

movimiento obrero español, también hay que decirlo, fue y sigue siendo escandalosamente bajo.

No debe, por tanto, identificarse socialismo con marxismo —prejuicio específicamente marxista—, sino que, al contrario, hay que subrayar tanto su no identificación real como la dialéctica marxismo y no-marxismo que constituye al movimiento obrero europeo. Precisamente, en base a esta dialéctica, hemos ensayado en el primer capítulo una primera periodización del socialismo: *a)* socialismo anterior a Marx; *b)* socialismo de clara influencia marxista, y *c)* socialismo posmarxista, que en parte recoge tradiciones que nunca había eliminado por completo el marxismo preponderante.

Además, conviene advertir que la relación utopía-ciencia es mucho más compleja y fructífera de lo que pone de manifiesto dilema tan simplificador: ciencia frente a utopía. En ningún caso puede tratarse de elegir entre la una y la otra, sino que ambos conceptos lo son en un contexto cultural y socioeconómico determinados que el devenir histórico transforma continuamente. Lo que en un cierto contexto parece utópico, en otro puede haberse convertido en realidad o estar a punto de serlo. También lo que se define como «ciencia» en una sociedad y en un momento preciso depende de muchas variables históricas. No reconocerlo así es caer en el «cientificismo» que implica el concebir la ciencia dominante en un tiempo como el modelo único y definitivo de ciencia. En la ambigüedad del concepto de ciencia que caracteriza a los fundadores del «socialismo científico» —sobre todo Engels, el verdadero artífice de esta denominación, se mueve en un horizonte teñido de positivismo— subyace uno de los elementos que permitieron su fácil dogmatización.

Tildar de «utópico» todo pensamiento socialista no marxista que apareció antes o al mismo tiempo que el de Marx, y de «pequeño-burgués», si se desarrolló después, es aceptar sin la menor crítica un supuesto básico del marxismo, pero por ello no menos cuestionable, a saber, el carácter «científico» en exclusividad de la obra de Marx y de los que de él se reclaman, cientificismo del que se deriva la tentación a petrificarlo en una ortodoxia escolástica. Lo que no cabe en su «paradigma científico» o en sus «supuestos básicos» sería por principio utópico o reaccionario. No es poca la responsabilidad de Lenin en esta dogmatización, refiriéndose a menudo al marxismo como la «teoría correcta» que estaría en la base de todo movimiento obrero auténticamente revolucionario.

Se comprende que al postular una separación clara entre

socialismo y marxismo, insistiendo en lo que, por otro lado, la historia del pensamiento socialista muestra como evidente, a saber, que no todos los socialistas no marxistas son utópicos por definición, ni los marxistas poseen el monopolio de la ciencia, los recelos en el campo socialista sean grandes y los aplausos vengan de las clases dominantes. ¿Acaso la derecha española no se pasa el día entero predicando las ventajas de un socialismo no marxista? Se comprenden los recelos de los socialistas y los aplausos de la derecha porque la experiencia histórica de la socialdemocracia europea consiste, justamente, en irse desprendiendo poco a poco del marxismo, para terminar lanzando por la borda al mismo socialismo.

La manera de desprenderse de Marx, de criticar el marxismo, propia de la derecha, implica retroceder a posiciones premarxistas. El capitalismo se presenta como el orden económico consustancial con un régimen de libertad como la única forma racional de economía que conjuga a la vez un alto índice de crecimiento con un bienestar generalizado. No es el momento de insistir en los enormes costos sociales del sistema, ni, sobre todo, en el monopolio de poder, cabalmente antidemocrático, que se reservan los propietarios de los bienes de producción. Los socialistas antes y después de Marx rechazaron y rechazan el capitalismo, que consideran una forma histórica de producción condenada a desaparecer. Lo que ya varían mucho son las razones para repudiarlo —morales, históricas inmanentes—, los pronósticos sobre alternativas posibles, así como las coordenadas tácticas fundamentales para lograr una sociedad auténticamente democrática, que es lo que, en fin de cuentas, entendemos por socialismo. La crítica del marxismo desde el socialismo hay que diferenciarla claramente de la crítica del marxismo desde la derecha. Ya no se puede aceptar el chantaje de que siendo la derecha antimarxista —y cuanto más derecha más furiosamente antimarxista—, todo distanciamiento crítico de Marx o del marxismo revelaría su carácter reaccionario.

2. Crisis del socialismo y crisis del marxismo

La radicalidad de la crisis por la que pasa el socialismo se manifiesta de dos maneras sólo aparentemente contradictorias: por un lado, en la eliminación sistemática de contenidos marxistas, que ha culminado en un socialdemocratismo que a duras penas puede ya diferenciarse de un liberalismo con ciertos ribetes sociales y progresistas; por otro, en el mantenimiento de

un marxismo retórico y harto aguado —empeñarse en una política cabalmente marxista es ilusorio en cuanto sus supuestos fundamentales han sido falsificados por el ulterior desarrollo histórico— que impide una política auténticamente socialista, acoplada a los condicionamientos específicos de nuestro mundo. Entre un socialdemocratismo vergonzante y un marxismo vocinglero, apenas queda espacio para plantear una alternativa socialista. Lo que importa subrayar, a pesar de los malentendidos que a menudo levanta esta observación, es la correlación y complementariedad de ambas posiciones marxistas y socialdemócratas frente a una política de verdad socialista.

La crisis actual del socialismo está vinculada a la crisis del marxismo. Tanto su eliminación como su aceptación retórica o dogmática conducen a un callejón sin salida. Negar el marxismo para redescubrir las virtudes de la sociedad industrial moderna —eufemismo para decir capitalismo avanzado— y de la democracia liberal y representativa —estructura política propia del capitalismo— implica una aproximación, casi al límite de la identificación, con la derecha en el poder. Aferrarse al marxismo como único puerto de salvación es dar la espalda a la realidad, repitiendo consignas que la historia de este siglo ha mostrado mil veces su inanidad —aspirar a la unidad de la clase obrera como requisito para tomar el poder— o su contenido reaccionario —el partido burocrático como vanguardia de la clase obrera.

Ha habido distintas causas de la crisis del marxismo y distintas respuestas a estas crisis. En nuestros días, la crisis del marxismo es consecuencia de la crisis y ulterior pulverización de los dos revisionismos marxistas que consiguieron una implantación profunda en el movimiento obrero: por un lado, la socialdemocracia alemana; por otro, la socialdemocracia rusa en su rama bolchevique. Merece la pena estudiar con detalle por qué el marxismo prácticamente sólo encontró audiencia en la Alemania imperial y la Rusia zarista y por qué precisamente en estos dos países, en los que el marxismo consiguió implantarse en la clase obrera, ha sido arrancado de manera tan violenta. En la Unión Soviética, el estalinismo eliminó brutalmente cualquier posibilidad de desarrollo del marxismo, convirtiéndolo en la ideología legitimadora de las nuevas relaciones de poder. En Alemania, primero el nazismo y luego la experiencia estalinista en la zona de ocupación soviética, erradicaron de la clase obrera hasta el último residuo de marxismo. Destruidos violentamente los dos movimientos obreros en los que caló hondo el marxismo, en los demás países europeos la clase obrera o

bien se mantuvo inmune al marxismo, o bien no conoció más que su caricatura estalinista y las correspondientes reacciones puristas de pequeños grupos o sectas. Hay que dejar constancia del hecho, en sí harto significativo, de que hoy en Europa no existe un partido auténticamente marxista que llegue a la clase obrera.

El marxismo, entendido como la asimilación de postulados básicos de Marx por un movimiento obrero de peso, es en Europa una reliquia del pasado. Tuvo su auge en el período que va de 1890 a 1930, pero reducido exclusivamente a dos países: Alemania y Rusia. Sólo en estos dos países y en este período cabe nombrar a algunos marxistas que supieron combinar creación teórica y praxis política, asimilando la experiencia de un movimiento obrero con el que se sintieron plenamente identificados: Kautsky, Luxemburg, Hilferding, Plejánov, Lenin, Trostky. Prueba de esta unidad creadora de la teoría y de la praxis son algunos estudios económicos verdaderamente significativos: *La cuestión agraria*, de Kautsky; *El desarrollo del capitalismo en Rusia*, de Lenin; *El capital financiero*, de Hilferding; *La acumulación del capital*, de Luxemburg.

Sin conexión con el movimiento obrero, los teóricos marxistas que cabe mencionar a partir de 1945 —Adorno, Bloch, Marcuse, Della Volpe, Lefèbvre, Sartre, Althusser, Coletti— son todos profesores de Filosofía, sin vinculación directa con la praxis política, todo lo más con un carné de un partido político en el bolsillo. La separación total de la teoría y de la práctica ratifica la desaparición de un movimiento obrero marxista. Mientras que de la teoría se encargan hoy los profesores universitarios, la práctica es competencia exclusiva de líderes burócratas, aferrados al pragmatismo más a ras de suelo. No deja de ser significativo el que el marxismo contemporáneo produzca libros de filosofía, de crítica literaria o de arte, pero en los últimos cincuenta años ninguna obra económica de mediana consideración.

Importa diferenciar el pensamiento de Marx, que constituye por sí un campo enorme de investigación, que ocupa al marxólogo en particular y al científico social en general del marxismo como el conjunto de ideas motrices provinientes más o menos directamente de Marx, que forman el sustrato ideológico de un movimiento social. El marxólogo se ocupa del pensamiento de Marx, estudiando sus antecedentes, el contexto social e ideológico en que se desenvolvió, las distintas etapas de su evolución, así como sus continuidades y rupturas. Los marxistas, en cambio, no recurren a Marx más que para confirmar su propia in-

terpretación, como si se tratase de la única genuina y auténtica, con el fin de descartar los demás marxismos concurrentes.

Si por marxismo entendemos las distintas formas de operar socialmente que han tenido distintos aspectos de la obra de Marx, entonces hay que concluir que este concepto es todo menos unívoco. En distintas épocas o en distintos grupos o movimientos sociales, marxismo significa muy diferentes cosas. Marxista puede llamarse hoy un estudiante o un obrero metalúrgico de la Europa occidental y marxista se llama un funcionario soviético, pero es obvio que los tres entienden cosas muy diferentes por marxismo. Es su inserción en un determinado medio social y la forma que tiene este medio de asimilar algunos aspectos de la obra de Marx lo que, en último término, decide su contenido. Por eso cabe muy bien no haber leído una sola línea de Marx y considerarse marxista.

Cada uno de estos marxismos pretende ser el único auténtico, denunciando a los concurrentes como revisionismos intolerables. Dada la pluralidad de marxismos, el que se llama marxista está obligado a especificar de qué marxismo se trata, es decir, a criticar las otras formas como desviacionistas o burdas falsificaciones, presentándose a sí mismo como el único marxismo genuino en las circunstancias dadas. Pero, ¿cuál puede ser este marxismo genuino? La mera reproducción dogmática del pensamiento de Marx, tomado al pie de la letra, puede servir a la hora de hacer arqueología del saber marxista, pero no tiene ninguna operatividad práctica. En cambio, una elaboración de determinados puntos de vista marxistas, acoplados a las condiciones de la realidad, puede tener una cierta operatividad, pero implica necesariamente una revisión profunda del pensamiento de Marx sobre la que cabe preguntarse qué tiene que ver ya con el pensamiento originario.

La crisis actual del marxismo se manifiesta en una situación, desde sus supuestos, harto paradójica: por un lado, ha sido arrancado violentamente en los dos países europeos en que caló hondo, sin lograr extenderse significativamente en los demás. Difícilmente puede afirmarse que el marxismo importe hoy demasiado a la clase obrera europea; en los países en que el estalinismo alcanzó cierto arraigo, el eurocomunismo lo retrotrae a formas claramente socialdemócratas. Por otro, resulta innegable que la obra de Marx ha ido ganando audiencia en los medios intelectuales y académicos. La recepción de la obra de Marx en las ciencias sociales sucedió mucho más tarde que su asimilación por algunos movimientos obreros, pero ha tenido un carácter más universal. No existe científico social que no

haya sido influido de algún modo por Marx. Seguimos moviéndonos en el mismo paradigma científico, tanto si lo aceptamos como si lo rechazamos. No pocos conceptos marxianos se han convertido en lugares comunes en las ciencias sociales, y son fácilmente detectables hasta en aquellos que se muestran más críticos del revolucionario renano.

Aunque no tengan demasiado atractivo los marxismos que todavía colean en el mundo, la crítica socialista de la obra de Marx sigue siendo una de las fuentes vivas del pensamiento socialista. En la actual coyuntura de desmoronamiento de tanto viejo mito obrero, sólo cabe concebir y llevar a la práctica una estrategia socialista si se empieza por reconocer los hechos tal como son y se limpia el terreno de conceptos y postulados residuales marxistas que hasta ahora no han producido sino obcecaciones que la clase obrera ha pagado a muy alto precio, o manipulaciones burocráticas, en rigor no menos costosas. La invitación a enterrar a los marxismos a la hora de definir un socialismo para nuestro tiempo presupone una relectura crítica de la obra de Marx. Sólo se supera lo que se conoce a fondo, y Marx en España continúa siendo el gran desconocido.

3. El esquema marxista

Algunos supuestos fundamentales del marxismo, tal como fueron asimilados por el movimiento obrero, se revelan, a la altura de nuestra experiencia histórica, como obstáculos que bloquean una política socialista. Desde luego que las tesis centrales del marxismo, tal como encarnaron en el movimiento obrero, provienen de una lectura demasiado simplista de Marx. No es cuestión que aquí incumba el discernir hasta qué punto el marxismo que caló en los partidos obreros corresponde a una interpretación diferenciada de la obra de Marx; lo que ahora importa es criticar algunas tesis marxistas que gozaron de gran audiencia en la clase obrera y que, en España, siguen creando considerable confusión. Nadie duda que el pensamiento marxista no se agota en el *Anti-Dühring*, pero han sido muchas las generaciones de marxistas que no han conocido más que este libro de divulgación, tan simplificador como fácilmente polémico.

Dos supuestos «marxistas» impiden la formulación y puesta en práctica de una estrategia socialista:

1. *Las contradicciones internas del capitalismo llevan indefectiblemente a la quiebra segura del sistema, a su crisis general y definitiva.* La introducción de la máquina en el proceso productivo —desarrollo de las fuerzas productivas— implica, por un lado, la socialización de la producción, es decir, que deja de realizarse individualmente o en esfera familiar para ubicarse en la fábrica, nueva unidad social de producción, que se caracteriza por su organización racional con el fin exclusivo de aumentar la producción; por otro, al mantenerse la propiedad privada de los bienes de producción, la mayor parte de los productores, antes dueños de las herramientas y del producto de su trabajo, se ven proletarizados, es decir, obligados a vender su fuerza de trabajo al propietario del capital. La competencia implacable entre las distintas unidades de producción exige un perfeccionamiento continuo del utillaje, una modernización acelerada de la tecnología —empresa que no se moderniza, mejorando el índice de productividad, quiebra—, lo que implica, por un lado, una rápida concentración del capital; por otro, un desalojo continuo de mano de obra, obligada a marchar a otra rama o a otra región: la migración entre sectores productivos y zonas geográficas es el destino de la clase obrera, amenazada siempre con verse repelida a la masa de parados, «ejército industrial de reserva».

La socialización de la producción en cada vez menor número de empresas, pero también más grandes y mejor racionalizadas, manteniéndose la «anarquía social» de la producción en su conjunto, origina inevitables y periódicas crisis de superproducción. Las crisis aceleran el proceso de concentración del capital, pero también el paro o la migración. La contradicción básica del capitalismo —producción social y apropiación individual de lo producido— en las condiciones de una economía competitiva se resuelve con la concentración progresiva del capital, que no puede subsistir más que organizándose, cada vez a mayor escala: sociedades anónimas, trusts, consorcios, para terminar pasando al control del Estado. La estatalización de la economía resulta forzosamente de las contradicciones del capitalismo. El paso de la producción a manos del Estado es uno de los factores objetivos que posibilitarían el socialismo.

Mientras dure la propiedad privada de los bienes de producción, la socialización del proceso productivo arrastra una proletarización de las distintas clases no dominantes que culmina en la polarización de dos clases antagónicas: la inmensa mayoría proletaria y la cada vez más exigua minoría burguesa. El resultado más palpable del desarrollo capitalista sería la *homogeneización de la sociedad* en una enorme masa proletaria, en

paro, periódicamente en paro según los ciclos de crisis, o explotada en el proceso productivo, que el paro envolvente permite mantener con salarios mínimos, temerosa siempre de pasar a integrar el ejército de parados. El desenlace previsible de esta polarización irremediable consiste en que, organizado políticamente el proletariado, logre acceder al poder del Estado, para desde él llevar a cabo el único acto revolucionario de clase: arrancar a la burguesía la propiedad de los bienes de producción, ya muy concentrados y la mayor parte bajo control estatal, para convertirlos en «propiedad pública». Eliminada la propiedad privada de los bienes de producción, desaparece la contradicción fundamental del capitalismo, desplegándose libremente el carácter social de la producción, lo que permite por vez primera organizarla con arreglo a un *plan* que parta de las necesidades humanas. El proceso de homogeneización, de igualación social ha llegado así a su punto final: sin clases sociales desaparece la base real del poder político y del Estado. La humanidad empieza su verdadera historia en libertad.

2. *Mientras dominen relaciones capitalistas de producción y consecuentemente el aparato del Estado esté en manos de la burguesía, no cabe una política de transformación socialista.* Cualquier alternativa parcial al sistema dominante será repelida o asimilada, pero de ningún modo conseguirá transformarlo. Intentar con experiencias limitadas o con transformaciones graduales cambiar las leyes objetivas del desarrollo capitalista es, por definición, lo utópico. En el interior del capitalismo no pueden desarrollarse modos de producción no capitalista: si existen, tendrán una significación marginal y complementaria. En cambio, en el modo de producción feudal la burguesía pudo desarrollarse paulatinamente como clase, porque tenía su propia base económica. Resulta inconcebible dentro del capitalismo el mismo proceso de consolidación y avance del proletariado, porque, como clase, no defiende intereses particulares ni tiene una base económica propia para subsistir con cierta independencia. El proletariado lo es, como negación desposeída, simple fuerza de trabajo en el proceso productivo. Si adquiere otra posición deja de ser proletariado, y mientras sea proletariado su interés específico de clase se confunde con el genérico humano: acabar con toda sociedad de clases. El proletariado es la última clase ascendente de la historia, porque no tiene ninguna otra clase sometida a la que explotar; su emancipación es a la vez la emancipación de toda la humanidad. No cabe, por tanto, que se libere gradualmente: mientras existan rela-

ciones capitalistas de producción será la clase explotada, y cuando se produzca el acto revolucionario de su liberación, es decir, la conversión en propiedad pública de los bienes de producción, dejará de existir como clase con intereses particulares, confundiéndose con la humanidad liberada. Unicamente de manera revolucionaria cabe la liberación del proletariado, siendo en sí utópica o reaccionaria la creencia de que el proletariado pueda emanciparse gradualmente.

Estos dos supuestos básicos —la indefectible y pronta crisis definitiva del capitalismo y la imposibilidad de modificarlo paulatinamente desde dentro— fascinaron a buena parte del movimiento obrero, creyendo que se trataba de «verdades» que habían evidenciado la «ciencia». La originalidad del marxismo provenía, justamente, de haber trasladado el socialismo del plano del «deber ser» —«idealista» resulta cualquier elucubración sobre una sociedad distinta más justa y más humana, así como cualquier intento de mejora parcial— al de la realidad objetiva, al plano del «ser». El socialismo se concibe como el producto necesario de la dinámica contradictoria del capitalismo, que en su despliegue crea las condiciones objetivas para su realización: desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas y, sobre todo, crecimiento y fortalecimiento de una clase mayoritaria y homogénea, el proletariado, destinado a hacerse dueño del proceso productivo. Con sus contradicciones, el capitalismo crea la clase capaz de superarlo.

Partiendo de estos supuestos, la estrategia socialista se concreta en dos claramente diferenciadas, que corresponden a las *dos etapas* en que se divide el proceso: antes y después de la toma del poder por la clase obrera. En la etapa primera, anterior y preparatoria a la conquista revolucionaria del Estado, una política cabalmente socialista ha de centrarse en la organización política de la clase obrera, es decir, en la transformación de la «clase en sí» en «clase para sí». La unidad política de la clase obrera, su integración en el partido de clase, es el objetivo primordial de este período. La base real de esta unidad se encuentra en la homogeneización social que conlleva la proletarización de las clases intermedias con el desarrollo del capitalismo. Una clase obrera pasivamente apolítica o dividida en distintas fracciones que se combaten entre sí es signo claro de que todavía no están maduros los factores objetivos y subjetivos para la toma del poder. La segunda etapa se inicia con la toma del poder por el proletariado, cuyo primer acto consiste en la eliminación de la propiedad privada de los bienes de producción, lo que permite planificar la producción en su conjun-

to, de acuerdo con las necesidades sentidas mayoritariamente. Socialismo es entonces planificación democrática —definida y controlada por la mayoría— del proceso productivo, en el que cada uno participa según su capacidad y recibe según su trabajo.

El esquema expuesto no deja de ser fascinante por su brillantez y coherencia lógica; lo grave es que tiene que ver muy poco con la realidad. Hace más de setenta años que en la práctica —aunque manteniéndolo retóricamente para los discursos de los domingos— lo han abandonado hasta los partidos que se llamaban o se llaman marxistas. Donde ha subsistido más tiempo ha sido gracias a las correcciones de Lenin, que traslada el sujeto histórico de la clase, organizada políticamente, al «partido de revolucionarios», como vanguardia y motor de la clase. Pero éste ya es otro cantar, con consecuencias, como se ha comprobado en la práctica, muy alejadas del socialismo.

4. Elementos para una crítica del marxismo

Desde la caída del Imperio romano sabemos que nuestras civilizaciones son mortales. Cualquier formación social está condenada a desaparecer, y el capitalismo no va a ser, desde luego, una excepción. No fue escaso el mérito de Marx al mostrar la historicidad de un sistema que se pretendía expresión misma de la racionalidad intemporal; gigantesco el esfuerzo para poner de manifiesto las contradicciones internas que un día terminarían por estrangularlo. Pero su verdadera fascinación provino de haber «demostrado científicamente» el fin ineludible de un orden social que justamente estaba dando sus balbuceos en un futuro lejano. Marx y Engels anunciaron en varias ocasiones la crisis inminente y definitiva del capitalismo. Este convencimiento sostiene toda su estrategia, y si hoy se revela falso —aunque no faltan los fieles seguidores que continúan defendiendo cada crisis como la definitiva, e incluso los hay que hablan de la «crisis general y definitiva del capitalismo» nada menos que desde 1914— todos los planteamientos tácticos del marxismo se caen por su base. ¿Qué hacer, si el capitalismo tuviera cuerda para mucho decenios, incluso para un par de siglos? Error tan de bulto se debe, sin duda, a conceptos y análisis demasiado ambiguos, que obliga a una revisión de todo el edificio teórico a la búsqueda de sus fallos. No tiene demasiado sentido seguir creyendo en la «verdad» de la teoría cuando la realidad no avala los pronósticos que de ella se derivan.

El indudable proceso de concentración del capital y la inter-

vención creciente del Estado en la esfera económica no se traducen en un proceso correspondiente de proletarización y de paro o, mejor, sólo lo implican en abstracto: cierto que más del 80 por 100 de la población activa en un país capitalista altamente desarrollado es asalariada, es decir, vive de la venta de su trabajo personal, así como una parte creciente de la población se ve desalojada del proceso directamente productivo —la clase obrera industrial tiende a decrecer, una vez alcanzado un determinado nivel de desarrollo—; pero estos fenómenos, previstos en abstracto por Marx, tienen una significación concreta muy distinta de la que les dio. Con esta proletarización sólo en el sentido de vivir de un salario y no del beneficio del capital o de la renta de la tierra no se origina un proceso de homogeneización social, con ingresos igualmente bajos y semejantes condiciones de trabajo y formas de vida. En el capitalismo desarrollado, la escala de sueldos y de salarios varía mucho según la rama de la producción o el tipo de trabajo que se realice, así como muy distintas son preparación, mentalidad y formas de vida: de un sueldo vive el funcionario público y el ingeniero de la empresa, pero sólo en un sentido genérico muy lato pueden incluirse en el mismo grupo que el trabajador industrial, a la vez que éste se distingue del subproletariado urbano o campesino. También la eliminación de oficios y de puestos de trabajo que conlleva el desarrollo tecnológico viene en parte compensada por la profesión de nuevos oficios y profesiones antes inexistentes. Si es cierto que el desarrollo tecnológico disminuye la cifra de población ocupada directamente en la producción, este mismo proceso permite un crecimiento considerable del sector terciario, cajón de sastre que recoge las más variadas actividades. Tampoco la concentración del capital y de la industria ha suprimido a la pequeña empresa, como se pronosticó hace un siglo, aunque su posición sea cada vez de mayor dependencia, cuando no está obligada a desplazarse de una rama a otra, manteniéndose sobre todo competitiva en el sector de servicios.

Lo que importa retener, en todo caso, es que el desarrollo del capitalismo no ha traído consigo un proceso general de homogeneización proletaria, sino que, al contrario, resulta patente un incremento de la complejidad social, que permite nuevos equilibrios y acomodos. No hay razón para pensar que el capitalismo ha llegado al límite de sus posibilidades, a pesar que el despliegue de las fuerzas productivas supera con mucho lo concebible en la pasada centuria. La noción misma de límite insuperable no deja de ser ambigua, así como difícil de concretar en qué punto la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de pro-

ducción supone la paralización o el salto cualitativo del sistema. Este tipo de conceptos y de dialéctica sirve más para racionalizar la historia pasada que para hacer pronósticos válidos para el porvenir. Hasta ahora el capitalismo no ha sucumbido a ninguna de sus enormes contradicciones, logrando siempre un nuevo punto de equilibrio, aunque inestable y con altos costos sociales: ha dado prueba de una sorprendente dinámica, capacidad de acomodo y de innovación, pero también una enorme fuerza destructiva de lo primariamente humano y del entorno ecológico. Con los datos actuales parece más verosímil pronosticar el fin de la humanidad o del planeta que el del sistema. En el fondo, lo que hay que reprochar a Marx es su inmoderado optimismo, la fe progresista decimonónica de que lo negativo comporta lo positivo y que el mismo proceso que crea los males produce el remedio para curarlos.

Si el capitalismo a corto plazo no marcha hacia su crisis definitiva, ni se ha producido la homogeneización social que permitiría la organización unitaria del proletariado, la estrategia que el marxismo definió para la primera etapa —la organización unitaria del proletariado— carece de toda base real. Conseguir la unidad política de la clase obrera es el espejismo tras el que ha corrido y corre parte del movimiento obrero, comprobando siempre que se le escapa de las manos. La mayor parte de la clase no se deja organizar, una pequeña se inclina por el orden establecido y las partes concientizadas se fraccionan en distintos partidos que se combaten entre sí. La complejidad de la moderna sociedad industrial permite muy diferentes respuestas aun en esa inmensa mayoría que forman los asalariados.

En una sociedad de complejidad creciente, en la que los distintos grupos, sectores, capas sociales, profesiones, regiones, ciudades, etc., tienen intereses específicos, imposibles de subsumir en un denominador común unitario, no queda otro «interés general» que el individualmente egoísta de cada cual. En el capitalismo, la «voluntad general» se degrada a la voluntad egoísta y particular de cada uno. La derecha, salvo en crisis extremas, puede siempre movilizar una mayoría que se aferra a lo dado y que sólo quiere que las cosas queden como están. Existe la aprensión, que la experiencia del envejecer confirma, que los cambios equivalen a empeoramiento. Pero, sobre todo, una estrategia de cambio no admite un planteamiento tan general como una de defensa del *statu quo*. Cada cosa puede quedarse en donde está, pero no puede cambiar en el mismo sentido. El cambio en abstracto dice bien poco; cuando se especifica en qué dirección deben cambiar las cosas, hay que mencio-

nar la propia de cada una. Los cambios particulares que interesan a un grupo son justamente los que perjudican al otro. Una política de cambio es, en principio, más conflictiva que una de mantención de lo establecido. De la misma manera que el «proletariado» no forma un grupo homogéneo de intereses más que en la abstracción de definirse como no propietario de los bienes de producción, así su eliminación no constituye un objetivo unitario más que en el mismo grado de abstracción. Y la política es concreta o está condenada al fracaso.

El desarrollo del capitalismo no ha traído consigo la polaridad homogeneizadora que la teoría marxista había enunciado, sino una complejidad creciente de clases, sectores y grupos sociales. Incluso dentro de la clase obrera industrial en su sentido estricto se comprueba tanto una disminución respecto a la población total al llegar a un determinado grado de desarrollo como una mayor complejidad, diferenciándose distintos sectores con caracteres específicos. Hay que denunciar «la unidad política de la clase obrera» como un mito al servicio de la estructura burocrático-centralista de los partidos. La unificación de la clase se revela, en último término, como la centralización del poder que dice representarla. Una sola clase, un solo partido, un partido fuerte y disciplinado, capaz de realizar un solo acto revolucionario: la supresión de la propiedad de los bienes de producción. He aquí la ideología de la nueva burocracia colectivista.

Con el mito de la unidad de clase también se derrumba el segundo mito marxista: basta la eliminación de la propiedad privada de los bienes de producción para que automáticamente desaparezcan todas las contradicciones de clase, todas las formas de dominación y de opresión. La experiencia histórica de este siglo ha puesto de manifiesto lo que ya habían denunciado anteriormente los críticos más acérrimos del socialismo: la posibilidad de que, desaparecida la propiedad privada, la economía, lejos de socializarse, la controle el aparato burocrático del Estado para su personal beneficio. Riesgo que no cabe minimizar ni cargar sin más sobre las espaldas. Una estrategia socialista se define frente al capitalismo, pero también frente al colectivismo burocrático.

CAPITULO VI

EL CONCEPTO DE DEMOCRATIZACION

Hemos insistido en la crítica del marxismo por razones coyunturales. En un país como el nuestro, sin la tradición filosófica, científica y política que recogió el pensamiento de Marx, el marxismo tiende a reducirse a unas cuantas fórmulas mágicas, evidentemente falsas en su simplicidad. Desde luego que cabe una recepción más fructífera y diferenciada del pensamiento de Marx, pero esta labor se inserta todavía en el futuro. Una discusión científica y responsable en torno al pensamiento de Marx es algo en España todavía por venir: aún tenemos que salvar unas cuantas etapas, tanto en la organización del saber científico como en el desarrollo del movimiento obrero. Todo esto no es óbice para que nadie medianamente informado y de buena voluntad pueda ignorar a estas alturas lo que significa Marx a la hora de un análisis científico de la sociedad capitalista. Lo que afirmamos no más es que el marxismo residual que pervive en el movimiento obrero español constituye un pesado lastre que impide o dificulta grandemente el establecer una estrategia socialista acorde con los imperativos y posibilidades de nuestra situación.

Hoy urge la crítica del marxismo residual, estableciendo metas y métodos que rompan conscientemente con la tradición marxista del socialismo. No dudo que en un futuro no muy lejano tendremos que volver a Marx, a su crítica del capitalismo, para oponernos a las simplificaciones apologéticas de la sociedad capitalista en boca de algunos de los «socialistas» hoy más empeñados en combatir el dogmatismo marxista. Las simplificaciones mágicas no son exclusiva de los que se proclaman mar-

xistas; abundan asimismo entre los críticos del marxismo, tentados, como hemos visto, a tirar por la borda cualquier perspectiva socialista con el pretexto de que están limpiando el socialismo de todo contenido «ideológico» o «dogmático».

Este vaivén entre una simplificación dogmática del marxismo convertido en camisa de fuerza que sostiene al movimiento obrero en los baches más profundos —se comprende que en las largas décadas de la dictadura el socialismo español fuera proclive a congelarse en sus «esencias tradicionales»— y su renacimiento como fuente de nuevos conceptos y perspectivas de cambio revolucionario en los momentos de ascensión crítica de las masas populares pertenece a la ambigüedad constitutiva del pensamiento de Marx, que permite muy diferentes lecturas. Mientras exista una sociedad basada en el trabajo asalariado, el marxismo irá renaciendo, cual nueva ave fénix, una y otra vez de sus cenizas.

1. Democratización versus revolución

En los capítulos anteriores hemos centrado la crítica del marxismo en algunos pocos puntos fundamentales. A modo de recapitulación, fijemos la siguiente tesis: no es cierto que la propia dinámica del desarrollo capitalista cree las condiciones objetivas para el advenimiento del socialismo. No pensamos que el capitalismo sea eterno, como quieren sus defensores, pero son varios, con muy diferentes consecuencias, los modos concebibles de su desaparición. Al capitalismo pueden suceder distintas formaciones sociales —una de ellas, el colectivismo burocrático ya es plena realidad— y en ninguna dialéctica objetiva de la historia está escrito que el socialismo sea la única salida, o la más probable, del capitalismo. Conformémonos con decir que es simplemente la más deseable, pero ello implica establecer una estrategia coherente para conseguirlo, deshaciéndonos de cualquier forma de determinismo histórico, disfrazado de objetividad científica. El definir una estrategia socialista acoplada a nuestra situación histórica supone por lo pronto el replantear críticamente las relaciones entre fuerzas productivas y modo de producción, por un lado, y las llamadas «superestructuras» políticas e ideológicas, por otro. Una simplificación «materialista» de estas relaciones puede, hoy por hoy, cerrar el paso a cualquier alternativa socialista.

El corolario más importante que se deriva de esta tesis es el cuestionar el supuesto de que basta la eliminación de la propie-

dad privada de los bienes de producción para que automáticamente desaparezcan todas las contradicciones de clase y, con ellas, todas las formas de dominación y de opresión. La experiencia de nuestro siglo ha puesto de relieve los riesgos y los costos de una economía totalmente estatalizada, sin que por ello, antes al contrario, disminuya el grado de explotación y de opresión. La socialización de los bienes de producción, lejos de surgir de «un acto único revolucionario», para decirlo con palabras de Federico Engels, resulta de un largo proceso histórico en el que el tratamiento que recibe la propiedad privada de los bienes de producción puede y debe ser muy distinto según el sector económico de que se trate y el grado de concentración monopolista que haya alcanzado.

Lo que se pensó como un acto revolucionario se revela como un *largo proceso histórico* que además sólo indirectamente gira en torno a la socialización de los bienes de producción. Cierto que el concepto de socialismo implica una economía comunitaria al servicio de la comunidad, pero lo decisivo no es tanto la expropiación como el crear los requisitos sociales mínimos para su éxito, es decir, las pautas de conducta, el grado de desarrollo cultural y los órganos democráticos de gestión para que la producción pueda ser realmente comunitaria. Si se logra el control democrático de los grandes centros de poder económico, en los sectores en los que funciona la competencia y las posibilidades de concentración son limitadas, la propiedad privada puede resultar incluso compatible con los intereses mayoritarios por un largo tiempo.

Nadie niega el poder incontrolado que puede otorgar la propiedad privada de los bienes de producción, pero tampoco cabe ignorar la diversas de formas en que este poder se encarna en los distintos sectores económicos. En vez de partir de la generalización abstracta —eliminar la propiedad privada de *todos* los bienes de producción es el acto revolucionario por antonomasia—, lo decisivo es ir definiendo el distinto poder que otorga la posesión privada de los bienes de producción en relación con su eficacia en cada sector productivo, así como la correlación de fuerzas en litigio, conscientes de que cualquier paso hacia la colectivización exige previamente alternativas concretas de gestión democrática.

El problema clave del socialismo, tal como lo plantea el marxismo en el siglo XIX, consiste en la «toma del poder por la clase obrera, cuyo primer acto revolucionario es la nacionalización de los bienes de producción». Conseguido esto, lo demás se nos darían por añadidura. El problema clave del socialis-

mo contemporáneo no es tanto la expropiación de los bienes de producción como la concepción y puesta en práctica de una gestión democrática apropiada a cada sector productivo.

Los socialistas decimonónicos creyeron que, eliminada la propiedad privada de los bienes de producción, la organización democrática de la producción no ofrecería mayores dificultades. En último término, mientras dominasen relaciones capitalistas de producción, no sería posible concebir en concreto, ni mucho menos poner en práctica, modelos alternativos de organización: las «superestructuras» políticas e ideológicas dependerían de la «base productiva». Ahora bien, una vez modificada revolucionariamente las relaciones de producción, se desencadenaría una dinámica creadora de tal envergadura que los trabajadores, por fin en libertad, no sólo mantendrían en marcha la producción, sino que la desarrollarían vertiginosamente desaparecidas las contradicciones propias del capitalismo. Para los más cautos y realistas que no querían creer en la espontaneidad milagrosa de la simple desaparición de la propiedad privada se reconocía un período de transición en el que el Estado desempeñaría una función primordial de coordinación y planificación —dictadura del proletariado—, pero con la seguridad de que este poder, sin base económica propia, iría desapareciendo paulatinamente.

Hoy nadie que tenga la cabeza sobre los hombros puede creer bien en la espontaneidad creadora de las masas por la mera desaparición de la propiedad privada, bien en el carácter accidental y transitorio del nuevo poder del Estado. Abandonada la producción a la «espontaneidad creadora» de los trabajadores, asistiríamos a su rápido derrumbe, con la penuria y el caos social correspondientes, hasta que un nuevo poder dictatorial intentase de la manera más drástica la reconstrucción del viejo sistema productivo. En cambio, la producción en manos del Estado inaugura una nueva formación social —el colectivismo burocrático— cuyos directos beneficiarios son los detentadores del poder político. Una nacionalización repentina y revolucionaria de todos los bienes de producción conduce al caos y a la contrarrevolución, o bien inicia una nueva era de poder altamente centralizado en beneficio de la «clase política» que controla el Estado.

En base a la experiencia histórica de nuestro siglo, cabe cuestionar la ingenuidad revolucionaria de los clásicos socialistas. El problema para ellos consistía en llegar a la gran revolución en la que la clase obrera, organizada en un gran partido, con la conquista del poder político, llevaría a cabo la «expropiación

de los expropiadores». Las contradicciones crecientes del capitalismo y sus crisis periódicas, reportando cada vez mayor gravedad, constituían la garantía objetiva de que este gran día llegaría indefectiblemente. Hoy sabemos que todas estas expectativas que popularizó el marxismo no tienen el menor apoyo en la realidad. Por un lado, es más probable que el capitalismo acabe con el planeta —su capacidad de destrucción militar y ecológica supera lo concebible— que se derrumbe, abatido por sus propias contradicciones. Por otro, aún cuando el capitalismo desembocase en un colectivismo burocrático, en vez de haber avanzado hacia el socialismo, entendido como «asociación libre de hombres libres», pudiera incluso desaparecer del horizonte al usurpar esta denominación.

El problema clave del socialismo no consiste en llegar a ese gran acto revolucionario en el que de un plumazo se suprime la propiedad privada de los bienes de producción. Esta noción del acto revolucionario proviene de una abstracción cabalmente ahistórica. No se salta en un día de una etapa a la siguiente. La socialización de los bienes de producción es el logro final de la construcción del socialismo y, por tanto, la meta última de un largo proceso histórico, y no como ingenuamente se creyó en la pasada centuria, tomando el rábano por las hojas, el comienzo de la construcción del socialismo. Aquí se patentiza la diferencia abismal que separa el *socialismo democrático* contemporáneo, para el que la socialización de los bienes de producción es el fin de un largo proceso histórico, del *socialismo marxista*, para el que la socialización revolucionaria de los bienes de producción es el requisito fundamental para empezar una política de construcción socialista. Para el socialismo democrático, la socialización de los bienes de producción es el *fin* de un largo proceso de edificación socialista; para el socialismo marxista, el *inicio* y requisito fundamental para poder de verdad hacer política socialista.

Grandes son las diferencias de orden teórico y práctico que se derivan de concebir la socialización de los bienes de producción como meta final o como supuesto previo de una política socialista. En el primer caso, la socialización se incluye en un proceso más amplio, que exige un desarrollo paralelo de la mentalidad y formas de vida democráticas. El concepto clave que da cuenta de este proceso es el de *democratización*. En el segundo, se parte de negar la posibilidad de que, existiendo relaciones capitalistas de producción, puedan desarrollarse formas democráticas de convivencia: la democracia con el capitalismo únicamente podría ser «formal», sin calar lo más mínimo en la

sociedad y menos en el aparato de dominación de la clase dominante, el Estado. Para que un proceso auténtico de democratización pueda ponerse en marcha es preciso el que previamente la clase obrera conquiste el poder político y elimine revolucionariamente la propiedad privada de los bienes de producción. Desde esta perspectiva cabalmente marxista, el concepto clave es el de *revolución*. El marxismo es revolucionario o no es.

El concepto de democratización es en el socialismo democrático lo que el de revolución en el socialismo marxista: las nociones claves desde las que montar una práctica política. El marxismo vivo —existen también muy diversas formas vergonzantes y escleróticas— implica siempre una praxis revolucionaria. Desconfiad cuando alguien se llame marxista, pero reduzca la revolución a simple metáfora o la postergue a un futuro indefinido.

El socialismo moderno se desprendió del marxismo el día que dejó de creer que estaba a la vista el gran acto revolucionario consistente en la socialización masiva de los medios de producción. De esto hace ya casi un siglo. La experiencia soviética vino a confirmar lo poco deseable que era incluso una colectivización impuesta por el Estado. Los partidos socialistas europeos, cuando no mantuvieron una retórica marxista revolucionaria y una práctica por lo demás oportunista —así la socialdemocracia alemana antes de la Primera Guerra Mundial y el Partido Socialista francés en la IV República— terminaron por aceptar de hecho el orden social establecido, convirtiéndose en grupos de presión en favor de la población asalariada con menos cultura y recursos. Ya no se pretende en serio superar el capitalismo, sino simplemente compensar algunas de sus deficiencias e injusticias más lacerantes.

Ahora bien, como el funcionamiento y desarrollo del capitalismo exige una intervención creciente del Estado en la economía y en la política social entendida en su sentido más lato, la socialdemocracia, a la vez que se convierte en uno de los factores básicos de estabilización del sistema, resulta un elemento dinamizador y humanizador relativamente operante. Los socialdemócratas juzgan la sociedad capitalista no tan sólo desde sus propios valores —individualismo, eficacia, competencia—, sino también desde la libertad, la igualdad y la solidaridad que propugnan, ampliando así considerablemente la distancia crítica entre pretensión y realidad.

No se trata ahora de juzgar a la socialdemocracia europea —en español falta un estudio serio y objetivo sobre el tema—, sino tan sólo de diferenciarla conceptualmente del socialismo

democrático que, vinculado orgánicamente a los partidos socialistas o campeando por libre, se caracteriza por *su voluntad de superar al capitalismo a través de un proceso universal de democratización* que abarque las distintas instituciones sociales y económicas, privadas y públicas. Ahondar un poco en el concepto de democratización exige algunas puntualizaciones sobre el contenido genérico de democracia.

2. El doble concepto de democracia

El concepto de democracia parece claro y terminante: significa «gobierno del pueblo», «gobierno de todos», y en este sentido se opone tanto al de oligarquía, «gobierno de unos pocos», como al de monarquía, «gobierno de uno solo». Según el número de los que gobiernan, uno solo, una pequeña élite o todos sin excepción, es decir, el pueblo en su conjunto, hablamos de monarquía, oligarquía o democracia. Pero tan aparente claridad desaparece en cuanto se cuestiona la compatibilidad de «gobierno» y «todos». La noción de gobierno implica distinguir entre gobernantes que mandan y gobernados que obedecen. Si todos gobiernan, como supone el concepto de democracia, en realidad nadie gobierna. Lo que sobra entonces es el concepto de gobierno. El concepto de democracia, como el gobierno del pueblo, se revela como una contradicción imposible: donde hay gobierno, gobiernan siempre unos pocos; donde la democracia efectivamente existe y gobiernan todos, no gobierna nadie, es decir, no existe gobierno alguno y a este estado se llama anarquía.

Toda la problemática que plantea un concepto aparentemente tan claro como el de democracia gira en torno a la contradicción que lo constituye. La tentación inmediata consiste en librarse de la tensión conflictiva que supone tal contradicción, decidiéndose por uno de sus términos: gobierno sin democracia o democracia sin gobierno. Si todo gobierno es necesariamente minoritario y no se concibe la posibilidad de una sociedad mínimamente compleja sin gobierno, entonces hay que rechazar el concepto de democracia, concluyendo su imposibilidad manifiesta, o bien hay que ofrecer una nueva definición de democracia que haga compatible la noción de gobierno y de democracia. La segunda forma de resolver la contradicción consiste en afirmar el sentido originario de democracia como gobierno del pueblo, haciendo hincapié en que un tal gobierno implica la desaparación de todo gobierno. La contradicción en que consis-

te el concepto de democracia se resuelve en cuanto ésta se manifiesta y se denomina tal como realmente es: anarquía.

Tres son las respuestas posibles a la contradicción intrínseca en que consiste el concepto de democracia como poder del pueblo: 1. Negar rotundamente la posibilidad de un gobierno democrático. Todo gobierno es de una minoría y sirve a los intereses de una minoría, aunque se disfrace de democrático, es decir, de mayoritario, al servicio de la mayoría. 2. Redefinir el concepto de democracia, de modo que sea compatible con la noción de gobierno. 3. Identificar democracia con anarquía. Entre la primera y tercera posición existe una polaridad complementaria en torno a la imposibilidad o posibilidad deseable de una sociedad sin gobierno. Ambos constatan la incompatibilidad de gobierno y democracia, para concluir, los unos, la negación de la democracia; los otros, la negación del gobierno. En el desmontaje ideológico de las democracias existentes coinciden a menudo antidemócratas y anarquistas.

Podemos intentar deshacernos de la contradicción en que consiste la noción de democracia negando su posibilidad, identificándola con la anarquía o redefiniéndola de modo que no resulte incompatible gobierno y democracia. Pero también podemos mantener la contradicción que efectivamente implica el concepto clásico y originario de democracia, integrándola en la totalidad de su despliegue histórico. Si la democracia la entendemos como una *realidad definitiva y acabada*, enfocándola desde una dimensión ahistórica, entonces o bien tenemos que negarla como inexistente, o bien tenemos que redefinirla, aproximando pretensión y realidad. En cambio, si la democracia la concebimos como un *proceso*, la contradicción que la define, aunque bien pudiera ser insuperable, marca el ámbito y la dinámica de su desenvolvimiento. Cabe, por tanto, dos conceptos fundamentalmente distintos de democracia: *democracia como estado o realidad definitiva* y *democracia como proceso*. La discusión sobre la democracia gira hoy en torno a estos dos conceptos.

¿Qué dimensión temporal implica este hoy? ¿Desde cuándo compiten en Europa estos dos conceptos de democracia? ¿Qué función cumple esta duplicación? La democracia como proyecto político reaparece en el siglo XVIII en Francia. Jean-Jacques Rousseau es el pensador político que reintroduce el concepto clásico de democracia como gobierno del pueblo. El pensamiento democrático moderno tiene su representante más conspicuo en Rousseau; su primera experiencia política ocurre en la Revolución francesa: junto a un concepto burgués de libertad, Ro-

bespierre y luego Babeuf desarrollan uno democrático. La democracia como gobierno del pueblo renace en la Francia revolucionaria y en Francia tiene su asiento popular y su mayor desarrollo teórico hasta la Revolución de 1848.

Democracia supone la identidad de gobernados y gobernantes. Somos libres en cuanto nos damos las leyes que obedecemos. La libertad, entendida como autonomía responsable, es inconcebible sin la igualdad social. «Si se investiga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, que debe ser el fin de de todo sistema de legislación, se encontrará que se reduce a estos dos objetos principales: la libertad y la igualdad.» Sin igualdad no puede crecer la libertad. Una democracia sólo puede existir si desaparecen las grandes diferencias sociales, si la riqueza está de tal forma repartida «que ningún ciudadano sea tan opulento para poder comprar a otro y nadie tan pobre para estar obligado a venderse» (J.-J. Rousseau, *Contrato social,* 2, 11). La desaparición del trabajo asalariado constituye la condición que hace posible la libertad y la igualdad, fundamentos de la democracia.

Hasta mediados del siglo XIX, el concepto de democracia es unívoco y tajante: significa gobierno del pueblo por el pueblo, desde el supuesto que la libertad —gobernarse a sí mismo— sólo se puede alcanzar con la igualdad. La democracia igualitaria tiene su base social en la pequeña burguesía artesanal, en las masas pauperizadas de las grandes ciudades, en la clase obrera que surge con la industrialización. Demócrata se define Proudhon: «Los comunistas, para expresar el objeto de sus deseos, emplean indiferentemente los términos de comunidad, de asociación, de organización, de igualdad: como medio de realización, exigen la reforma electoral y el gobierno del pueblo por el pueblo: es lo que los coloca entre los demócratas más avanzados.» (*De la création de l'ordre dans l'humanité,* 1843, volumen III, pág. 294.) Demócrata se considera Louis-Auguste Blanqui, que lucha por el gobierno del pueblo contra la minoría privilegiada de los ricos y de los poderosos. Demócrata fue el cooperativismo de Louis Blanc, así como el movimiento cartista en Inglaterra, centrado en conseguir el sufragio universal. Y demócratas fueron, y así se proclamaron, Marx y Engels en su juventud.

El socialismo, incluido el marxista, surge de esta restauración del concepto de democracia que ocurre en Francia a mediados del XVIII. Como muy bien ha señalado Arthur Rosenberg, un siglo más tarde el concepto de socialismo no tiene todavía una significación precisa y suena en los oídos de los pocos en-

terados como una preocupación vaga por la «cuestión social», que plantea la industrialización capitalista. Por comunismo se entendía algo mucho más desagradable, un igualitarismo radical, pero al fin totalmente inocuo, dado su carácter ilusorio. El concepto que movilizaba a las masas, olía a pólvora y barricadas y hacía actuar presto a la policía, era justamente el de democracia [1].

Hasta bien sobrepasada la primera mitad del siglo XIX, la noción de democracia no ha arraigado más que en las clases populares y en algunos intelectuales políticamente muy a la izquierda. Su significado es claramente anticapitalista y revolucionario. Ello no quiere decir que los demócratas no reconozcan la propiedad privada —únicamente una minoría exigua propugna una economía colectivizada—, pero sólo conciben una democracia que funcione allí donde reine cierta igualdad de las riquezas. La democracia aparece como el régimen político propio de una sociedad de campesinos libres que trabajan parcelas de tamaño semejante —Jefferson— o de artesanos con un nivel de riqueza equivalente —Rousseau—. Ni que decir tiene que el rápido desarrollo del capitalismo, tanto en Estados Unidos como en Europa, cuestiona muy pronto esta concepción pequeño-burguesa de democracia. En la segunda mitad del XIX, el pensamiento democrático se adapta a las condiciones del capitalismo, o bien se transforma en posiciones ya claramente socialistas.

El pensamiento político que se desarrolla con el ascenso de la burguesía no es demócrata, sino liberal. No poca confusión resulta en nuestros días de la fusión de ambas tradiciones en una nueva síntesis demoliberal. Hasta mediados del XIX, estas dos corrientes se enfrentan representando intereses de clase muy distintos. Aparecen confundidas en su oposición a las estructuras políticas de la monarquía absoluta, en su lucha contra la aristocracia terrateniente, pero según se consolida el poder de la burguesía se manifiesta abiertamente la oposición entre liberales y demócratas. Los intereses de la gran burguesía industrial y financiera que se identifican con posiciones nítidamente liberales no coinciden con los de la clase trabajadora y demás capas populares urbanas, que se inclinan hacia concepciones democráticas.

Si en la Revolución inglesa hemos de buscar las raíces del liberalismo individualista, en la francesa las de la democracia.

---

1 Arthur ROSENBERG, *Demokratie und Sozialismus*, Francfort, 1962, pág. 35.

Lo que para la democracia representa el pensamiento político de Rousseau, lo significa para el liberalismo burgués el de John Locke. Lo que en el uno es la abstracción «pueblo», es en el otro la también abstracción «individuo». Si para Rousseau el fin del gobierno es realizar la libertad, con su requisito previo, la igualdad —lo que obliga a cuestionar un reparto de las riquezas que lleve a los unos a la opulencia y a la mayoría a la miseria—, para John Locke «la finalidad primordial de la sociedad civil es la defensa de la propiedad» (*Ensayo sobre el gobierno civil*, párrafo 85). Por la propiedad del individuo entiende Locke «su vida, su libertad y sus bienes» (*íd.*, 87). Por lo menos todo individuo es propietario de su vida, aunque triste es el destino del que, por no tener bienes, se queda también sin libertad.

La identificación del individuo con su propiedad —somos lo que poseemos—, así como la reducción del gobierno a la función primordial de proteger la propiedad, es en Locke, en el origen mismo del pensamiento político burgués, doctrina que proclama sin tapujos o mala conciencia. Aunque no se ha vuelto a formular con la claridad de los siglos XVII y XVIII, la razón de ser del liberalismo sigue siendo el afán de defender la propiedad a todo trance. El dogma constitutivo del liberalismo burgués es la identificación de la libertad con la propiedad. La cantidad de bienes y el grado de seguridad con que se gocen es el índice real de libertad.

Una sociedad es libre cuando permite a cada individuo la búsqueda de su felicidad. Como se parte del supuesto de que no hay felicidad sin base material —lo que puede ser cierto— y que, por tanto, se es más feliz cuanto más bienes se poseen —lo que ya parece mucho más cuestionable—, la búsqueda de la felicidad se hace coincidir con el incremento de las riquezas. Una sociedad es tanto más libre cuanto más favorezca el afán de enriquecerse de los más enérgicos, diligentes o astutos. Como los hombres son desiguales por naturaleza —los hay emprendedores y soñadores, activos y apoltronados, inteligentes y tontos—, cuanto más libre una sociedad mayores las desigualdades sociales. Libertad e igualdad, en vez de sobrentenderse, como afirman los demócratas, se repelen mutuamente: a mayor libertad, menor igualdad, e inversamente.

Las diferencias entre liberales y demócratas resultan bien palmarias hasta bien entrado el siglo XIX. Mientras los demócratas piensan que sin igualdad no puede granar la libertad, el liberalismo concibe libertad e igualdad como objetivos antitéticos. Mientras los liberales identifican la defensa de la propiedad con la defensa de la libertad —no cabe libertad donde se

ha suprimido la propiedad—, los demócratas critican la propiedad si su despliegue conlleva un incremento constante de la desigualdad social: en una sociedad en la que no pocos viven en la opulencia y la mayoría en la miseria, no cuaja la libertad.

Las diferencias políticas que se derivan de estas dos concepciones son también considerables. Si la participación de todos en el gobierno es la aspiración del demócrata, para el liberal únicamente el propietario tiene derechos políticos. Al no propietario le falta, con la propiedad, la libertad mínima imprescindible para poder decir sobre quiénes han de encargarse de las tareas legislativas y de gobierno. Si la función primordial del poder político es proteger la libertad y ésta se hace coincidir con la propiedad, ¿cómo pueden participar responsablemente en las elecciones aquellos que, por no ser propietarios, no son hombres libres? En una sociedad libre a nadie se le niega el derecho a enriquecerse, pero sólo a los propietarios, es decir, a aquellos que han puesto de manifiesto su diligencia, espíritu de empresa y capacidad de riesgo, consiguiendo o conservando las riquezas puede dárseles el derecho de voto. Mientras los demócratas lucharon encarecidamente por el sufragio universal, el liberalismo burgués defendió por mucho tiempo el sufragio restringido, censatario, convencido de que el voto obrero significaba el fin de la propiedad de los bienes de producción. Creencia, por lo demás, en que coincidían con no pocos demócratas y socialistas.

Frente al principio democrático de identidad entre gobernantes y gobernados, el liberalismo desarrolla el principio de representación, que tiene en el Parlamento su expresión cabal. El gobierno representativo es aquel que garantiza la libertad, es decir, las propiedades de los ciudadanos, de modo que no puedan ser confiscadas ni mermadas sin el consentimiento expreso de sus representantes. El Parlamento ha nacido con la función principal de terminar la cuantía de los impuestos que los propietarios, por boca de sus representantes, acceden a pagar para sostener los costos que conlleva la protección militar y policial de la propiedad. A la hora de discutir función y alcance del Parlamento importa no olvidar el origen burgués de esta institución.

Con la derrota de la Comuna en 1871, la tradición de la democracia revolucionaria llega a su fin, incluso en su patria predilecta, Francia. En la Inglaterra victoriana, el movimiento cartista apenas se mantiene en el recuerdo, y son los conservadores los que se ocupan de integrar a la clase obrera en la unidad transnacional del Imperio. A finales del XIX, el concepto de

democracia deja impasible a la clase obrera, sin interesar a la burguesía en el poder. El marxismo, que se ha convertido en los años ochenta y noventa en la corriente socialista predominante, se desprende por completo de esta tradición, con la que en 1848 los jóvenes Marx y Engels se habían identificado plenamente. En 1882, Federico Engels, al pasar revista a las fuentes ideológicas del socialismo en su conocido escrito *El desarrollo del socialismo de la utopía a la ciencia*, menciona a la filosofía francesa de la Ilustración, al idealismo alemán y a los tres grandes utopistas —Saint-Simon, Fourier y Owen—, pero no dedica una sola palabra a la tradición democrático-revolucionaria, sin duda la fuente más clara y decisiva.

En las últimas dos décadas del siglo pasado se observa un distanciamiento creciente entre democracia y socialismo que remacha, por un lado, el anarquismo bakuninista, combatiente feroz de cualquier forma de participación política; por otro, el marxismo, que, criticando duramente a los anarquistas y reconociendo la importancia de la actividad parlamentaria y de la participación en elecciones, no renuncia a su vocación revolucionaria. A su vez, en el mismo período el concepto de democracia es recuperado por el ala izquierda del liberalismo, que acepta el sufragio universal y no se pliega ante los intereses imperialistas de la gran burguesía. La radicalización de una minoría en anarquistas o revolucionarios marxistas, la crítica creciente a la «inutilidad» de la socialdemocracia alemana, que a pesar de haber conseguido en 1903 un tercio de todos los votos depositados, no logra modificar en lo más mínimo las relaciones de fuerza en el Reich, la aparición de un movimiento que se reclama de la democracia, pero de origen liberal y burgués, son factores confluyentes que agudizan la separación de estos conceptos. Con el nuevo siglo, y en Rusia, el extrañamiento llega tan lejos que Lenin utiliza el adjetivo «democrático» como equivalente a «burgués» y «capitalista». Sin el menor sonrojo habla de la «dictadura democrática de los obreros y campesinos», que quiere decir gobierno de los partidos que se consideran representantes de la clase obrera y del campesinado, manteniendo relaciones capitalistas de producción. En el vocabulario marxista-leninista se tiende hasta hoy a identificar democrático con capitalista, oponiendo democracia parlamentaria, es decir, dictadura de la burguesía, a dictadura del proletario, poder de clase que inicia la construcción del socialismo.

Desde la derrota de la Comuna hasta la crisis profunda que desencadena la Primera Guerra Mundial, en las casi cinco décadas que dura el Imperio que puso en pie Bismarck, la demo-

cracia es un concepto que ha perdido toda credibilidad. Tanto si la gran burguesía industrial y financiera ha conquistado el poder político —Francia— como si se conforma tan sólo con el económico —en los tres Imperios: ruso, alemán y austriaco—, la democracia, como teoría y como práctica, le resulta por lo demás inservible. A su vez, las clases populares urbanas, después de casi un siglo de devoción democrática, por completo desilusionadas, dan señal de un absoluto conformismo, radicalizándose unas minorías que se inclinan al anarquismo, que critica toda institución y todo comportamiento político, incluido el democrático, o al marxismo, que, coqueteando no poco con la vía democrática de la socialdemocracia alemana, termina por acentuar su especificidad revolucionaria. La ciencia social que se desarrolla en esta época —Max Weber, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto— desde distintos supuestos teóricos se caracteriza por una misma crítica pulverizadora de la democracia. Bajo la sombra omnipresente de Federico Nietzsche, en la época que va de Sedan a Verdun, prevalece una misma animosidad antidemocrática.

La victoria de la coalición antialemana, la revolución bolchevique con su desprecio de las instituciones democráticas, la amenaza revolucionaria que se cierne en la Europa central, el surgimiento como potencia mundial de los Estados Unidos, donde perviven tradiciones y formas de vida de viejo sabor democrático, son algunos de los factores que habría que citar para dar cuenta de la recuperación del concepto de democracia por la burguesía establecida. El paréntesis sangriento que significó el fascismo no logra modificar esta simbiosis, todo lo contrario, de modo que la fusión de capitalismo y democracia llega a su cenit después de la Segunda Guerra Mundial. El régimen democrático es el propio de los países capitalistas altamente desarrollados que se contrapone a «totalitario» de signo fascista o comunista, o a «autoritario», típico de los países en vías de desarrollo. Desde esta nueva óptica, capitalismo y democracia son conceptos que se complementarían recíprocamente, pronosticándose el «totalitarismo» más atroz allí donde desapareciese la propiedad privada de los bienes de producción.

La recuperación por el capitalismo avanzado del concepto de democracia no ocurre sin profundas modificaciones. Por lo pronto, se disuelve la contradicción originaria «gobierno del pueblo», dejando constancia de la existencia en toda sociedad de una élite gobernante y de una masa gobernada: todo gobierno es necesariamente gobierno de unos pocos, de una élite dirigente o clase política. El concepto de «pueblo» es una abstrac-

ción inexistente, una falsa personificación a la que no cabe atribuir voluntad ni actividad alguna. Democracia no significa gobierno elegido y tolerado por el pueblo, es decir, por la mayoría de los ciudadanos.

Esta concepción de la democracia parte y reconoce el carácter elitista de la política. Unicamente unos pocos pueden detentar el poder y en una sociedad tan compleja como la moderna sociedad industrial que deja campo abierto para muy distintas actividades y profesiones, de hecho son también unos pocos —los políticos profesionales— los que realmente luchan por el poder. La inmensa mayoría sólo indirecta o pasivamente se interesa en la política, limitándose por lo general a elegir entre las distintas élites concurrentes. Esta mínima participación periódica basta, sin embargo, para legitimar el poder. Se mantiene la ficción de que el poder reside en el pueblo y que éste lo delega en sus representantes libremente elegidos, empalmando así con la teoría tradicional de la soberanía popular. La fusión de una teoría elitista del poder con la legitimación tradicional de que el poder reside en el pueblo es lo que caracteriza a la nueva concepción de la democracia.

Además de su función legitimadora, la democracia sirve para seleccionar a la élite gobernante, manteniendo sobre ella un cierto control en cuanto cabe su sustitución periódica por la élite concurrente. La crítica de las élites competitivas modera el ejercicio del poder, así como la posibilidad de que una élite venga sustituida por su concurrente, las dinamiza y las mantiene en un alto grado de operatividad. El control de la élite gobernante a través de la crítica de las élites competitivas y su sustitución en caso de perder el apoyo de la mayoría —circulación de élites— es lo que, en último término, garantiza la estabilidad de los regímenes democráticos. En todos los sistemas políticos gobierna una élite, pero sólo en el democrático esta élite tiene que competir libremente con las élites concurrentes y está reglamentado el modo de su reemplazo. La democracia se revela como un *método*, como unas cuantas reglas de juego para la selección y el recambio de las élites gobernantes.

Cabe, desde luego, una amplia gama de modelos de democracia, pero sin caer en un esquematismo excesivo pueden reducirse a dos tipos. El primero incluye todas las formas que suponen, en último término, una *identidad* de gobernantes y gobernados: se trata de la concepción clásica de democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El segundo parte de la *diferencia* insuperable entre la minoría gobernante y la masa gobernada. Todo gobierno, también el de-

mocrático, es el gobierno de una minoría sobre una mayoría. La especificidad del gobierno democrático viene dada por las *reglas de juego* que tienen que respetar las distintas élites concurrentes para conseguir el poder y mantenerse en él. Es lo que se conoce por «la teoría elitista de la democracia»[2].

Importa a estas alturas insistir en algunos hechos fundamentales, bien conocidos de los especialistas, pero que desde el interés de las clases dominantes se comprende que hayan caído en el olvido. Liberalismo y democracia son líneas no sólo distintas, sino opuestas de pensamiento político. Para el liberalismo, la libertad personal se realiza en la esfera privada de cada individuo. En consecuencia, el gobierno libre es aquel que no se entromete en esta esfera privada, limitándose a protegerla. Para la concepción clásica de la democracia, el ciudadano sólo es libre si obedece a las leyes que él mismo se ha dado, es decir, si, en último término, coinciden gobernantes y gobernados. Para la concepción liberal, el concepto político clave es el de *representación,* en cuanto la diferencia entre gobernantes y gobernados es insuperable, de lo que se trata es que los gobernantes sean representantes de los intereses mayoritarios. Para la concepción democrática, el concepto clave es el de *participación:* somos libres si participamos en las decisiones que nos conciernen.

En el período que va de la guerra franco-prusiana a la Primera Guerra Mundial se constata un repliegue del pensamiento democrático que hasta entonces sólo había enraizado en las capas populares urbanas. La clase obrera se desprende de la noción clásica de democracia, inclinándose al apoliticismo anarquista o al concepto de revolución que introduce el marxismo. En un estudio del concepto moderno de democracia, este período de desprendimiento crítico de la tradición democrática es de la mayor importancia. En la segunda posguerra, hay antecedentes teóricos importantes en la República de Weimar, se desarrolla esta teoría elitista de la democracia —Joseph Schumpeter, Karl Mannheim— que permite su recuperación y total integración por la burguesía establecida. Hasta 1968, democracia y capitalismo son términos equivalentes. A partir de esta fecha se percibe un renacimiento del pensamiento tradicional democrático que viene a sustituir o a reinterpretar un marxismo congelado en su rama leninista.

En la última década se ha hecho de nuevo patente la du-

2 Peter BACHRACH, *The Theory of Democratic Elitism. A Critique,* Londres, 1967.

plicidad significativa del concepto de democracia: demócratas se llaman los liberales remozados, defensores de una teoría elitista, y demócratas se dicen los que pretenden realizar un gobierno del pueblo por el pueblo. Para los primeros, la democracia existe allí donde se respetan las reglas de juego en la lucha entre élites por el poder. La democracia es un concepto meramente formal, alude a un método de la toma de decisiones y no conlleva contenidos de ningún tipo, como no sea el respeto del pluralismo que supone la libre aparición de distintas élites. Justamente esta formalización del concepto de democracia permite constatar su existencia si se respetan las reglas del juego, o su no existencia, en caso contrario, pero no caben estados intermedios. Para los demócratas clásicos, la democracia comporta un contenido bien preciso, gobierno del pueblo, lo que obliga a entenderla no como una realidad acabada, sino como un proceso: la participación progresiva en la toma de decisiones en las cosas que nos conciernen va acortando la distancia entre gobernantes y gobernados.

3. Democratización y socialismo

La ambigüedad que define hoy al socialismo radica en este doble significado del concepto de democracia. Los partidos socialistas europeos se desprenden del marxismo revolucionario para subrayar su vocación democrática, pero a menudo dejan en la mayor imprecisión qué es lo que entienden por democracia. Según acepten el concepto formal o material de democracia, el elitista o el tradicional, cabe hilar más fino y distinguir las posiciones socialdemócratas de las socialistas.

La socialdemocracia, entendida aquí como tipo ideal, parte de la noción elitista y formal de democracia. La multiplicidad de grupos y de intereses que se observa en la moderna sociedad industrial sería resultado de su complejidad intrínseca, y en este sentido es irreversible. Decisivo es tan sólo que estos diversos grupos sociales —empresarios y obreros, campesinos, profesionales, funcionarios, etc.— puedan formular y defender con plena libertad sus intereses específicos y que todos acepten para la solución de los problemas las reglas de juego que establece el sistema democrático. Después de no pocos forcejeos se consigue con los compromisos necesarios un nuevo punto de equilibrio. La socialdemocracia ratifica el pluralismo de ideas y de intereses que conforma a la moderna sociedad industrial, pero se declara abiertamente defensora de los intereses especí-

ficos de los asalariados en su más amplio sentido. No se pretende otro modelo de sociedad —el actual pluralismo es condición de la libertad—, pero aceptando el actual orden social, los socialdemócratas luchan por eliminar los obstáculos que se oponen al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la igualdad de oportunidades —un falso igualitarismo terminaría enterrando la libertad— y a la solidaridad con los grupos sociales más débiles: parados, enfermos, pensionados, etc. Ni que decir tiene que, desde esta concepción formal y pluralista de la democracia, las instituciones políticas del actual Estado burgués aparecen como las únicas concebibles.

El socialismo democrático, en cambio, empalma con el concepto tradicional de democracia como gobierno del pueblo. No rechaza el concepto formal de democracia, pero lo estima insuficiente. Tanto como la forma, importa el contenido. La democracia no es tan sólo un método, sino una «manera de vivir» colectiva que parte de la igualdad y la libertad intrínseca de todos los hombres. Postulado inicial es que la ilbertad y consiguiente igualdad son consustanciales con lo humano. Desde este principio cabe criticar el abismo existente entre lo que debiera ser y lo que realmente es. La libertad real consiste en la lucha y aproximación continua a este ideal de libertad que se concibe como definitorio de lo humano. La humanización de las relaciones sociales —realización de la libertad— es así el contenido de la democracia.

A nadie se le oculta las implicaciones filosóficas que supone la determinación de un contenido a la democracia. No se trata de discutir ahora el valor de semejante filosofía, sino simplemente de enunciar su postulado fundamental: el hombre es libertad. Pues bien, el corolario político-social de esta concepción de lo humano como libertad es que el ser humano sólo es libre si participa en las decisiones que le conciernen. Aunque los poderosos no quisieran más que nuestro bien y todas las decisiones que tomaran por encima de nuestras cabezas no tuvieran otro objetivo que el bien de todos, no somos plenamente hombres mientras no participemos en las decisiones que nos conciernen. Nadie puede decidir por nosotros en nuestro nombre: la libertad no se delega. El principio democrático de identidad de gobernados y gobernantes, así como el de participación que le sigue, provienen de esta concepción del hombre como libertad, es decir, implican una determinada filosofía que, lejos de disimular suponiendo un inexistente consenso universal, importa poner de relieve con la mayor claridad.

Dicho esto, dos observaciones pueden resultar útiles. La pri-

mera, no se rebate este concepto de democracia aludiendo a su carácter utópico. El reproche de utopismo, lejos de invalidar una posición, le da su pleno sentido. El hombre, en su afán de trascender, es un animal de utopías. Su destino consiste en ir realizando lo todavía no sido. La segunda, el realismo miope que se empeña en mostrar la perdurabilidad de las estructuras dadas de poder proviene a su vez de una filosofía que petrifica determinadas relaciones históricas como si fueran insuperables y eternas. Por un lado, la experiencia histórica de que en toda sociedad siempre hay una minoría que manda y una mayoría que obedece no es tan universal como pretenden algunos intérpretes interesados; por otro, lo que ha sido y lo que es no determina definitivamente lo que puede llegar a ser.

Queda fuera de nuestro marco una discusión sobre las premisas filosóficas tanto del «realismo» que supone insuperables las relaciones de poder como del «utopismo» democrático que inscribe en su bandera la eliminación progresiva de estas relaciones. Lo único que importa subrayar es la tradición filosófica en que se incluye el socialismo democrático, el humanismo, que en su formulación más cabal lo encontramos en el pensamiento de la Ilustración —Rousseau y Kant—, pero sus raíces se remontan a la Antigüedad clásica. El pensamiento de Marx, por un lado, enlaza con esta tradición; por otro, rompe con ella, cayendo en un objetivismo cientificista, que para algunos es su logro más genial y para nosotros el lastre más típicamente condicionado por la sociedad que le tocó vivir.

El socialismo se diferencia nítidamente de la socialdemocracia al enlazar con el concepto clásico de democracia sin reducirla a puro método o reglas de juego. Con ello recupera su dimensión utópica de democracia como gobierno de todos, como identidad de gobernantes y gobernados, como realización de la libertad. Pero también marca sus distancias frente al objetivismo marxista que supone el desarrollo democrático consecuencia objetiva del despliegue del capitalismo, de sus contradicciones objetivas y del modo revolucionario de su superación. Para el socialista democrático, el socialismo coincide con el despliegue y profundización de la democracia, sin que quepa establecer a partir de la contradicción desarrollo de las fuerzas productivas/relaciones capitalistas de producción una estrategia única y objetiva de superación del sistema. El socialismo se revela no como un proceso objetivo y necesario, implícito en la misma dialéctica del desarrollo del capitalismo, sino como una *posibilidad* que da sentido a la lucha de aquellos que conciben al hombre como libertad y en consecuencia no están dispuestos a to-

lerar como insuperables las muy variadas formas sociales de opresión.

Desentrañar, por tanto, qué quiere decir realmente socialismo democrático, implica: 1. Elucidar lo que se esconde en la tan traída y llevada «profundización de la democracia». 2. Determinar el sujeto, mejor los distintos sujetos, de esta lucha por la libertad y la democracia. 3. Frente a la unicidad de la estrategia marxista, centrada en la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, hacer plausible la pluralidad de estrategias imprescindibles para avanzar hacia el socialismo. Ello exige librarse de una excesiva simplificación de las relaciones entre la «base» económica y las «superestructuras» ideológicas y políticas. El «materialismo histórico» tiene su valor indudable como una hipótesis general de trabajo, pero sirve de poco a la hora de hacer un análisis concreto de situación y de poner en marcha una estrategia de lucha con objetivos precisos. El que el marxismo posibilite una práctica política basada en un conocimiento científicamente objetivo es uno de los últimos residuos cientificistas de la pasada centuria que urge superar.

«Profundizar la democracia» es la expresión utilizada en el socialismo español para hacer hincapié en su concepción de la democracia no simplemente como método, sino como proceso de acercamiento progresivo al ideal democrático de poder del pueblo. En este sentido equivale al concepto clave de *democratización*, noción que domina el socialismo europeo desde su renacimiento al final de la década de los sesenta. La discusión política de estos últimos años gira en torno a este concepto, que la derecha critica como altamente corrosivo y aun destructor de la democracia, mientras que la izquierda socialista lo ha colocado en el centro de sus preocupaciones, hasta el punto que hoy el socialismo se define como la *democratización de la sociedad y del Estado*[3].

Esta perífrasis subraya dos elementos fundamentales. Primero, una crítica de las relaciones sociales, económicas y políticas establecidas como *todavía* no democráticas. El concepto de democratización sirve, por lo pronto, para revelar el carác-

---

[3] Para la crítica conservadora al concepto de democratización, véase Wilhelm HENNIS, *Die missverstandene Demokratie*, Friburgo, 1973; Warnfried DETTLING, *Demokratisierung Wege und Irrwege*, Colonia, 1974. Para una comprensión socialista del concepto de democratización, Fritz VILMAR, *Strategien der Demokratisierung*, 2 volúmenes, Darmstadt, 1973.

ter antidemocrático de las instituciones sociales y políticas establecidas. No hay socialismo concebible que no parta de la crítica de la sociedad capitalista y de sus estructuras de poder. Para la burguesía establecida, la democracia se reduce a unas cuantas reglas de juego y, en consecuencia, sólo cabe que se hable de democracia si se respetan, y de falta de democracia si no se respetan, pero en ningún caso tendría sentido hablar de más o menos democracia; para los socialistas que no se conforman con su determinación formal, la democracia evidentemente aumenta con la mayor participación de un mayor número de ciudadanos en las decisiones que les conciernen. La democracia no se concibe como una realidad acabada, sino como un proceso de lucha contra las estructuras oligárquicas de los poderes establecidos, como un esfuerzo colectivo por su desmontaje.

El segundo elemento diferencial se refiere al alcance de la democracia que atañería exclusivamente a determinadas instituciones estatales o al conjunto de las instituciones sociales. La democracia concebida como un «sistema de gobierno» no podría ser aplicada más que a las instituciones políticas de gobierno. Sería antinatural y contraproducente aplicar las reglas de juego democrático a todas las esferas sociales. La democracia podrá ser el modo correcto para elegir a los gobernantes, pero de ningún modo para nombrar a los jueces, a los profesores, a los directores de empresa. La democracia en la empresa, en la universidad, en la familia, parecen horrores inconcebibles. El concepto burgués de democracia es básicamente reduccionista: cuanto menos quepa en él y a menos alcance, mejor. En nombre de la razón, de la eficacia, del buen funcionamiento, se defienden estructuras oligárquicas de poder prácticamente en todos los ámbitos sociales, en todas las organizaciones privadas y públicas.

En cambio, los socialistas conciben a la democracia como una «forma de vida», como la forma de convivencia propia de hombres libres y, en consecuencia, la consideran aplicable a todas las esferas sociales, públicas y privadas. Frente a un concepto de democracia reducido o limitado exclusivamente a la órbita gubernamental, el concepto de democratización que reintroducen los socialistas intenta abarcar a la sociedad toda. Socialismo es justamente democratización, es decir, desmontaje progresivo de las estructuras oligárquicas de poder que hallamos por doquier. Desde la democratización de la sociedad, democratizar el aparato estatal, y desde la democratización del

Estado, democratizar la sociedad: he aquí la dialéctica en que consiste el socialismo como proceso de democratización.

El socialismo entendido como democratización no deja desde luego tranquilo al buen burgués: lo desecha como utópico, irrealista, infantil, terriblemente simplificador. Si excepcionalmente tiene que enfrentarse en el ámbito de su actividad a un movimiento de base con exigencias democratizadoras, lo denunciará como altamente corrosivo y destructor, y estará dispuesto a sacrificar la democracia como forma de gobierno, con tal de que no se extienda a los demás sectores sociales. Para el que la estructura oligárquica de poder sea una realidad insuperable y la dependencia del individuo como asalariado no hiera su noción de lo humano, para el que no sienta su libertad ligada a la libertad de los demás, porque sólo cabe vivir libremente entre hombres libres, la democracia tendrá necesariamente una dimensión bien exigua y le parecerá tan ingenua como peligrosa la noción de democratización.

El gran descubrimiento «científico» de Marx consistió en haber demostrado que el movimiento de lo real, las leyes objetivas del desarrollo histórico, coincidían en último término con las aspiraciones democráticas del hombre libre. Desde este saber «objetivo» pudo rechazar como mero idealismo pequeñoburgués toda concepción del socialismo que subraye su origen ético y humanista. La noción de «objetivo» que maneja hoy la ciencia social está muy lejos de implicar la unidad totalizadora de pensamiento y realidad, pero aun aceptando algo así como una tendencia objetiva del desarrollo del capitalismo avanzado, difícilmente podrá decirse que marcha hacia una revolución superadora o hacia la democratización paulatina de sus estructuras. La que podríamos llamar tendencia objetiva de nuestro tiempo, correspondiente con los condicionamientos que impone la tecnología desarrollada y las grandes organizaciones que la ponen a punto, es la *burocratización* progresiva de las instituciones privadas y públicas.

Cualquier planteameinto «objetivo» lleva a dejar constancia de estas tendencias burocráticas. Los esfuerzos democratizadores en sentido opuesto surgen de una determinada idea de la dignidad humana, que impide aceptar como inexorable lo que un análisis científico quiere imponer como irremediable: la eterna sumisión de la mayoría a la voluntad rígida de una minoría. En cuanto observadores imparciales, tenemos que admitir la burocratización creciente del capitalismo avanzado o de las formas estatistas que lo han sustituido. El hecho que parece irrebatible es la consolidación de poderes oligárquicos al frente

de las organizaciones económicas, sociales y políticas. En cuanto hombres que no pueden renunciar a una idea humanista de la libertad de todos —algunos la consideran mero residuo teológico o metafísico de un pasado definitivamente superado—, la tendencia a la burocratización creciente se interpreta como un reto que exige el mayor grado de conciencia y la mejor disponibilidad de lucha para no aceptar nunca lo inhumano como lo irremediable. Nuestra situación histórica no se define, como quería Marx, por una confluencia dialéctica del movimiento de la realidad y el de nuestra pretensión de hombres libres, sino por el enfrentamiento, sin síntesis ni totalidades dialécticas, de una tendencia burocratizadora y otra democratizadora. En ningún sitio está escrito, ni hay dialéctica objetiva que lo garantice, ni siquiera que lo posibilite, que al final —no existe final— la contradicción se resolverá con el triunfo de la democracia.

CAPITULO VII

ELEMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA SOCIALISTA

Si el lector nos ha seguido pacientemente por los capítulos anteriores, a estas alturas ya le resultará familiar la separación conceptual de socialismo y de marxismo, pero sin identificarlo por ello con la socialdemocracia actual. El socialismo hoy —otra cosa fue en otros tiempos— se define tanto frente a las diversas corrientes marxistas como frente a las socialdemócratas. Frente al marxismo no se conforma con criticar determinados pronósticos o aseveraciones de Marx —esto lo hace cualquier marxista consciente—, sino que rechaza su concepción de la ciencia como un conocimiento «objetivo» del desenvolvimiento del capitalismo en su totalidad y del modo de su superación revolucionaria. Los socialistas, a diferencia de los marxistas, no alegan ningún conocimiento científico especial, negándose a distinguir entre una ciencia marxista o proletaria y una ciencia burguesa. Asumen simplemente los conocimientos científicos de su tiempo —en sus distintas corrientes, incluidas, desde luego, las marxistas—, conscientes de que lo que, en último término, constituye un saber científico es la posibilidad de cuestionarlo. Se es socialista no por poseer un conocimiento especial de las «leyes del desenvolvimiento del capitalismo», que nos asegura que nuestro afán de libertad coincide con el «movimiento de lo real», sino por una determinada valoración ética que exige luchar por la libertad de todos, como requisito de nuestra propia libertad, por la igualdad entre los hombres, como base de nuestra propia dignidad, aunque nuestro saber histórico, sociológico y económico ponga de relieve algunos pocos elementos que po-

drían favorecer un desarrollo socialista y muchos, y de peso, que trabajan en sentido inverso.

El socialismo no es la meta objetiva de la Historia, en la que encuentra su sentido, como totalidad, en «la realización de la Idea de la libertad». La marcha hacia el socialismo no es la tendencia intrínseca de nuestro tiempo, ni el proletariado la clase revolucionaria, cuya misión histórica es acabar con la sociedad de clases. Si logramos desprendernos de esta metafísica de la Historia, poco es lo que queda de esencialmente marxista. En cambio, si nos empeñamos en conservarla, angustiados ante el vacío que ha dejado la «muerte de Dios», y luego la pérdida de la Historia como totalidad con sentido, rebajamos el marxismo a mero opio para el pueblo. Si ya no cree en una vida más allá de la muerte, confortémosle de sus sufrimientos diarios, hablándole de su destino glorioso cuando llegue la hora de la gran transformación social. El milenarismo revolucionario no deja de ser una forma de milenarismo y como tal, un modo de extrañamiento de la realidad. Si el futuro es la categoría profética —y cabalmente marxista—, recuperar el presente, para la acción de las clases oprimidas es la tarea principal del socialismo contemporáneo.

En la crítica de los resabios histórico-metafísicos del marxismo, así como en el afán de hacer política para el hombre de hoy, sin remitirse a un futuro impreciso, coinciden socialdemócratas y socialistas. No son pocos los puntos de contacto que podrían establecerse entre socialismo y socialdemocracia, pero lo que aquí importa es subrayar las diferencias. Mientras que los socialdemócratas aceptan las instituciones económicas, sociales y políticas de la moderna sociedad industrial, propugnando únicamente reformas que, sin perder su identidad, las vaya acercando a su ideal de libertad, igualdad y solidaridad, los socialistas, desde la noción originaria de democracia, denuncian estas mismas instituciones como antidemocráticas o no suficientemente democráticas, propugnando un proceso de democratización global de la sociedad y del Estado. Para el socialdemócrata, el sistema económico basado en el mercado y en la propiedad privada de los bienes de producción ofrece más ventajas que inconvenientes si se sabe desde el Estado proteger a las partes más débiles y se combate la concentración excesiva de poder económico. Para el socialista, en cambio, la actual organización de la empresa supone una estructura despótica que niega el principio fundamental de autonomía, consustancial con la dignidad humana. La no participación y responsabilidad compartida de todos los que trabajan en un mismo pro-

ceso de producción limita por otro lado gravemente su eficacia. Para el socialdemócrata, la democracia representativa en su actual forma resulta inmodificable, a la vez que rechaza toda idea o experimento de democracia directa o de extensión de la democracia representativa a otras esferas sociales. El socialista, reconociendo el valor de la democracia representativa frente a cualquier gobierno dictatorial, cree que el proceso político de democratización, comenzado hace apenas dos siglos, lejos de haber llegado a su fin, se encuentra todavía en sus primeras etapas; de ahí que su preocupación se centre en concebir y poner en marcha formas de organización que permitan una mayor participación.

1. La clase o el Estado, como sujeto de transformación social

Distinguir entre los conceptos de socialismo, marxismo y socialdemocracia parecerá a algún político práctico, o que se tiene por tal, mero juego especulativo, útil tan sólo para ocupar los ocios de las gentes de letras. En efecto, de nada serviría este esfuerzo analítico, si luego en la práctica no tuviera repercusiones importantes. Una distinción conceptual que no sirve en la práctica, no sirve tampoco teóricamente. Distinguir entre socialismo, marxismo y socialdemocracia resulta fundamental por las distintas estrategias que cada una de estas posiciones implica. La ambigüedad en los planteamientos estratégicos que a menudo se observa en los partidos socialistas, proviene a menudo de la mezcolanza al buen tuntún de estos conceptos.

La distinción entre socialismo, marxismo y socialdemocracia resulta patente, en cuanto se especifica el sujeto social de una política socialista. Para el marxismo, el concepto clave es el de lucha de clases, que en una sociedad capitalista plenamente desarrollada, se concreta en la contradicción fundamental entre burguesía y proletariado. El desarrollo del capitalismo llevaría consigo la polarización de la sociedad en dos clases, y como la inmensa mayoría pertenecería al proletariado, esta polarización entre una minoría opresora y una mayoría oprimida supone de hecho una homogeneización de la mayoría en la clase trabajadora explotada. Desde los supuestos teóricos del marxismo, la clase trabajadora, el proletariado, constituye la inmensa mayoría en una sociedad capitalista plenamente desarrollada, de modo que al reducir el sujeto del socialismo a la clase trabajadora, no se pierde con ello su carácter demo-

crático, es decir, mayoritario. Para el marxismo, un partido socialista es un partido obrero, es decir, *de clase*, en el doble sentido de integrar a la clase obrera y de tener conciencia de clase, y *revolucionario*, es decir, dispuesto a suprimir las relaciones capitalistas de producción en cuanto alcance el poder. Para el marxismo, el sujeto histórico de una política socialista no puede ser más que *la clase obrera políticamente organizada* en un partido que tiene como objetivo primordial suprimir las relaciones capitalistas de producción.

La socialdemocracia, ya desprendida por completo de cualquier análisis marxista, niega, no sólo la polarización antagónica burguesía-proletariado, sino incluso el concepto de «lucha de clases». El desarrollo de «la moderna sociedad industrial», lejos de haber producido una homogeneización social con la proletarización de la mayoría de la población, supone una mayor diferenciación, como corresponde a una «división del trabajo» creciente, debida al progreso tecnológico. Si bien han desaparecido las oposiciones bruscas del pasado —burguesía y proletariado, medio urbano y medio rural—, ello no significa que no se mantengan diferencias considerables de *status*, ingresos, mentalidad, formas de vida, etc., entre los distintos grupos y capas sociales. La sociedad industrial es, por un lado, más homogénea, en el sentido de haber integrado a los diversos grupos y capas sociales en sus coordenadas fundamentales; por otro, mucho más diferenciada en actividades, formas de vida, posiciones sociales, pero todas ellas dentro de un continuo que no permite partirlo en dos, en virtud de una llamada contradicción principal: propietario o no de los medios de producción. La sociedad industrial sería mucho más homogénea, en el sentido de su integración no antagónica, a la vez que mucho más diferenciada, dada la proliferación de nuevas actividades, funciones y posiciones, de lo que supone el esquema marxista.

La socialdemocracia no escamotea las diferencias reales en la sociedad, no niega los distintos intereses que se esconden tras estas diferencias, consciente de que a menudo no sólo son distintos, sino opuestos. Lo que rechaza es que esta multiplicidad de intereses, distintos y opuestos, pueda reducirse a una sola contradicción, determinada por la propiedad o no de los medios de producción, como supone el concepto marxista de «lucha de clases». Se recalca la existencia de intereses opuestos, pero se niega su carácter antagónico, irreconciliable, que sólo puede terminar con la victoria de unos o de otros. En el fondo, lo que se cuestiona es un modelo armónico de sociedad,

en el que hayan desaparecido, con las diferencias, los conflictos y las oposiciones. Las diferencias sociales —de función, de posición, de ingresos— provienen de la división del trabajo sobre la que se sustenta la moderna sociedad industrial. Constituyen, por tanto, un hecho insuperable si se quiere mantener un alto índice de libertad y de eficacia. Las teorías falsamente armonizadoras de izquierdas o de derechas —«la sociedad sin clases», «la comunidad de la nación»— llevarían en su seno el dragón totalitario.

Una sociedad libre es a la vez una sociedad altamente diferenciada, con multitud de intereses distintos y aún contrapuestos. La homogeneidad social, la armonía del individuo con su medio social, corresponden a sociedades primitivas que apenas han dado los primeros pasos por el camino arduo y fructífero de la división del trabajo. La armonía resulta de la falta de individualidad. La integración plena en la sociedad antecede a la ruptura que implica el surgir del individuo. El individualismo moderno es producto de la heterogeneidad creciente, del aumento de la división del trabajo que conlleva el despliegue del capitalismo. La diversidad social permite al individuo el elegir sendas muy distintas de acuerdo con su temperamento y vocación. Cierto que esta «igualdad de oportunidades» es aún una meta por conseguir, pero en ella centra todos sus esfuerzos la socialdemocracia, y los avances en este sentido allí donde ha gobernado, han sido significativos. Pero justamente la posibilidad de elegir, la libertad, conlleva, con la diferenciación creciente, conflictos, luchas y tensiones. De ahí la nostalgia por una armonía, que se inscribe en un pasado definitivamente superado. Desde la angustia de la libertad, que arrastra el individualismo moderno, se comprende este afán, en el fondo reaccionario, de recuperar la armonía, la integración perdidas.

La socialdemocracia afirma la diferenciación social como base de la libertad. El desarrollo político y social no consiste en intentar retroceder a una armonía definitivamente perdida: el comunismo pertenecería a las primeras etapas de la humanidad y en su indeferenciación armonizante resultaría irrepetible. Se suprime la libertad, si se elimina violentamente la diversidad, imponiendo un modelo armónico que recubre siempre intereses minoritarios. En cambio, se avanza política y socialmente si se impulsa una diversidad creciente, pero respetando las reglas de juego democrático en la solución de los conflictos. Una sociedad libre es aquella en la que las diferencias pueden desarrollarse sin cortapisas, es decir, una sociedad en la que los conflictos resultan irremediables. Una sociedad

democrática es aquella que sabe resolver los inevitables conflictos democráticamente, es decir, aceptando y respetando los compromisos que negocian las partes contendientes. Los socialdemócratas no aspiran a una sociedad sin conflictos, sino a una en que los conflictos se resuelvan democráticamente, por pactos y compromisos, sin que ningún grupo social pueda imponer su voluntad al resto de la sociedad. Los socialdemócratas no niegan que uno de los conflictos claves de nuestra sociedad consiste en los intereses contrapuestos de empresarios y trabajadores, intereses que no son irreconciliables, pues aparte de la oposición clara en el reparto de los beneficios, existen intereses comunes: no quebrar para mantener el puesto de trabajo, aumentar la productividad como base de salarios más altos, etc. El conflicto entre empresarios y trabajadores no se resuelve eliminando violentamente una de las partes, que traería consigo, bien un régimen totalitario, bien el caos económico, con la consiguiente radicalización a la derecha, sino democráticamente negociando patrones y sindicatos.

A partir de este análisis queda claro que el sujeto de una política socialdemócrata no se define en términos de clase, ni se especifica en determinados grupos sociales. El partido socialdemócrata, a diferencia de los partidos marxistas, no se considera de clase, aunque pretenda representar los intereses particulares de los grupos sociales más débiles. Los partidos socialdemócratas se definen como partidos interclasistas, interesados en ganar la confianza de una mayoría que supera con creces los límites de la clase obrera. Se dirigen a todos los individuos que desde distintas posiciones sociales, actividades y mentalidad, afirman la diversidad como base de la libertad y propugnan la solución democrática de los conflictos. Personalidades autoritarias y dogmáticas se encuentran en todas las capas sociales, así como también está muy repartido en los distintos sectores sociales, con la sola excepción de los centros monopolistas de poder, este afán socialdemócrata de progreso y mejora hacia una sociedad más libre y más justa.

Si el apoyo electoral de una política socialdemócrata se encuentra distribuido entre los más diversos sectores sociales —una política que gire en torno a un grupo social muy definido, renuncia con ello a conseguir el poder político—, *el verdadero sujeto de una política socialdemócrata es el Estado.* Aquí radica una diferencia básica entre marxismo y socialdemocracia. Mientras que para el marxismo el sujeto de la transformación revolucionaria de la sociedad es la clase obrera, para la socialdemocracia no cabe una política real de cambio más

que desde el aparato del Estado. Llegar democráticamente al Gobierno, es decir, ganar las elecciones, es el fin de todo partido político serio, incluido el socialdemócrata. El electoralismo socialdemócrata —lo fundamental consiste en ganar las elecciones— corresponde a una noción estatista de la política: no hay otra política que la que se refiera a la toma del poder para desde él influir en la sociedad.

En la distinta concepción del Estado radica una de las diferencias esenciales entre marxistas y socialdemócratas, con claras repercusiones en sus estrategias hasta cierto punto opuestas. Para la socialdemocracia la sociedad capitalista, que prefiere llamar «moderna sociedad industrial», no se define en su esencia por la contradicción fundamental entre capital y trabajo asalariado, burguesía y proletariado, sino que esta «contradicción» se integra en una gama de tensiones y conflictos mucho más amplia y sin carácter antagónico. El marxismo propugna la superación de los conflictos que la socialdemocracia considera consustanciales con la libertad y, además, motor de la dinámica social. En consecuencia, no aspira a una sociedad distinta en la que haya desaparecido el conflicto capital-trabajo y los que se piensa derivan de él —el socialdemócrata es especialmente escéptico ante cualquier modelo alternativo de sociedad—, sino tan sólo pretende potenciar la libertad, la igualdad y la solidaridad dentro de los condicionamientos reales de la sociedad existente: nada más infantil, y en su caso políticamente irresponsable, que la utopía.

La socialdemocracia considera claramente ideológica una visión global de la sociedad y de su desarrollo. Rechaza cualquier filosofía de la historia que pretenda dar respuesta a la pregunta, ¿hacia dónde marcha la sociedad moderna en su conjunto? El socialismo no es, desde luego, una meta; en el mejor caso, un eufemismo para designar una sociedad en la que ya no quepan las formas de explotación y de opresión que conoció el capitalismo decimonónico. Al rechazar cualquier tipo de análisis global, su atención se centra en algunos problemas que, en la situación dada, aparecen como prioritarios: hoy es la cuestión del paro, mañana es la política sanitaria o educacional. Así como la sociedad está dividida en multitud de compartimientos, cada uno con sus propios intereses y particular dinámica, así la política real es siempre sectorial y abarca una problemática concreta para un tiempo y unas condiciones determinadas.

Si la sociedad como totalidad resulta una abstracción y sólo se experimenta dividida en sectores y grupos específicos, en

vano puede buscarse un sujeto capaz de llevar a cabo una política global de cambio o de transformación revolucionaria. La clase obrera, el sujeto que propuso el marxismo, por un lado, constituye sólo una parte, y no la mayor, de la población total, por otro, tampoco forma una unidad claramente integrada. El carácter de asalariado no tiene, sociológicamente hablando, el efecto unificador que le asignó Marx. La clase obrera es también una abstracción que exige una especificación de sus diversos sectores y capas. No cabe, por tanto, detectar en la sociedad un sujeto universal de acción política. La política se hace desde el Estado y por el Estado. La sociedad como totalidad actúa políticamente sólo una vez cada cuatro años para elegir, entre las listas propuestas, a las personas que van a ocuparse de los organismos rectores del Estado.

Para el marxismo, el sujeto de transformación revolucionaria es la clase trabajadora, a la vez que se desenmascara al Estado como instrumento de dominación de la clase dominante. En consecuencia, el objetivo de una política marxista es la conquista por la clase trabajadora del aparato del Estado, para destruirlo junto con su base económica, las relaciones capitalistas de producción.

En todo caso, el Estado obrero, imprescindible en la etapa de construcción del socialismo, sería cualitativamente distinto del Estado burgués que conocemos: en primer lugar, porque es el Estado de la inmensa mayoría de la población, y por tanto carecería de los elementos represivos que caracterizan hoy al Estado de una minoría de explotadores; en segundo lugar, porque el destino de este nuevo tipo de Estado obrero consistiría en irse disolviendo paulatinamente, según se avanzase en la construcción del socialismo.

Ni que decir tiene que socialistas y socialdemócratas no aceptaron nunca semejante concepción del Estado ni de la construcción del socialismo. En este punto únicamente Lenin ha sido en la teoría cabalmente marxista —véase «Estado y Revolución»—, aunque en el mismo momento de la toma del poder por los bolcheviques tuviera que desprenderse en la práctica de semejante concepción. En la cuestión capital del Estado, que en última instancia determina cualquier estrategia y táctica políticas, marxismo y socialismo nunca tuvieron el menor punto de contacto. Para las corrientes no marxistas del socialismo, la reducción marxista del Estado a mero instrumento de dominación de la clase dominante resultó siempre inadmisible. El punto crítico surge de nuevo en las relaciones entre «base económica» y «superestructuras» políticas e ideológicas, nocio-

nes totalmente insuficientes y ambiguas, por mucho que se insista en la «dialéctica» que las constituye y en la «autonomía relativa» de las superestructuras.

En la crítica del marxismo no son escasas las concomitancias entre socialistas y socialdemócratas, hasta el punto que desde un marxismo ortodoxo resulta tentador confundir ambas posiciones. Socialistas y socialdemócratas censuran el «objetivismo» y la metafísica historicista que se esconden en Marx; ponen de manifiesto la falsedad de los corolarios sociales que se desprenden de las «leyes» marxianas del desarrollo del capitalismo; rechazan los conceptos de Estado y de revolución que maneja el marxismo como totalmente inadecuados a la realidad de las sociedades occidentales contemporáneas. Los marxistas son conscientes de que en esta crítica participan socialistas, socialdemócratas y defensores claros del sistema establecido. Comprensible que se aferren a sus posiciones, poniendo de relieve la identidad de todos sus críticos. Frente al socialismo marxista, socialdemocracia y el llamado socialismo democrático no serían más que una y la misma forma de adaptación a los intereses de las clases dominantes.

También desde una posición socialdemócrata interesa identificar socialdemocracia y socialismo democrático. Cualquier diferenciación en este punto resulta desestabilizadora para la sociedad capitalista. Si no hay otra opción que un marxismo desfasado, la socialdemocracia podrá llevar a cabo satisfactoriamente su labor de integración de las distintas clases y capas en la sociedad capitalista avanzada. Mientras se mantenga el dilema marxismo o socialdemocracia, en que ambas partes están interesadas, difícilmente podrá cuajar una política socialista para el aquí y ahora, acoplada a las condiciones reales de nuestra sociedad. En el dilema marxismo o socialdemocracia, el socialismo se evapora, bien en una metafísica de la historia, que recalca el triunfo seguro en un futuro impreciso de la clase obrera, como compensación a sus sufrimientos e injusticias padecidas en la larga etapa en la que todavía no estarían maduros los «factores objetivos», cumpliendo así los servicios enajenantes de un «opio para el pueblo», bien se confunde con la ideología propia del capitalismo avanzado. En efecto, difícilmente cabe rebatir la denuncia marxista de identificación plena de las posiciones socialdemócratas a los intereses dominantes.

2. Objetivos estratégicos y filosofía de la historia

El socialismo que renace en Europa a partir de la década de los sesenta se caracteriza tanto por su desprendimiento crítico del marxismo como de la socialdemocracia. Frente al historicismo objetivista de los marxistas, su crítica retoma no pocos argumentos socialdemócratas; frente a la integración socialdemócrata en el sistema, su crítica suena a marxista. El socialismo democrático, a partir de la doble crítica del marxismo y de la socialdemocracia, mostrando en qué sentido estas posiciones son complementarias, se define por la determinación de una estrategia propia.

Para el marxismo, la construcción del socialismo implica dos etapas: 1. Conquista del poder por la clase obrera; 2. Edificación del socialismo, una vez suprimida la propiedad privada de los bienes de producción. En la primera etapa, el objetivo socialista primordial es la *organización unitaria de la clase obrera,* como instrumento revolucionario de la conquista del poder. Para la socialdemocracia, en cambio, no hay clase ni sector social con un objetivo político universal, es decir, que transcienda a los intereses particulares de cada grupo social. La universalidad que corresponde a la política, planteada desde la perspectiva del «bien común», y no simplemente desde los intereses específicos de un grupo o sector social determinado, se adquiere desde el Estado. El Estado aparece como el poder neutral, por encima de los diversos grupos sociales, que les obliga a respetar determinadas reglas de juego en sus relaciones mutuas. El Estado, con su poder soberano de decisión, constituiría la instancia que da sentido universal a lo que, desde la sociedad, no puede elevarse más allá de sus diferentes perspectivas particulares. La política que cuaja en los distintos grupos sociales no logra desprenderse de la particularidad de su origen, mientras no sea asumida y, por tanto, transformada desde la dimensión universal propia del Estado. Para la socialdemocracia, la estrategia se resume en el planteamiento de una política lo bastante integradora y universal como para movilizar a amplios y diferentes sectores sociales, de modo que se consiga ganar las elecciones. El objetivo estratégico principal de un partido socialdemócrata es *ganar las elecciones* y una vez en el poder, llevar a cabo una política que asegure la reelección.

Los socialistas en la formulación de una estrategia propia

y adecuada a las condiciones del capitalismo avanzado se distancian críticamente tanto de la mística de unidad de clase, como del electoralismo socialdemócrata. Ambas vías terminan en un mismo callejón sin salida. En vano puede esperarse el que se realice «la unidad de la clase obrera» como sujeto revolucionario de la gran transformación socialista, cuando el desarrollo del capitalismo conlleva una disminución progresiva de la clase obrera en relación con la población activa, a la vez que una diferenciación creciente en distintos sectores y capas. Lejos de producirse la proletarización mayoritaria y homogeneizadora que se anunció como consustancial con el desarrollo del capitalismo, hay que dejar constancia de una disminución cuantitativa y una diversidad cualitativa de la clase obrera. En la sociedad capitalista avanzada no se dan las condiciones mínimas imprescindibles para una movilización unitaria de la clase obrera. Este es el hecho incontrovertible que exige una reconsideración crítica de los supuestos fundamentales del marxismo.

A la altura de nuestra experiencia histórica, tampoco cabe hacerse demasiadas ilusiones sobre la posibilidad de llevar a cabo transformaciones profundas utilizando exclusivamente los mecanismos institucionales de la democracia representativa y del aparato del Estado. El reformismo socialdemócrata desde el Estado tiene su límite preciso, allí donde cuestiona relaciones capitalistas de producción. Reconocer estos límites como datos objetivos de la realidad que no se dejan modificar sin producir un caos de consecuencias catastróficas, significa integrarse ya, con mejor o peor conciencia, en los intereses y perspectivas de la clase dominante. Hay un realismo socialdemócrata que difícilmente puede distinguirse del realismo pragmático, gestor de los intereses establecidos. En política no hay virtud más alta que el realismo, mientras no se confunda realismo con la defensa plúmbea de los intereses dominantes. Imprescindible distinguir un realismo burgués de uno socialista; este último consiste en proseguir una vía hacedera en la defensa de los intereses de las grandes mayorías dominadas, lo cual comporta, necesariamente, chocar con el realismo de los dominantes y ser denunciado de utópico, irrealista o descabellado. Hay una lógica de los dominantes y una opuesta de los dominados: su expresión es la lucha de clases.

Ni el mito de la «crisis inminente del capitalismo» o de una «clase obrera, unida y fuerte», dispuesta a «expropiar a los expropiadores», ni el escepticismo realista de la socialdemocracia, cada vez representación más neta de los intereses

dominantes, pueden sacar a la izquierda de la crisis actual. En el horizonte no se divisa revolución salvadora; y, aunque no puede descartarse por completo, sabemos que sólo serviría para un relevo de élites, introduciendo nuevas formas de opresión. A su vez, desde el Estado y por el Estado, no cabe más que seguir los cambios reales de la sociedad, acoplando la legislación a las nuevas realidades. Una estrategia socialista se define por la *superación del estatismo,* tanto el revolucionario marxista —de lo que se trata es de conquistar el aparato del Estado para destruirlo eliminando su base económica, las relaciones capitalistas de producción—, como el socialdemócrata: respetando las reglas del juego llegar al Gobierno para, desde el aparato del Estado, ir transformando paulatinamente a la sociedad.

El supuesto básico de una estrategia socialista es lo que podríamos llamar su dimensión social: *en la sociedad, y no en el Estado, se encuentran las fuerzas capaces de cuestionar y transformar el orden vigente.* Según un movimiento social se politiza, es decir, se desprende de su base social, institucionalizándose como parte del aparato del Estado, pierde capacidad crítica y transformadora. La meta principal del movimiento obrero en el siglo pasado fue organizarse políticamente en un gran partido. En el siglo XX, y en los países capitalistas avanzados, esta meta ha sido ampliamente alcanzada, cuajando partidos obreros que han llegado a representar una buena parte del electorado. Ahora bien, la conquista del sufragio universal y la presencia de grandes partidos obreros —las dos metas principales del socialismo decimonónico—, no han traido consigo las consecuencias revolucionarias esperadas. En vez de cuestionar las relaciones capitalistas de producción —como esperaban horrorizados los patrones y llenos de júbilo los obreros—, las clases trabajadoras han acabado por integrarse en el sistema, resignándose a su condición de asalariado, dispuestas tan solo a apoyar una política reivindicatoria de mejoras salariales y sociales. Formalmente el gobierno es el gobierno de la mayoría; la mayoría son asalariados dependientes y éstos votan a partidos que no cuestionan —a lo sumo teóricamente— las relaciones capitalistas de producción. El capitalismo, con el sufragio universal y la existencia de grandes partidos obreros, ha adquirido legitimidad democrática.

He aquí el hecho incuestionable que cuestiona las estrategias socialistas del pasado: el partido político, en su versión leninista, lejos de ser la vanguardia revolucionaria de la clase trabajadora, se reduce a una secta, sin otra salida que el revo-

lucionarismo verbal o el terrorismo reaccionario. El partido político, en su versión socialdemócrata, termina convirtiéndose en parte del aparato del Estado, instrumento de integración de las clases dependientes. La socialdemocracia se define justamente por la reducción de su actividad al plano exclusivo de la política, es decir, del Estado y de sus aledaños. Nada le concierne que no tenga que ver directamente con las elecciones —único punto en el que se inserta política y sociedad— y con la actividad propia de las instituciones políticas en sus diversos niveles, local, regional y estatal, en las que ha conseguido colocar a sus representantes. El modelo socialdemócrata de partido corresponde a uno de cuadros, capaz de organizar campañas electorales eficientes y de seleccionar a un personal lo suficientemente especializado para que pueda ejecutar un trabajo útil en los distintos organismos públicos a los que tenga acceso. La política, como cualquier otra actividad social, necesita de profesionales curtidos. Los partidos políticos además de desempeñar determinadas funciones públicas, sirven de escuelas para políticos profesionales. En los regímenes autoritarios o dictatoriales, los políticos se hacen en la Administración pública; en los regímenes democráticos, en las luchas internas de los partidos. Lo que importa recalcar es que tanto el modelo leninista de partido como el socialdemócrata, convergen en la misma profesionalización del hacer político, cuestión de «revolucionarios profesionales» o de «políticos profesionales» que se dedican plenamente a la actividad política.

El socialismo es un movimiento social en el doble sentido de surgir de las contradicciones sociales y de aspirar a un orden social distinto. Su punto de partida es un análisis de la sociedad capitalista, que sigue definiéndose por la contradicción capital-trabajo. Cierto que esta contradicción ha tenido efectos sociales muy distintos de los previstos por Marx —de ahí la necesidad de un distanciamiento crítico de muchos de sus postulados y corolarios tácticos fundamentales—, pero, si se aprovecha la ocasión de una necesidad crítica del marxismo para negar la existencia de esta contradicción, el socialismo desaparece incluso como perspectiva. Una estrategia socialista es aquella encaminada a superar la contradicción capital-trabajo, es decir, en último término, el trabajo asalariado, y aunque no sea la contradicción fundamental de la que derivarían todas las demás, constituye, sin duda, el factor clave que impide en las actuales circunstancias una real democratización de la sociedad.

La incompatibilidad entre el modo de producción capitalis-

ta y el desarrollo de la democracia, es el principio que constituye al socialismo antes de Marx, en Marx y en las diferentes corrientes propiamente socialistas. Es el punto de intersección en que se encuentran los socialistas de las más variadas tendencias. Sólo los socialdemócratas tienden a separarse de este principio, rompiendo netamente con el socialismo democrático. Para la socialdemocracia, la contradicción capitalismo-democracia se atenúa de tal forma, que desaparece en su expresión más pura. Como hemos visto, la contradicción capital-trabajo se difumina en mero conflicto de intereses que se resuelve periódicamente con los contratos colectivos que firman patronos y sindicatos; la democracia se identifica con las instituciones políticas existentes y más que la perspectiva de su ulterior desarrollo, lo que importa es protegerla de los ataques de los extremismos de derecha y de izquierda.

El socialismo no ha cambiado de objetivo: la realización de la democracia, lo que entonces como ahora exige, como requisito previo, la superación de la contradicción capital-trabajo. Lo que sí se ha modificado es el nivel de conocimientos y de experiencias, desde el que plantear una estrategia coherente para tan ambicioso fin. Por lo menos, ya no cabe la menor duda de que esta meta no se alcanza en plazo breve, caminando derecho por un camino que se conoce de antemano. La vía revolucionaria desemboca, en el mejor de los casos, en un capitalismo de Estado; las reformas desde el Estado se agotan, allí donde se cuestiona relaciones capitalistas de producción. Ni la toma revolucionaria del aparato del Estado, ni el reformismo desde el Estado, parecen estrategias que pueden conducir al socialismo.

A la hora de definir una estrategia socialista, hay que tener muy en cuenta que el objetivo principal —superación de las relaciones capitalistas de producción— no puede alcanzarse directamente por la simple nacionalización o colectivización; por esta vía expeditiva se desemboca, bien en el caos contrarrevolucionario, bien en el colectivismo burocrático. Decisivo es librarse del prejuicio marxista de que la democratización de la economía es el requisito previo para cualquier forma de democratización en profundidad; de que mientras existan propiedad privada de los medios de producción y Estado burgués, no sería posible más que la reducción indefinida de los mismos mecanismos de dominación. Frente a cualquier simplificación «materialista», importa subrayar la interrelación complementaria de los distintos procesos de democratización, sin que quepa definir un centro o motor originario. La democratización

de la economía exige un ritmo apropiado de democratización social y política, lo que a su vez supone el que la mayoría de la población vaya adquiriendo un grado considerable de conocimientos y de responsabilidad individual. Pero también es cierto el camino inverso; sin una democratización de la economía, sin una responsabilidad colectiva en el puesto de trabajo, difícilmente podrá desarrollarse una personalidad autónoma y responsable. El desarrollo de la personalidad, la participación democrática en las órbitas sociales en las que directamente estamos implicados, la toma de decisiones en todo lo que nos concierne, sin que nos vengan impuestas desde arriba, son fenómenos interdependientes que se suponen mutuamente: no hay desarrollo autónomo y responsable de la personalidad de cada individuo, sin participación democrática, ni cabe que funcione la participación sin un determinado grado de desarrollo de la personalidad.

La democratización de la economía se revela como un momento parcial de un proceso más amplio y profundo de «democratización fundamental» en todas las órbitas sociales y a todos los niveles. Cierto que sólo se democratiza la economía, democratizando la sociedad, y no se consigue avanzar en este proceso general de democratización, sin ir democratizando la empresa como unidad de producción. Pero este aparente círculo vicioso se rompe en un movimiento en espiral, que va poniendo fuera de juego a las formas más despóticas de dominación.

El concepto clave no es el de propiedad de los medios de producción, ni el objetivo estratégico fundamental, el lograr su eliminación —este reduccionismo que apareció en su día como una de las grandes fascinaciones del marxismo, se ha revelado como su mayor debilidad—, sino el mucho más amplio y difuso de *dominación*. La propiedad privada de los medios de producción otorga, desde luego, un poder que supera con mucho el ámbito de la empresa —y, en este sentido, se manifiesta como cabalmente antidemocrático—, pero la estructura de dominación no se agota en la propiedad privada, de modo que su eliminación no comporta necesariamente la desaparición progresiva y automática de las demás formas de dominación. Las fuentes del poder rebasan la propiedad privada, muchas de sus formas no se canalizan a través de la propiedad y su eliminación, en determinadas condiciones, puede significar no sólo un trasvase, sino, incluso, un incremento de las formas de dominación.

El socialismo democrático, a diferencia del marxismo, no exalta las «relaciones de producción» para dar cuenta de la

totalidad de las relaciones sociales, ideológicas, políticas y económicas, sino que las incluye como un momento más de esta totalidad. Conviene sustituir la imagen arquitectónica de «base» y «superestructura», como si la sociedad fuese un edificio cuyo fundamento es la producción y las relaciones de producción determinasen los distintos pisos o superestructuras. Las relaciones entre los distintos subsistemas que forman la «totalidad» de una cultura —economía, ideología, instituciones políticas y sociales, etc.— valdría mejor representarselas como una estructura compleja de anillos engarzados, en los que si bien cabe distinguir elementos autónomos —cada uno de los anillos—, no por ello dejan de estar ensartados en unidades que se mueven a distintos niveles —movimiento en espiral—. Lo fundamental es librarse de la noción teológica de un centro, una base, un fundamento que daría cuenta de la totalidad.

Cualquier imagen no organizada en torno a un centro pierde el atractivo elemental que ofrece el «cosmos» como estructura racional, que se constituye y se explica a partir de un principio único, pero resulta tal vez más adecuada para dar una idea de la realidad en su desorganización constitutiva: toda noción de orden viene impuesta desde la subjetividad. Llamamos propiamente pensamiento teológico, al que reduce la complejidad caótica de lo real a un solo principio. Todo lo fructífero que, como hipótesis de trabajo, resulta la relación dialéctica entre modo de producción y tipo de organización social, se congela en mera teología de la historia, en cuanto se formula como principio único: teoría materialista de la historia. Superar esta dimensión teológica de la ciencia es el supuesto mínimo imprescindible para poder rechazar cualquier explicación monocausal de la totalidad y, con ella, cualquier estrategia que persiga un solo objetivo.

3. Una estrategia múltiple y sectorial

Las condiciones anteriores desembocan en una doble constatación, sólo en apariencia contradictoria. Por un lado, el socialismo se define por su objetivo fundamental, superar las relaciones capitalistas de producción. Por otro, el socialismo democrático contemporáneo se despega de toda filosofía de la historia, que la conciba como una «totalidad» que implica un fin en sí misma. La finalidad es una dimensión subjetiva que imagina el sujeto como perspectiva intencional para organizar su acción. El fin del socialismo es subjetivo y no está

garantizado por ningún proceso objetivo. Superar las relaciones capitalistas de producción no es el fin objetivo de la historia, pero, tampoco, su eterna conservación un condicionamiento insuperable de la racionalidad del hacer económico. La aparente contradicción se difumina, en cuanto se insiste en el carácter moral-subjetivo de la lucha por el socialismo.

Los siguientes elementos sirven para una definición del socialismo democrático de nuestros días:

1. No se basa ni propugna ninguna filosofía, cosmovisión o saber científico determinado, desprendido ya de los residuos ideológicos decimonónicos: ateismo radical, materialismo histórico, positivismo cientificista. Los socialistas provienen de distintas tradiciones ideológicas, concepciones científicas o valores éticos y estéticos: los une tan sólo un mismo afán de realizar la democracia, como exigencia de la dignidad del hombre. La libertad de pensamiento, la tolerancia frente a otras posiciones, que defendió la burguesía ascendente en los siglos XVII y XVIII, forman parte de su bagaje humanista. Se diferencia de las posiciones burguesas que también centran su aspiración en la libertad y felicidad de cada individuo, en que los socialistas, de acuerdo con la tradición democrática, no conciben la libertad sin la igualdad. El desarrollo de la libertad y de la igualdad cuestiona las relaciones capitalistas de producción. Mientras que para la burguesía, capitalismo y democracia se suponen mutuamente, para los socialistas, el desarrollo de la democracia exige la superación del capitalismo.

2. El desarrollo del capitalismo no ha implicado el tipo de homogeneidad social que haría viable la organización política de la clase obrera, como sujeto revolucionario. El capitalismo, por su propia dinámica, no crea la clase capaz y dispuesta a enterrarlo. Las contradicciones que conlleva el sistema se expresan a distintos niveles, en distintos sectores y, sobre todo, con distintos contenidos. En el grado más alto de abstracción, la contradicción básica no es la de posesión o no de los medios de producción, sino el carácter de dominante o dominado. Desde luego, que las relaciones capitalistas de producción están en la base de la dominación en amplios sectores, pero no en todos, en algunos no directamente y en otros no se perciben fácilmente las mediaciones. El hecho incontrovertible es que la colectivización de los medios de producción no es objetivo capaz de movilizar a amplios sectores sociales, sobre todo, mientras que detrás de la colectivización se intuya una economía estatalizada, con un dominio absoluto de la burocracia estatal.

Los socialistas parten de la diversidad sectorial de la socie-

dad moderna: gran y pequeña industria, agricultura latifundista, pequeños campesinos, servicios públicos y privados, etc. A las diferencias sectoriales se añaden las territoriales o regionales, con las modificaciones culturales correspondientes. Desde cada sector, diseñan la política propia de los grupos dominados. Las reivindicaciones sentidas, como el adversario de clase, tienen características especiales en cada sector. Esta especialidad, así como el surgir y estar identificado con los grupos dominados de cada sector, es el supuesto imprescindible para poder proponer objetivos que no se agoten en el sistema, reforzándolo funcionalmente. Las reivindicaciones específicas de cada sector han de dar paso a una salida alternativa y no sólo funcional para el sistema. Los socialistas reconocen lo inadecuado de un ataque directo y frontal contra las relaciones capitalistas de producción, intentando suprimirlas de golpe —vía revolucionaria, pero mantienen como su objetivo principal el ir transformándolas progresivamente.

3. En consecuencia, si en el pasado lo que definió una estrategia socialista fue el intento de concentrar a las clases dominadas en un solo objetivo —la conquista del poder político para desde el Estado eliminar la propiedad de los bienes de producción— lo que hoy caracteriza al socialismo es una *estrategia múltiple y sectorial*, con objetivos propios y métodos de lucha específicos para cada sector. Tenemos que librarnos de la idea de que cabe concebir una estrategia global que abarque a todas las clases dominadas, en los diversos sectores y niveles, con un objetivo único. Tal unanimidad sólo se alcanza contra regímenes autocráticos, que permiten centrar toda la lucha en un objetivo previo: la caída del tirano. Donde la pluralidad sectorial se apoya en instituciones democráticas, un proceso semejante de unificación resulta harto improbable. Lo cierto es que contra los perjuicios del pasado, una sociedad capitalista avanzada puede muy bien producir un determinado grado de bienestar y respetar un marco de libertades, sin que surja una aplastante mayoría combativamente hostil. Recurriendo a muy variados mecanismos de dominación y de enajenación, puede explicarse este hecho, pero el tipo de explicación que se dé no varía los resultados. Salvo en casos extremos, que caracterizan dictaduras o situaciones de crisis, es difícil que cuaje un movimiento por la democracia que abarque a toda la sociedad. La democracia, entendida como un juego de reglas formales, puede ser una aspiración generalizada. Un proceso concreto de democratización que pretende el desmontaje de determinadas estructuras de poder, sólo compete directamente a los que

sufren estas estructuras. El concepto mismo de democratización exige una estrategia sectorial. Una estrategia de democratización para las instituciones educativas o sanitarias, la empresa o la vida municipal, se plantea, en términos concretos, de manera muy distinta.

4. La noción de socialismo, como proceso de democratización, implica una estrategia múltiple y sectorial. Dos son las condiciones de éxito de esta estrategia. Primero, que brote realmente de cada sector y con fuerza suficiente para producir formas propias de organización. Si desde fuera o desde arriba se pretende inducir objetivos, o se controla las organizaciones actuantes desde un centro ajeno al sector, la capacidad de movilización será muy restringida. La descentralización real de la acción política es el supuesto básico de una política de transformación social. Sólo en la base y desde la base, se produce una lucha por cambios reales; en la cúspide, las elites que no sientan una fuerte presión desde la base, se inclinan a encontrar un acomodo que las permita sobrevivir en su situación de privilegio. Segundo, que las aspiraciones sentidas colectivamente por los grupos dominados, transciendan el horizonte del orden establecido. Hay reivindicaciones que pueden encajar perfectamente en el sistema, por ejemplo, salariales, y otras que lo cuestionan, participación en la dirección de la empresa. Una política no se define como socialista, simplemente, porque cuente con un apoyo generalizado, sino porque cuestiona al sistema ofreciendo alternativas concretas, que representan un grado más alto de convivencia democrática. Principio básico de una estrategia socialista es ir cercando, dando los rodeos que fuere preciso, las relaciones capitalistas de producción, creando modelos alternativos de empresa y, sobre todo, democratizando las existentes. Democratizar la economía, he ahí el empeño que define a los socialistas.

5. La democracia interna, entendida como posibilidad real de participación de cada uno de los miembros del partido político en la elaboración de los programas y en la selección de los equipos dirigentes, es el supuesto mínimo y, desde luego, no suficiente para una participación real en la vida política del país. Para un partido como el socialista, que quiere extender la participación real a todas las esferas de la vida económica y social, predicar con el ejemplo, ampliando al máximo en su interior los canales de participación real, no sólo es un imperativo mínimo de coherencia y credibilidad, sino, sobre todo, la condición imprescindible para impulsar, en los sectores sociales y estatales en los que el partido tenga influencia,

una política genuinamente democrática. No cabe que un partido burocratizado, que ha eliminado en su interior toda crítica y toda participación, pueda servir de instrumento de democratización de la sociedad. Burocratización creciente y poda de las metas socialistas son procesos que se fortalecen mutuamente. Cuanto mayor el poder del aparato, menor el carácter socialista de la política que lleva a cabo.

Al socialismo, como ampliación y profundización de la democracia, no se llega más que ampliando y profundizando la democracia. Mientras los socialistas reclaman cada vez más democracia, los burócratas de toda calaña que se refugian en los partidos insistirán en la necesidad de fortalecer la «unidad» y la «disciplina», dos conceptos que provienen de la organización burocrática por antonomasia, el ejército. El fortalecimiento y desarrollo de la democracia interna, dentro de los partidos socialistas es la cuestión clave de la que depende en buena parte la posibilidad de plantear y llevar adelante una política socialista. El carácter socialista de un partido que se llama socialista, se juzga por el tipo de organización: un «partido de nuevo tipo», descentralizado, para poder llevar a cabo una estrategia sectorial, y con participación real de los militantes, para que su apertura a las clases dominadas, produzca una ósmosis entre sociedad y partido, que cuaje en reivindicaciones colectivas que, por su afán democratizador, transciendan al orden establecido. Si no se consigue un nuevo tipo de organización que supere la congelación burocrática que hizo fracasar, como instrumento de democratización a los partidos leninistas y socialdemócratas, el socialismo se disolverá en pura ideología legitimadora de nuevas relaciones burocráticas de poder.

6. Una política socialista no se agota en la actividad de un partido más o menos ligado a su base social. Una estrategia sectorial exige no sólo partidos descentralizados, sino una multiplicidad de organizaciones. El sindicato es la primera organización obrera que respondió a esta necesidad sectorial. Sin un sindicato socialista no hay modo de llevar adelante una política socialista. Ahora bien, un sindicato no es socialista simplemente porque se sienta ligado a un partido que se llame socialista. Un sindicato es socialista si en su política reivindicatoria no pierde de vista la meta de una sociedad socialista, es decir, cuando no se agota en la mera función negociadora de los salarios, condiciones de trabajo, así como los lineamientos generales de una política social. Un sindicato no socialista reduce su actividad a negociar con el empresario, con lo que, en último

término, fortalece el orden social dado, que justamente se basa en la distinción permanente entre obrero y empresario, proletario y capitalista. Si el sindicato meramente reivindicatorio constituye un instrumento fundamental del capitalismo avanzado para integrar a la clase obrera, al sindicato socialista, sin desdeñar la lucha reivindicatoria, le compete una función de primer orden en la democratización de la economía, tanto estableciendo modelos alternativos, como luchando por la transformación democrática de la empresa: cogestión obrera como primera etapa de la autogestión. La organización democrática de la educación —universidades populares— y del ocio —deportes, viajes— como experiencia de convivencia democrática, son actividades sindicales tan importantes o más, que las meramente reivindicatorias. Hay que formar democráticamente al trabajador que va a regir democráticamente la empresa. Donde no exista un sindicato fuertemente organizado y combativo, una política realmente socialista es pura ilusión retórica.

Una advertencia final, no por obvia menos imprescindible. Si en las condiciones actuales del desarrollo del capitalismo, una política socialista, es decir, una política de democratización real, no puede ser más que sectorial, no toda estrategia sectorial es, por ello, sin más, socialista. El Estado mismo canaliza su actuación a través de distintos sectores o departamentos, de modo que toda política estatal es siempre sectorial. La sectoralización es un factor más del desarrollo capitalista, y puede ser aceptada como una realidad propia de este modo de producción, de la que, consecuentemente, hay que partir, o bien puede utilizarse como un medio para intentar escamotear la contradicción capital-trabajo.

Lo que caracteriza a la política burguesa, incluida la socialdemócrata, es su sectoralización desde la perspectiva del Estado y para encubrir la contradicción capital-trabajo. En cambio, los socialistas que pretenden, justamente, superar esta contradicción, parten de la sociedad, de las clases dominadas, en verdad, fragmentadas y sectorializadas, para apoyar, desde cada uno de estos sectores, la lucha por la democratización. El orden social y el aparato institucional del Estado, lejos de aparecer como coordenadas constantes en el interior de las cuales hay que resolver los problemas planteados, son para los socialistas objetivos que transformar. Desde este empeño, los distintos sectores sociales se distinguen por el grado de conflictividad consciente, por su capacidad de organizarse democráticamente y de responder con tenacidad e inteligencia a las

presiones y ataques de los centros sociales de poder, a través del aparato institucional del Estado.

En tales conflictos, los socialdemócratas se colocan al lado de las demás fuerzas de orden, mientras que los socialistas se vinculan con el grupo social dominado, haciendo suyos sus objetivos democratizadores. Una política puede calificarse de cabalmente socialista, si ha echado raices en un amplio grupo social, cuenta con un apoyo mayoritario en la base y sus objetivos trascienden al sistema. Base social y objetivos, y no simplemente el carácter sectorial, definen a una política socialista.

Cualquier partido socialista en cuanto llega al poder, no hará en el mejor de los casos, más que reformismo socialdemócrata. Nada cabe tener contra el reformismo; son muchas y muy positivas las reformas que cabe llevar a cabo dentro de las coordenadas socialdemócratas. La cuestión no consiste en que un partido socialista en el poder no haga más que reformismo socialdemócrata —no puede hacer otra cosa y si lo hace bien merece todos los respetos—, sino si se conforma con esta dimensión exclusivamente estatal de la política, integrándose por completo en el sistema, o si, por el contrario, mantiene su vinculación con los esfuerzos democratizadores de las clases dominadas en los distintos sectores, preocupándose, sobre todo, de ampliar su base social. El quid radica en que desde el poder, sólo puede llevarse a buen ritmo una política de reformas en profundidad, si se cuenta con un amplio sostén popular. Si un partido socialista renunciara a penetrar en los distintos sectores sociales, reduciéndose a un aparato meramente electoral, entonces disminuiría muy rápidamente, hasta desaparecer, su capacidad reformadora desde el Estado. La paradoja del reformismo consiste en que sólo se consiguen reformas importantes desde el Estado, si la presión social es tan fuerte, que las clases dominantes las aceptan como un mal menor. Reformar desde el Estado implica poder presionar desde la sociedad.

Al insistir en el carácter social —y no estatal— de una estrategia socialista, al propugnar la política que se ha llamado de «penetración en el tejido social», no ignoramos la función coordinadora del partido, ni el hecho obvio de que las reformas precisan de disposiciones jurídicas, que dictan las instituciones pertinentes del Estado. Hemos remachado tan solo en la parte más débil del socialismo español: su presencia en la sociedad está muy lejos de corresponder al número de sus votantes. Pero que duda cabe, que la multiplicidad de estrategias en los distintos sectores hace necesario, no sólo un partido descentralizado, presente en cada sector, sino, también, un ór-

gano central de coordinación de los frentes en lucha. La organización democrática descentralizada, pero con órganos de coordinación, es el instrumento adecuado que hace posible, tanto la penetración en la base, siempre sectorial, y el planteamiento de una política que sólo resulta eficaz, si sabe detectar prioridades y conectarlas en un plan de conjunto. Descentralización y coordinación son dos momentos constitutivos de un mismo proceso de avance democrático. Democratizar en éste o aquél sector es, desde la perpectiva global del partido, requisito para una segunda etapa de democratización o para alcanzar objetivos similares en otros sectores. Justamente, la fragmentación sectorial de la sociedad capitalista hace imprescindibles organizaciones intersectoriales, que como el partido político, coordinen una política para el conjunto.

Importa dejar bien claro, que una política de reformas desde el Estado, si se reduce a un mero aparato electoralista, pierde toda capacidad de presión y, con ello, la posibilidad de llevar adelante reformas de envergadura. Nadie se llame a engaño, no basta estar en el Gobierno para poder realizar reformas que cuenten. Si un partido socialista en el gobierno apenas se distingue de otro partido burgués de centro-izquierda, perderá pronto los votos de izquierda, sin avanzar mucho por la derecha. Hacer política de derechas con una retórica de izquierdas, lleva a una pérdida rápida de credibilidad. Intentar desde el Gobierno hacer política de izquierdas, sin haber calado en los distintos sectores sociales, sin contar con el apoyo amplio y decidido de las clases dominadas, con un grado considerable de concentración y de capacidad de auto-organización, es simple aventurismo ilusorio. No hay alternativa a una política de desarrollo social y de toma de conciencia ciudadana. Política socialista se hace en la sociedad y para la sociedad, y sólo subsidiariamente desde el Estado.

CAPITULO VIII

REFORMA POLITICA Y SOCIALISMO

Mientras duró la dictadura, apenas pudimos darnos cuenta de la situación crítica por la que pasa y sigue pasando la izquierda europea. Todos los afanes se centraron en la lucha contra el régimen; meta prioritaria indiscutible no podía ser otra que recobrar la libertad. En este común empeño, desaparecían las discrepancias entre los grupos y los partidos, no quedando más que dos diferencias nítidas: en la izquierda, entre los que propugnaban la lucha armada y los que la repudiábamos; en el país, entre franquistas y antifranquistas, aunque luego, en la práctica, las matizaciones en el grado de franquismo o de antifranquismo fuesen considerables.

La libertad que puede ofrecer una sociedad capitalista al nivel de desarrollo de la nuestra, llegó por los más inesperados conductos. Perdimos la gran batalla de derrocar al régimen; el dictador murió en olor de carisma, rodeado de toda la pompa del poder. Contra los pronósticos de la izquierda, el régimen ha logrado mantener la continuidad institucional, dando prueba de una enorme flexibilidad evolutiva. La Monarquía que restauró Franco se ha convertido en Monarquía constitucional, arropando a un Estado de derecho, legitimado democráticamente. Los que un día fueron servidores fieles de la dictadura, se presentan hoy como liberales reprimidos o demócratas moderados. La bandera de la libertad ya no es enseña exclusiva de la izquierda. Ahora es preciso discernir de qué libertad se trata. Y, en la ambigüedad de las grandes palabras, cada cual hace su aliño.

En las décadas negras de los cuarenta y de los cincuenta,

difícilmente podíamos imaginar cómo sería España sin Franco. Si entonces hubiéramos podido contemplar por un agujerito la realidad de hoy, hubiéramos saltado de alegría; ahora que la tenemos ante nuestros ojos, no deja de prducirnos un desencanto amargo. Tendremos a desviar la vista de las cosas importantes que han cambiado, para fijarla en lo mucho que ha sobrevivido del pasado. El hombre de izquierda, lo es porque no se reconcilia con lo existente.

Amargura, en parte, que resulta del descubrimiento vivencial de la continuidad histórica. El régimen de Franco, la antítesis cabal de cualquier sistema democrático, ha desembocado con suavidad y a su aire, en lo que todos empezamos a llamar una democracia. No es plato fácil de digerir para aquellos que soñamos con la caída del régimen, con un amanecer limpio después de la larga noche del franquismo. En teoría, lo supimos siempre: ni en la biografía personal ni en la historia de un pueblo, puede empezarse de cero. Pero una cosa es el saber teórico, y otra muy distinta, el experimentar, día a día, esa amalgama de lo nuevo y de lo viejo, que forma el verdadero entramado de la Historia.

Para los que nacimos con la guerra civil, la mitad decisiva de nuestras vidas ha consistido en un esperar, indignado o laborioso, resignado o activo, ese día fausto en que recuperaríamos la libertad. Hemos tenido que esperar a que nuestro pelo encaneciera para poder manifestar públicamente una opinión política. Nada tiene de particular que, en tan larga espera, nos hayamos agarrado a no pocas falsas ilusiones, fabulando sin cuento. De alguna manera, teníamos que sobrevivir.

Ya no cabe seguir aguardando ese día feliz en que la libertad llegaría triunfante y esperanzadora. Se nos ha evaporado como lo que era, ilusión de adolescente. La realidad política y social que hoy vivimos, con pequeñas mudanzas, bien podría durar largo. No pocos de los que tienen bien sentada la cabeza, la creen única meta realista. Los peligros de involución se perciben tan ostentosamente, que podemos darnos con un canto en los dientes, si logramos aproximarnos, en instituciones y formas de vida, al resto de Europa. No nos empeñemos en buscar tres pies al gato: lo que no ha podido conseguir la izquierda italiana o francesa, en lustros de lucha, no lo vamos a alcanzar nosotros, sin organización y sin experiencia, saltando por arte de birlibirloque etapas históricas.

Entre un voluntarismo ciego y un realismo, cada vez más acomodaticio, el hombre de izquierda se tambalea en el aire. No es la primera vez que anda por las nubes, aferrado a su

utopía y ajeno por completo a lo que pasa a ras del suelo. Marx nos fascinó por el esfuerzo gigantesco de vincular la utopía de la libertad a los datos concretos del mundo real, tendiendo un puente «dialéctico» entre el análisis económico y la metafísica del «hombre total» y de la «sociedad comunista». Ahora sabemos que este puente, tal como lo construyó Marx, no resulta transitable, pero en la necesidad de tenderlo, en el afán de mantenernos a la vez fieles a la realidad y a la utopía, cualquier hombre de izquierda se descubre su discípulo.

Los españoles vivimos aislados, recluidos en el franquismo; pero no menos aprisionada ha vivido la izquierda europea, confinada en su propia jerga, ignorante de todo lo que no venía garantizado con el marchamo de marxista. Petrificada en categorías que ya han cumplido más de un siglo, hasta hace poco se indignaba ante la constatación —que no por trivial, es menos cierta— de que el mundo actual poco se parece al que criticaron los clásicos del socialismo. En algunos aspectos ha mejorado sensiblemente —nivel de vida y derechos de los trabajadores—; en otros, destrucción ecológica y concentración de poder, ha empeorado hasta límites, hasta hace poco, inconcebibles. Urge señalar con nitidez en qué radican las diferencias y qué significan estos cambios cualitativos, desde la perspectiva de nuestra utopía: la realización de la libertad. Para ello, hay que atreverse a pensar otras ideas y leer otros libros, que los que hasta ahora han constituido el arsenal del socialismo.

Nunca antes el hombre de izquierda había sentido un abismo tan grande entre su afán de conseguir una sociedad libre y humana, y la falta de conocimientos y de medios para avanzar hacia esta meta. El desencanto amargo que vive la izquierda española corresponde al que experimenta la europea. En ambas, y de manera cada vez más alarmante, se tiende a recubrir la propia indigencia teórica con la ortodoxia más dogmática, o el oportunismo más desvergonzado. Los cínicos, con su retórica izquierdista, no intentan más que colgarse al carro del poder, y los dogmáticos se esfuerzan por encontrar, en última instancia con las armas en la mano, una salida a este oscuro laberinto. Existe una relación innegable entre la impotencia vivida de la izquierda y el aumento de acciones terroristas. Pero la violencia de los pequeños grupos refuerza tan sólo las tendencias reaccionarias del capitalismo avanzado, legitimando, en último término, la violencia que rezuma el sistema.

El lector que compare la aspiración del socialismo con la realidad circundante no podrá sentirse muy optimista. En los capítulos anteriores nos hemos alargado en separar un socia-

lismo posible para nuestro tiempo de sus formas dogmáticas u oportunistas. El socialismo es un producto que se vende bien y hay que prestar atención para no comulgar con ruedas de molino. Ni marchamos inexorablemente hacia el socialismo —la historia no es un tren que circula por una vía construida previamente y con dirección fija—, ni está al alcance de nuestra mano, y además posiblemente implica su realización algunas contradicciones graves. Nos sirve, en todo caso, para enjuiciar críticamente el orden establecido y, sobre todo, para dar una perspectiva a la lucha de las clases dominadas. Para algunos, la lucha por la libertad de los demás es condición del desarrollo de la propia libertad, y no pueden renunciar a esta lucha sin perder el sentido de la propia dignidad. Para el que piense que puede muy bien realizarse libremente sin la libertad de los demás, o que la libertad de uno conlleva necesariamente la esclavitud de los otros, concibiendo la historia como la lucha de un puñado de hombres libres, que por ser capaces de arriesgar su vida dominan a los que tienen «alma de esclavos», o los que no necesitan para nada de esta «metafísica» o «retórica» de la libertad para gozar su vida, el socialismo no deja de ser un concepto bastante romo, y hasta peligroso.

1. Balance de la reforma

Con la aprobación de la nueva Constitución española en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, se ha cerrado una etapa importante de la historia contemporánea de España. Lo que ha ocurrido —y, sobre todo, lo que no ha ocurrido— en los cuatro últimos años, es decir, el modo singular como hemos arribado a un régimen democrático de factura occidental, enmarca ya el acontecer posible de las próximas décadas. Intentar un balance, tomando buena cuenta de lo conseguido, pero también de lo definitivamente perdido —la historia es también una serie de ocasiones perdidas—, tiene en este momento dos objetivos políticos claros. Primero, frente al repicar de campanas de la España oficial, conviene insistir en el capítulo olvidado de los costos de la reforma. Segundo, únicamente a partir de un análisis crítico de la experiencia vivida cabe definir nuevas metas para el futuro.

Punto de partida para una consideración global del proceso de cambio político sigue siendo la ya vieja polémica en torno al dilema ruptura o reforma. Estos dos conceptos resultan claves como eje de referencia de las aspiraciones y de la estrategia

de la «oposición democrática» y del Gobierno. El concepto de reforma es el pivote fundamental sobre el que gira toda la concepción política del primer Gobierno Suárez. El de ruptura, el que da coherencia a la estrategia de la oposición democrática. Los fines de estas dos estrategias coinciden *formalmente* en el establecimiento de una «democracia moderna». Los contenidos, sin embargo, son fundamentalmente distintos, en cuanto en política el modo de llegar a una meta condiciona y define su contenido.

No cabe duda que el concepto de reforma que aporta Suárez lo aproxima al de ruptura que emplea la oposición, en cuanto implica una misma ruptura de legitimidad con el mismo fin de establecer un régimen democrático. Pero no por ello desaparecen diferencias importantes. La reforma suarista supone ruptura de legitimidad, manteniendo la legalidad vigente. La ruptura democrática, ruptura de legitimidad y de legalidad, abriendo un proceso realmente constituyente, que conforme de nueva planta todas las instituciones que regulan la convivencia política.

La «Ley para la Reforma política», con su ruptura de legitimidad manteniendo, y aun reforzando la legalidad vigente, constituye el instrumento adecuado para, conservando las mismas estructuras de poder y dentro del mismo orden institucional, intentar legitimarlos democráticamente. En la misma Ley que se establece el principio de legitimidad democrática, se ratifica la vigencia del orden constitucional del régimen franquista —la nueva Ley tiene rango de Ley Fundamental—, lo que implícitamente comporta el reconocimiento y ratificación de las anteriores Leyes Fundamentales en todo lo que no venga derogado por la última Ley.

Se comprende la reforma si se pondera en todo su valor la ruptura de legitimidad que implica, pero también la continuidad legal, como expresión de las mismas estructuras de poder que pone de manifiesto. El gozne institucional que vincula el viejo y el nuevo régimen, el factor que hace posible la pervivencia de una legalidad sin legitimidad, impidiendo así se abra un proceso realmente constituyente, es la forma monárquica del Estado, es decir, el Rey como institución, como poder y como persona. Cuando la Ley para la Reforma política introduce el principio de legitimidad democrática, rompe de hecho con un sistema político para el que este principio resulta incompatible e inasimilable. Cuando la misma Ley, al elevarse al rango de Ley Fundamental, ratifica la vigencia de las anteriores

Leyes Fundamentales, lo que en el fondo está ratificando es la forma monárquica del Estado.

Hay que distinguir, por tanto, nítidamente entre el concepto de «proceso constituyente» que maneja la oposición y el de «reforma constitucional» que introduce la Ley para la Reforma política. El primero supone una ruptura, tanto de la legitimidad como de la legalidad franquistas, iniciando un proceso en el que la soberanía popular remodelaría de nueva planta todas las instituciones del Estado. Un Gobierno provisional, en el que estuvieran representadas todas las fuerzas democráticas, convocaría un referéndum sobre la reforma monárquica o republicana del Estado, así como elecciones a una Cámara constituyente, encargada de confeccionar una nueva Constitución. La «reforma constitucional» por los mismos mecanismos que se establece, prejuzga los principios básicos del nuevo ordenamiento constitucional: forma monárquica del Estado, bicameralismo, etc.

Ahora bien, el que no se haya abierto un proceso realmente constituyente, ni el que las Cortes elegidas el 15 de junio fuesen constituyentes, no quiere decir que no estuvieran capacitadas para redactar una Constitución, como el modo específico de la «reforma constitucional». Nada se entiende del proceso de cambio político si no se tiene claro que el hecho de hacer una Constitución no erige sin más a unas Cortes en constituyentes, ni convierte a la reforma en ruptura.

El proceso de cambio político ha transcurrido por los angostos cauces que trazó la Ley para la Reforma política. En el referéndum del 15 de diciembre de 1976, la oposición democrática que aún operaba con el concepto de ruptura, optó coherentemente por abstenerse: el «no» la habría confundido con la extrema derecha continuísta. Los resultados de la abstención —22,28 por 100, casi los normales en este tipo de consulta— mostró claramente que una estrategia de ruptura contaba con un apoyo social muy minoritario y que la mayoría del país, condicionada sin duda por la inercia del poder constituido, el monopolio informativo, pero también el afán generalizado de transición pacífica hacia la democracia, aceptaba el camino de la reforma que ofrecía el Gobierno.

A mediano plazo, la ruptura hubiera sido facilitada si la Corona, ciega, hubiese intentado mantener a todo trance las instituciones políticas del régimen que la restauró; pero, aun en caso tan improbable, semejante revolución política no hubiera dejado de implicar traumas y riesgos graves. La experiencia de la República y de la guerra civil condiciona el comportamiento de

la izquierda, temerosa de cualquier confrontación, que sabe que tiene perdida de antemano, pero también el de la derecha, que algo ha aprendido de sus errores pasados. Desde el momento que el Gobierno mostró su voluntad firme de llevar adelante la reforma, con el fin de consolidar una Monarquía parlamentaria que respetase los derechos fundamentales de la persona, así como el principio democrático de legitimación, queda obsoleto el dilema ruptura o reforma. Desde comienzos de 1977, el objetivo prioritario para la oposición democrática fue negociar con el Gobierno los pocos cabos sueltos que dejaba la Ley para la Reforma política.

Algunas condiciones habrían de cumplirse para que la oposición pudiera aceptar la reforma, otorgando legitimidad democrática a las fuerzas políticas provinientes del franquismo: amnistía de los presos políticos, libertades individuales y colectivas, legalización de todos los partidos políticos sin exclusiones, una ley electoral aceptable. Resultaría del mayor interés un estudio pormenorizado de los primeros meses de 1977 —el período clave de la reforma—, en el que la presión popular es considerable, obligando al Gobierno a ir cediendo paulatinamente en estos puntos, pero sin perder nunca la iniciativa.

Necesario reconocer que en aquellas fechas el margen de acción de la oposición fue harto menguado. Los partidos políticos, incluyendo a los dos únicos con tradición histórica y prestigio nacional, el PSOE y el PCE, apenas tenían implantación social. La ensalada de siglas de partidos recién fundados, que por lo general no pasaban de ser un grupo de amigos con ambiciones, aún hacía mayor la confusión, que el Gobierno manejaba a su antojo. Si a esto se suman las luchas internas de la oposición —interesado cada partido en perfilarse como la fuerza política hegemónica— y el pulso débil de la sociedad española, excepto en los países en los que la dictadura había exacerbado la cuestión nacional, cabe muy bien explicarse el que la reforma transcurriese por los cauces previstos.

La reforma obligó a la oposición a negociar en clara situación de inferioridad. El Gobierno tenía el poder, un poder centralizado, macizo, como proviniente, sin apenas modificación del régimen anterior, que no limitaba más que la voluntad, entonces todavía soberana del Monarca, y hasta cierto punto la opinión pública. En aquellos meses, la prensa desempeñó un papel fundamental en la canalización de la opinión pública hacia la reforma democrática. En cambio, la oposición, incapaz y temerosa de una política de movilización de masas, no tenía otra carta

que jugar que la amenaza de no participar en las elecciones generales que preparaba el Gobierno a su medida.

Todos los ases están en manos del Gobierno. La única baza que tiene la oposición a su favor es la legitimación democrática que encarna. Sin el consentimiento y autorización del Gobierno, la oposición nada puede conseguir. Pero también, sin el consentimiento de la oposición, sin su beneplácito, ninguna decisión del Gobierno está legitimada democráticamente. El Gobierno tiene el poder. La oposición, el principio de legitimidad. Los mecanismos de la reforma obligan a ambas partes a entenderse: es lo que llamamos «consenso».

Una cosa parece clara: en 1976-77 eran escasísimas las probabilidades de que se produjera una ruptura como en 1931. El factor determinante de la restauración y de la reforma en la segunda mitad de los años setenta, hunde sus raíces en los acontecimientos de los años treinta. El resultado de la guerra civil y los cuarenta años de dictadura enmarcan el cauce posible de la reforma. La desaparición física del dictador no conlleva el hundimiento de la clase dominante. La correlación de fuerzas se inclina claramente hacia la derecha: la ruptura resultó inviable.

Lo grave ya no es tanto que las cosas hayan ocurrido así —propendemos a considerar como la única posibilidad la que terminó por imponerse—, sino que los partidos representados en las Cortes se empeñen en hacernos creer que, en el fondo, con reforma o con ruptura, se hubiera llegado a los mismos resultados. Para mantener semejante conclusión es preciso reducir la perspectiva democrática a sus aspectos meramente formales, olvidando de repente las implicaciones sociales y económicas de un proceso real de democratización.

La reforma ha resultado mucho menos conflictiva y traumática, pero deja intocados todos los problemas cuya solución puede cuestionar los intereses de la clase dominante. En la práctica de estos últimos meses el concepto de democracia se ha visto reducido cada vez más a sus aspectos puramente formales, con la sola función de legitimar las estructuras de poder dadas. En cuanto, por el funcionamiento normal del proceso democrático, se plantean abiertamente las reformas sociales y económicas mínimas imprescindibles, la democracia conseguida por tan amplio consenso podría saltar en mil pedazos. Ignorarlo puede ser de una ingenuidad suicida.

Ruptura y reforma conllevan ventajas e inconvenientes, riesgos y posibilidades. El que haya terminado por imponerse la vía reformista facilita el ponderar sus evidentes ventajas: la

transición pacífica, la reducción de conflictividad, la ampliación del consenso son bienes indiscutibles. Pero también es preciso mencionar el alto precio pagado —se ha desaprovechado la oportunidad única del fin del franquismo para sentar la democracia sobre bases sólidas—, así como la amenaza que se divisa en el horizonte: un proceso continuo de erosión de las instituciones democráticas, incapaces en los estrechos márgenes establecidos, de dar solución a los problemas planteados. A largo plazo, el continuismo reformista pudiera constituir el factor más claramente desestabilizador, incluso de una democracia concebida en sus aspectos más formales.

La «operación democracia» se cierra con un éxito rotundo. Se ha logrado legitimar democráticamente el posfranquismo, manteniendo la más estricta continuidad legal, y lo que es más importante, la presencia ininterrumpida en el poder de los mismos grupos sociales y políticos que cuajaron en la última etapa del régimen anterior. Al franquismo sin Franco, que en los primeros meses de 1976 hacía tan triste figura y se sentía tan vulnerable a la búsqueda de un modelo «español» de democracia, el equipo Suárez ha logrado legitimarlo dentro del único modelo de democracia hoy válido. Se ha conseguido la meta que a muchos parecía imposible: el poder continúa en las mismas manos y además legitimado democráticamente.

Ahora bien, tanto como la continuidad, importa subrayar las diferencias. El franquismo sin Franco, dado el carácter predominantemente personal del régimen fenecido, ya es otra cosa que el franquismo con Franco. Si del franquismo eliminamos el poder personal, el tono conservador autoritario, la cerrazón mental, la corrupción como sistema, lo que queda es pura y llanamente la derecha como clase social y como forma de vida, que a menudo entusiasmada, a veces a regañadientes, apoyó fielmente a la dictadura durante cuarenta años. Evidentemente, el «franquismo sin Franco» no es más que una perífrasis para decir derecha, que empleamos tan sólo los que no podemos ni queremos olvidar quién fue cada cual en el régimen anterior.

Pues bien, esta derecha española, tan primitivamente egoísta, soberbia y levantisca, con más de un siglo de monopolio del poder, con una brevísima pausa que nos llevó a una guerra civil, se ha colado en los odres democráticos para continuar mandando. Y no se diga que el tonel no cambia el vino, cuando es exactamente lo contrario: la forma condiciona y define el contenido, y no sólo en política. Efectivamente, siguen mandando los mismos, pero no es lo mismo un Gobierno de derechas, autoritario y cerril, que uno que se pretende democrático. De

nada sirve negarse a la evidencia y empeñarse en que aquí no ha pasado nada, cuando la aceptación por la derecha del juego democrático es un hecho en nuestro país radicalmente nuevo, cuya importancia tampoco cabe minimizar.

2. La democracia pactada

Socialistas y comunistas, partiendo de un modelo rupturista para el posfranquismo, terminaron por aceptar la vía reformista. Durará décadas la polémica sobre si esta decisión fue correcta o no. Según sea la experiencia habida con el régimen salido de la reforma, se irán modificando los argumentos a favor o en contra. Un hecho parece, sin embargo, claro: salvo en el País Vasco, en ningún otro sitio surgió una presión social, con capacidad de movilización suficiente, de signo claramente rupturista. Si hubiera existido realmente, los partidos de izquierda no hubieran conseguido el frenarla. Pues, así como los partidos políticos no están en condiciones de poner en marcha grandes movimientos de masas, tampoco pueden domeñarlos si brotan con suficiente fuerza. La ruptura no se produjo porque la sociedad española no luchó abiertamente por ella, y los partidos políticos tuvieron que doblegarse a este hecho. Haberlo reconocido así, es para muchos prueba de su realismo político y la mejor garantía para una transición pacífica; para algunos, en cambio, prueba del oportunismo que caracterizaría a la clase política española.

Dejando aparte origen y significado científicos, la expresión «clase política» se generaliza en la última década del franquismo para designar al grupo de personas con puestos de responsabilidad política, incluyendo a los que los han ocupado o que pueden ocuparlos. Faltando los instrumentos democráticos de selección —partidos, opinión pública, elecciones, vida parlamentaria— los mecanismos de acceso a la clase política en el franquismo configuran una de las cuestiones más enredadas, pero también más sugestivas, que pueda plantearse el estudioso de este período. Parece claro que los funcionarios públicos fueron la fuente principal de reclutamiento. No en balde, uno de los rasgos definitorios de este tipo de regímenes es la tentación continua de confundir lo político con lo administrativo. Pero al reducir la política a mera administración —sueño permanente de la derecha—, la Administración se contagia de la arbitrariedad de un poder no controlado, lo que suele acabar en un triste despertar.

En el franquismo, para hacer política, en vez de inscribirse en el partido oficial que, aunque único y sin la menor autonomía, a los ojos del dictador seguía teñido de la mácula de lo político, lo mejor era comenzar por una brillante oposición a un cuerpo de prestigio —abogacía del Estado, cátedra, diplomacia— comportándose luego profesional y políticamente —el considerarse apolítico constituía un punto a favor— de tal forma, que se consiga ser cooptado desde el poder. Para lograrlo, además de procrear un buen número de hijos —ninguna otra clase política ha contado con tantos padres de familia numerosa, con la excepción de ese puñado de castos varones, también especialidad del régimen—, había que saber arrimarse al padrino apropiado, desde luego miembro de la Santa Obra, la Santa Casa o, como mínimo, la Secretaría, así a secas, sin aureola, entre las que recaía, alternativa o proporcionalmente el reparto de cargos.

Las primeras elecciones generales han modificado el modo de acceso a la clase política, pero no sustancialmente este concepto. Durante lustros, la oposición arremetió verbalmente contra la única clase política que existía, la del franquismo; no es extraño que este concepto se haya cargado de connotaciones negativas. Por otro lado, su origen en científicos políticos como Gaetano Mosca, tampoco puede atribuirle una tradición democrática. Mientras se pensó que la ruptura era indefectible para salir del franquismo, se criticó duramente el «aperturismo», el «reformismo» de la clase política del franquismo, que buscaba su sobrevivencia en un sistema más acorde con nuestra situación geográfica y cultural. Luego hubo que pactar, aceptando la reforma, especie de compromiso tácito entre la clase política heredera del franquismo y la oposición antifranquista. Transacción por la que la primera conservaría el poder, organizando las primeras elecciones generales y la segunda se convertiría en la oposición legal, en un nuevo régimen que se compromete a respetar los derechos y libertades fundamentales, las autonomías, así como las reglas del juego democrático. La integración de la oposición en la clase política que hasta ahora habían monopolizado los franquistas, por oportuna y necesaria que haya podido ser —se permitirá que algunos tengamos nuestras dudas sobre el alcance y el modo de su realización—, no podía desencadenar un gran entusiasmo popular, ni proporcionar un prestigio especial a la nueva clase política que resultaba de la fusión de elementos tan heterogéneos.

Las elecciones del 15 de junio fueron posibles gracias a un pacto tácito entre la oposición antifranquista y el ex-franquis-

mo en el poder. La muerte del dictador vació de sentido la línea divisoria entre franquistas y antifranquistas, cuajada en cruenta guerra civil, pero que cuarenta años después había perdido su original crispamiento. El país era otro, otra la coyuntura internacional y las partes contendientes habían aprendido la lección.

Los que cuentan saben que a largo plazo pueden salvaguardar mejor sus intereses en una Monarquía Constitucional que respete las libertades y las instituciones democráticas, que experimentando con soluciones radicales o personalistas, que suelen tener mal fin. Por lo demás, la experiencia de la democracia, que hasta ahora ha tenido la derecha, conservando el poder político y sin haber ni siquiera rozado el aparato estatal del régimen anterior, no tiene por qué incitarles a buscar soluciones de recambio. La izquierda, a su vez, ha repudiado sus viejos maximalismos revolucionarios y tiene, sobre todo, una cosa clara: no repetir los errores que dieron al traste con la Segunda República. Al perder la derecha su fe en el carisma del caudillo, en las soluciones autoritarias y expeditivas, y borrar la izquierda de su horizonte la vía revolucionaria, ha sido posible un compromiso entre los bandos que un día se enfrentaron en la guerra civil. Ambos se encuentran en la afirmación de un régimen democrático, aunque, naturalmente, por tal entiendan cosas muy diferentes.

El pronóstico a favor de un enraizamiento de la democracia en nuestro país, nunca fue en el pasado tan positivo. Y ello, porque esta vez, la democracia la trajo la derecha para dar salida a la crisis política, social y económica que caracterizó a los últimos años de la dictadura en una Europa que, a pesar de la crisis, siente fuertemente arraigadas sus instituciones democráticas y con una izquierda dispuesta a hacer las mayores concesiones con tal de no desestabilizar el proceso.

El reconocimiento del derecho de autonomía a las diferentes nacionalidades y regiones, representa la adquisición más importante. No es que no sepamos valorar lo que significa la garantía de los derechos fundamentales, el pluralismo político o el sistema parlamentario, pero difícilmente cabía imaginar una salida política que no los implicase. Eran brevas maduras, que cayeron con decenios de retraso. En cambio, la reorganización descentralizada del Estado español, dando cabida a las autonomías territoriales, si bien corresponde a nuestra más profunda realidad histórica, que en vano intentaron aplastar siglos de centralismo, lleva consigo un desplazamiento real de poder, frente al que podía esperarse más decidida oposición.

En principio, cabe concebir un régimen democrático con una estructura estatal fuertemente centralizada. Más aún, el modelo típicamente burgués que realiza la Revolución Francesa, conlleva un recio proceso de centralización: el vendaval revolucionario se tragó la diversidad regional de la vieja Francia. El tipo de racionalidad burguesa —cartesiana, mecanicista— es propensa al Estado centralizado. El fortalecimiento del Estado nacional es uno de los factores que más directamente inciden en el desarrollo del capitalismo. La creación de un ejército y un mercado nacional, así como de una infraestructura y de una administración a su servicio, son elementos que convergen en el tipo ideal del Estado burgués.

Sabido es que nuestro centralismo tiene solera: antecede en dos siglos al ascenso de la burguesía como clase dominante. La unión personal de las coronas de Castilla y Aragón realiza muy tempranamente un Estado premoderno, dada su base social en un feudalismo tardío. El nuevo Estado logra aplastar las fuerzas burguesas incipientes de Castilla, y las bastante más desarrolladas de la periferia mediterránea. El centralismo español ha tenido durante siglos un carácter tan netamente antiburgués, que se comprende que las burguesías periféricas que surgen en el XIX, no hayan podido pecar de centralistas.

A la vista de nuestra historia, y después de la política torpemente ultracentralista de la dictadura, cualquier proceso de democratización exige reconocer la realidad múltiple y diversa de las Españas. En este punto, afortunadamente, parece que no hay modo de dar marcha atrás. Si en determinadas circunstancias el Estado nacional centralizado fue objetivo principal de la burguesía ascendente, la clase obrera, en cambio, ha sido siempre internacionalista, a la vez que descentralizadora —autogobierno, autogestión— convencida de que el Estado nacional, como única y última instancia, hace imposible su liberación. La expansión internacional del capital, en fin de cuentas, ha sido la fuerza revolucionaria, capaz de eclipsar al Estado nacional. La integración europea y la descentralización regional, son procesos complementarios, que cuestionan igualmente el monopolio de poder de los viejos Estados nacionales. En sí conforman las dos coordenadas, dentro de las cuales ha de transcurrir el proceso democrático. No cabe, a largo plazo, estabilizar y profundizar la democracia, sin integrar la economía en el Mercado Común, pero tampoco sin ajustar el aparato estatal a los requerimientos de una pluralidad nacional y regional. En todo caso, lo que parece fundamental es plantear la descentralización autonómica desde la perspectiva de la integración europea.

No hace falta insistir en la enorme cantidad de imaginación y de valor que habrá que derrochar para llevar adelante proceso tan difícil y contradictorio. Inmenso es el reto que nos ha lanzado la historia: en el próximo lustro, hemos de crear un Estado moderno, eficiente y descentralizado, capaz de conducirnos a Europa, sin que las inevitables tensiones de la descentralización y de la integración desestabilicen el proceso o le corten las alas democráticas. Hay que enraizar la democracia, haciendo funcionar municipios y gobiernos regionales libres y eficientes, a la vez que fortalecer la economía para que resista su integración en Europa.

3. La derrota de la izquierda

La categoría más frecuente, pero también más imprecisa del vocabulario político, es la de «lo posible». Cabe definir la política como el arte de convertir en realidad lo posible; de ahí, que la primera cualidad del político consista en intuir lo que en cada momento es realmente posible. El que se empeña en conseguir metas «imposibles», se condena al aislamiento y a la ineficacia, los dos grandes pecados del hombre público. Integrarse en la clase política siignifica comulgar con el concepto establecido de lo posible: en la relación de fuerzas dadas en la España posfranquista, el texto constitucional sería el único posible, no cabría alternativa a la forma monárquica del Estado ni a las relaciones capitalistas de producción y, desde luego, el derecho de autodeterminación de los pueblos constituiría un sueño imposible. Ser en la España de hoy republicano, socialista o separatista es negarse a reconocer los límites de lo posible.

Hacer política consiste en topar con los límites de lo posible, para aceptarlos «pisando realidad» o rechazarlos «andándose por las nubes». Cuanto más distante del poder, mayor la capacidad de rechazo, y a la inversa. El que no carga con responsabilidades concretas tiende a extender demasiado los límites de lo posible, cayendo a menudo en un ingenuo voluntarismo. Los políticos establecidos, con un comprensible afán de cobijarse a la sombra del poder, suelen estrechar excesivamente estos límites: nada más peligroso para la carrera personal que danzar fuera del aro.

Para la derecha, las cosas están claras: únicamente el orden socio-económico existente es, a la vez, posible y deseable. Su labor consiste en impedir que las cosas se desmadren, canalizando las demandas sociales por los cauces establecidos. La iz-

quierda, en cambio, que parte de una crítica del orden dado, proponiendo una alternativa global, está obligada a marcar en qué sentido su política de hoy contribuye a los cambios profundos de mañana. Hay que decir que, en este punto, a menudo ha faltado credibilidad a la izquierda parlamentaria. La política de consenso ha obligado a determinar conjuntamente con la derecha los límites de lo posible. Con ello, el juego político se ha reducido a su mínima expresión, favoreciendo a mediano plazo al Gobierno y a las fuerzas sociales y políticas que representa. La izquierda se reconforta de su derrota, alegando que otra política no hubiera sido «posible», a la vez que se escuda en su fe progresista para dar por descontado que el tiempo trabaja a su favor, de modo que la prudencia de hoy servirá para los cambios de mañana.

No hay forma de diseñar una política de izquierda sin tener muy en cuenta los límites de lo posible, pero tampoco sin desentrañar y poner, claramente de manifiesto, los factores limitantes. La determinación de lo posible resulta de un análisis de las fuerzas enfrentadas, así como de sus correspondientes perspectivas. En la necesidad de consolidar la democracia, existe acuerdo entre todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, pero mientras, derecha e izquierda se mantengan fieles a sí mismas, han de entender cosas muy distintas por democracia y, consecuentemente, por el proceso de su consolidación. Cuanto más se identifiquen derechas e izquierdas en reconocer los mismos límites de lo posible, más escasa es la posibilidad de cambio. La política de consenso ha favorecido fundamentalmente a la derecha gobernante.

En las actuales circunstancias, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas en el interior y el modo de nuestra inserción internacional, ¿qué política cabría calificar de socialista? Esperar de los socialistas una política, que manteniendo los pies en el suelo, no deje de constituir una alternativa real a la política que lleva a cabo la derecha en el poder, no es invitarles a que saquen del desván el arcón de viejos mitos revolucionarios. Nada en el fondo más fácil, pero también más inocuo, que una oposición basada en el verbalismo revolucionario: aisla al movimiento obrero en un «ghetto», sin incidir apenas sobre la realidad que pretende transformar. No seremos nosotros los que reprochemos un lenguaje realista y moderado. Dejemos esta queja para una seudoizquierda, fetichista de viejos conceptos y de máximas desfasadas. Ya comprobarán la impotencia asfixiante del radicalismo verbal. Lo único que queremos señalar es la necesidad de una política socialista para la coyun-

tura actual, es decir, una política que se deslinde claramente de una capitalista, por progresista y avanzada que ésta pudiera ser, sin caer, por ello, en un mero radicalismo verbal; una política que, tomando en consideración los condicionamientos, pero también las posibilidades que yacen en el actual proceso de transición, fije los cauces imprescindibles para que el proceso de democratización no se agote en sus formas burguesas. Propugnamos, sencillamente, una política socialista que incluya en el análisis de la realidad y en la toma de decisiones una perspectiva distinta de la inherente al orden socioeconómico establecido; segundo, que esta dimensión del futuro por el que se lucha, se refleja en la política concreta que se hace en el presente.

Para Pietro Nenni, un dilema define al partido socialista que como tal no renuncia a su función transformadora de la sociedad, ni cae en un mero verbalismo revolucionario: el tener que ser, a la vez, un «partido de futuro» que supone en su estrategia un orden social distinto como meta, y un «partido de presente», que asume plenamente la realidad dada y, de alguna forma, se arregla con ella. Sin sumergirse por completo en la realidad y sin un cierto instinto de oportunidad y aún de oportunismo, no hay política que vaya adelante; pero tampoco cabe calificarla de socialista, si no incluye una dimensión de un futuro distinto en las medidas concretas que se tomen aquí y ahora.

Aceptados los cauces de la reforma política y después del éxito alcanzado en las primeras elecciones generales del 15 de junio, el objetivo del PSOE tenía que consistir en provocar la ruptura, llegando al poder lo antes posible. El futuro democrático del país tendría un cariz muy distinto, si la izquierda llevaba a cabo las reformas pertinentes, o si, por el contrario, la democracia se limitaba a legitimar las estructuras de poder heredadas. Si la derecha lograba salvar la crisis de la transición, sin perder el control del aparato del Estado, y es capaz de llevar adelante las reformas desde la perspectiva de sus intereses, podría afianzarse por muchos años. Tal vez pasasen algunas décadas hasta que a la izquierda se le presentase otra oportunidad histórica parecida.

Establecer una estrategia socialista de conquista del poder, para convertir la reforma en ruptura, chocaba con un maximalismo seudoizquierdista, que desconfía de toda política de acercamiento al poder, como una desviación a la derecha, y con un oportunismo simplificador, que creía que el poder llegaría indefectiblemente en la forma de Gobierno de coalición,

y que, por tanto, no habría que saber esperar sin maliciar al futuro aliado. Ambas posiciones resultaron convergentes en la misma dirección de distanciar al PSOE del poder. Los primeros renunciaron de hecho a cualquier forma de lucha por el poder, sin ofrecer otra alternativa que la crítica del oportunismo de los socialdemócratas y la alabanza de los viejos principios inalterables. Los segundos, esperando la coalición, nada querían hacer que pudiera parecer conflictivo o provocador. Pero se trataba, no de compartir el poder con la derecha, sino de intentar arrebatárselo.

Desplazar a la derecha del poder, o por lo menos, del disfrute en solitario del poder, fue el objetivo del PSOE en las pasadas elecciones del 1 de marzo. Medido por este rasero, hay que dejar constancia de la derrota socialista. De poco sirve esconder la cabeza debajo del ala y escurrir el bulto, aludiendo a una indudable consolidación de los resultados, sorprendentemente altos del 15 de junio. Cierto, el PSOE se ha ratificado como el partido mayoritario de la oposición, pero también UCD se ha consolidado como el partido gobernante. Lo grave es que esta situación muy bien pudiera durar muchos años: si extrapolamos las actuales tendencias, UCD gobierna y el PSOE continúa siendo el partido mayoritario de la oposición, pero cada vez a menor distancia de los comunistas y a mayor de UCD. El panorama no es muy esperanzador, para aquél que tenga una mínima sensibilidad política o le importe el porvenir democrático de nuestro país.

Dos cuestiones se imponen. ¿Fue realista y atinada la meta de relevo en el Gobierno, que se propusieron los socialistas? En tal caso, ¿cuáles han sido las causas del fracaso? Lo primero que hay que decir, en el momento de la derrota de la izquierda, es que la estrategia del PSOE, en sus líneas generales, ha sido correcta. Muy poco feliz, en cambio, la forma concreta de llevarla a la práctica. Los años 76 y 77 mostraron que las fuerzas democráticas eran demasiado débiles para cuestionar el orden institucional establecido. No hubo otro remedio que intentar avanzar por los angostos canales que abrió la derecha desde el poder, a la búsqueda de su propia legitimación democrática. El éxito alcanzado por los socialistas el 15 de junio revalidó plenamente esta estrategia: aceptar la reforma, para provocar desde dentro, y con la ayuda de los votos, una ruptura expresada en un cambio de Gobierno. Había que empujar desde el poder las reformas económicas, sociales y administrativas mínimas imprescindibles para que la democracia fuese algo más

que la fachada institucional, que salvaguarda y legitima los intereses de siempre.

El PSOE centró su estrategia en dos objetivos claves que parecían y siguen pareciendo, acertados: primero, Constitución democrática, que no podía ser más que pactada; segundo, tan pronto la Constitución aprobada, obligar al Gobierno a convocar elecciones generales, con la esperanza fundada de que el electorado pasese la cuenta a un Gobierno ucedista que se había caracterizado por su debilidad e ineficacia. Se trataba de cerrar así el proceso de reforma, con el salto cualitativo que hubiera significado un Gobierno socialista.

Se ha conseguido el primer objetivo, que los socialistas compartían con las demás fuerzas políticas de derechas y de izquierdas. Se ha fracasado en el segundo, que contaba con la hostilidad manifiesta de la derecha, lo que es bien natural, y de los comunistas, lo que pudiera ser más sorprendente. En el afán de constreñir al PSOE, haciendo todo lo posible para impedir su crecimiento, han coincidido UCD y PCE. Desde la legalización del PCE en la semana santa de 1977, hasta las últimas elecciones generales, no poco se explica por la comunidad de intereses ucedistas y comunistas por cerrar el paso a una alternativa socialista. A nadie ha podido sorprender que la derecha camaleónica española emplee todos los medios a su alcance —y son muchos y muy fuertes— para impedir el que el proceso de reforma hubiera implicado un cambio de verdad, llevando al PSOE al Gobierno; más llamativo y digno de atención es la actitud de una izquierda que gira en la órbita del PCE, empeñada también en impedir la única alternativa de izquierda que, a corto plazo, aparecía en el horizonte. La contradicción que ha marcado al PCE consistía en negar, en las circunstancias de la transición, la posibilidad de una alternativa de izquierdas a la política de UCD, y criticar, por otro lado, al PSOE, porque no sería esta alternativa. El objetivo manifiesto del PCE es que continúe la derecha mandando —cualquier otra opción se reputó desestabilizadora— con la esperanza de que cubriéndola los flancos se consiga una cierta respetabilidad y hasta influencia, cuando no —oh, sueño imposible— aprovechando la crisis, colocar un ministro comunista en un Gobierno ideal de concentración. Por lo menos, en un punto clave, la derecha gobernante y el PCE están plenamente de acuerdo: en este país, y por mucho tiempo, ha de seguir gobernando la derecha, a ser posible en feliz convivencia con la izquierda, combatiendo ambos cualquier perspectiva de «alternativa de poder» que se presente a corto plazo. Cierto que un Gobierno PSOE no hubiera

podido ir más lejos de lo que admite el consenso mayoritario de los españoles —y no hace falta ser un profeta para predecir, en su actual estructuración, límites muy precisos—; pero, tomar conciencia del marco real dentro del cual ha de moverse la política española en el próximo decenio, no debiera haber servido de pretexto para minimizar el cambio político que hubiera implicado un Gobierno socialista en un momento crucial de afianzamiento de la democracia y de reestructuración descentralizada del aparato del Estado.

En el fracaso de hacerse con el poder, nada más finalizado el proceso constitucional, los factores decisivos han sido dos: la postergación de las elecciones municipales, incluso para después de las generales; el tiempo excesivo de elaboración de la Constitución, que ha prolongado —y extendido a todas las esferas— el necesario consenso, reduciendo y desprestigiando la actividad parlamentaria. Sería muy difícil el dilucidar la responsabilidad que estos dos hechos —menos en el primero que en el segundo— incumbe a la dirección socialista, aunque en ninguno de los dos queda libre de culpa. En todo caso, no pienso que la fórmula acertada en el período de transición hubiera sido un Gobierno de coalición UCD-PSOE. Si la política de consenso ha desgastado, como era de esperar, más a los socialistas que a la derecha, la coalición hubiera aún incrementado exponencialmente el deterioro de imagen de los socialistas, con el riesgo evidente de que, de haberse formado un Gobierno de coalición, éste hubiera durado hasta el término de la legislatura en 1981, y para esas fechas ya nos habríamos quedado sin partido socialista.

Los dos fallos de exclusiva responsabilidad del PSOE, que en gran parte explican la derrota, se remontan al XXVII Congreso. El primero y fundamental, radica en el verbalismo revolucionario, cuando no confusión sibilina, que emerge de muchos de sus documentos. Cierto que respondía a la situación de un partido que salía de la clandestinidad, con demasiada «acumulación ideológica» y muy poca experiencia, pero ello, no justifica esa mezcla de marxismo mal asimilado, que encubre la falta de un análisis de realidad y de metas razonables a mediano plazo. Se pueden mencionar, sin duda, partes mejores y algunas, incluso, muy aprovechables, pero, en general, las ponencias aprobadas en el XVII Congreso cavaron un foso insalvable entre doctrina y realidad, que trajo consigo un distanciamiento creciente entre militancia y dirección. En efecto, cuanto más confusas, utópicas o contradictorias las resoluciones aprobadas en un Congreso, más grande el margen de acción

de la Ejecutiva, pero también más se aleja de la base, en cuanto los textos programáticos configuran el marco de referencia para enjuiciar la actividad de la dirección. A los afiliados al PSOE no les resulta difícil comprobar la distancia considerable que existe entre lo aprobado y lo realizado, pero a poco que esten avisados, también comprenden las razones de estas diferencias.

El segundo fallo hay que buscarlo en la política personal que siguió el núcleo de poder mayoritario. Lejos de integrar a las distintas corrientes de opinión, eligiendo en la Comisión Ejecutiva a las gentes más capaces de que disponía el partido, por un falso principio de homogeneidad, se cooptó a los amigos más seguros y leales, de buena voluntad, pero, a menudo, sin dar la talla política e intelectual que cabía esperar de dirigentes de un partido, que pronto iba a tener que aspirar al Gobierno. La consecuencia más grave fue una concentración excesiva de poder en los pocos dirigentes que, por dar la medida, tuvieron que acumular un exceso de tareas. Esta acumulación de funciones, en muy pocas personas ha sido un factor nada despreciable de la derrota: además de difundir, dentro y fuera del partido, una imagen poco atractiva, el trabajo parlamentario y consensual acogotó el más importante de implantación social del partido.

Si la derecha puede mantenerse mucho tiempo en el poder con un raquítico aparato electoral —las estructuras de poder real la sostienen permanentemente—, un partido de izquierda que no eche raíces en la sociedad, puede sufrir descalabros imprevisibles. La izquierda no puede detentar ni siquiera un poder institucional, mientras su poder se reduzca al que le proporciona su posición en las instituciones. Para los socialistas, el camino no va desde el Estado a la sociedad, sino a la inversa, y su poder real es el que provenga de la solidaridad organizada de las clases dominadas.

INDICE

Este libro se terminó de imprimir el día
24 de marzo de 1980, en los talleres
de Tordesillas, Organización Grá-
fica, Sierra de Monchique, 25,
Madrid-18

OTROS TITULOS

DE LA

BIBLIOTECA POLITICA TAURUS

1. **Leyes Constitucionales (españolas y extranjeras)**, 2 vols.
7. **Actas de las Cortes de Cádiz** (Selección de Enrique Tierno Galván), 2 vols.
8. Manuel Colmeiro: **Historia de la Economía política en España**, 2 vols.
16. Gonzalo Anes: **Las crisis agrarias en la España moderna** (segunda edición).
18. José María Gil-Robles: **Discursos parlamentarios (1931-1936).**
20. A. Jiménez-Landi: **La Institución Libre de Enseñanza. I: Los orígenes.**
21. José Manuel Castells: **Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídico-administrativo (1767-1965).**
22. Víctor M. Arbeloa: **Socialismo y anticlericalismo.**
22. Mariano y José Luis Peset: **La Universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal.**
24. Santiago Petschen: **Iglesia-Estado, un cambio político (Las Constituyentes de 1869).**
25. Fernando de los Ríos: **Escritos sobre democracia y socialismo.** (Ed. de Virgilio Zapatero.)

26-27. **Historia parlamentaria del socialismo: Julián Besteiro.** Tomos I y II (Ed. de Fermín Solana).

28-29. Antoni Jutglar: **Pi y Margall y el Federalismo español.** Tomos I y II.

30. J. L. Aranguren, J. Benet, C. J. Cela, J. M. Gil-Robles, J. Gorkin, R. Gullón, P. Laín Entralgo, L. Rosales, R. Serrano Súñer, F. Solana y otros: **Dionisio Ridruejo, de la Falange a la oposición.**

31. Antonio López Pina y Eduardo L. Aranguren: **La cultura política de la España de Franco.**

32. Rodrigo Bercovitz: **La marginación de los locos y el Derecho.**

33. Varios autores: **El exilio español de 1939.** Tomo I: **La emigración republicana de 1939.**

34. Varios autores: **El exilio español de 1939.** Tomo II: **Guerra y política.**

35. José María Gil-Robles: **La Monarquía por la que yo luché. Páginas de un Diario (1941-1954).**

36. Varios autores: **El exilio español de 1939.** Tomo II: **Revistas, pensamiento, educación.**

37. Varios autores: **El exilio español de 1939.** Tomo IV: **Cultura y literatura.**

38. **Constituciones españolas y extranjeras.** (Edición y estudio preliminar de Jorge de Esteban.) 2 vols.

39. José María Gil-Robles y Nicolás Pérez-Serrano: **Diccionario de términos electorales y parlamentarios.**

40. Varios autores: **El exilio español de 1939.** Tomo V: **Arte y ciencia.**

41. Varios autores: **El exilio español de 1939.** Tomo VI: **Cataluña, Euzkadi, Galicia.**

42. Antonio-Miguel Bernal: **La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen.**

43. Ignacio Sotelo: **El socialismo democrático.**

44. Francisco Fernández Ordóñez: **La España necesaria.**

Antología de escritores políticos del Siglo de Oro (Ed. de E. Tierno Galván).